



Universidad  
Carlos III de Madrid

**Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos**

**Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”**

**Curso académico 2016-2017**

***Trabajo de Fin de Máster***

**“Protección internacional a las mujeres con discapacidad frente a la violencia sexual en la  
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”**

**Alana Micaelle Cavalcante Carvalho**

**Director:**

**Rafael de Asís Roig**

**Getafe, junio de 2017**

Palabras clave: discapacidad, género, violencia sexual, discriminación interseccional, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo analizar la protección a las mujeres con discapacidad ante la violencia sexual garantizada por los documentos normativos de las Naciones Unidas, en particular el marco legal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las mujeres con discapacidad están expuestas a un riesgo específico de sufrir violencia sexual, oriundo de la coexistencia en el mismo individuo de las características mujer y persona con discapacidad en una sociedad “anormalfóbica”. Se examinan las observaciones finales y las listas de cuestiones elaboradas por el Comité responsable del monitoreo de la aplicación de la Convención, para analizar la frecuencia de la expresión violencia sexual en estos documentos y averiguar el relieve que el Comité dedica al tema y sus recomendaciones a los Estados Partes en cuanto a las medidas para la eliminación de ese tipo de violencia.



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada**

## **ABSTRACT**

The present dissertation aims to analyze the protection against sexual violence of women with disabilities guaranteed by the legal documents of the United Nations. In particular, the legal framework of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Women with disabilities are exposed to a specific risk of suffering sexual violence, stemming from the coexistence of the condition of being a woman and a person with disabilities in an “anormalphobic” society. The research examines the concluding observations and the lists of issues developed by the Committee responsible for monitoring the implementation of the Convention. The purpose is to analyze the frequency of the expression sexual violence in these documents and to verify the emphasis the Committee offers to the issue and its recommendations regarding the measures to fight against this type of violence.

## **RESUMO**

O presente trabalho tem por objetivo analisar a proteção às mulheres com deficiência contra a violência sexual conferida pelos documentos normativos da ONU, em especial o arcabouço legal da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. As mulheres com deficiência estão expostas a um risco específico de sofrer violência sexual, advindo da coexistência em um mesmo indivíduo das condições de mulher e de pessoa com deficiência em uma sociedade "anormalfóbica". Faz-se um exame das observações finais e das listas de questões elaboradas pelo Comitê responsável pelo acompanhamento da aplicação da Convenção, de modo a analisar a incidência da expressão violência sexual nesses documentos e averiguar o destaque que o Comitê oferece ao tema e suas recomendações aos Estados Partes quanto às medidas de combate a esse tipo de violência.

## AGRADECIMIENTOS

Esta investigación no es resultado de un trabajo individual. En realidad, es fruto de la labor de muchas manos que, cada una a su manera, me guiaron hasta aquí. El Máster que ahora concluyo empezó, para mí, mucho antes de septiembre de 2015. Empezó con mi inquietud de descubrir el mundo compaginándola con mi deseo de ser académica y se concretizó con mi decisión de seguir mis estudios en España.

Gracias al apoyo de mi madre y mi padre, esto ha sido posible. Si la decisión de cruzar el Atlántico nunca es fácil, ellos la hicieron sencilla apoyándome desde el inicio y deseando para mi futuro lo mismo que yo. Llego hasta aquí gracias a ellos y a mis hermanos, que me han demostrado que 8.000 kilómetros no son nada cuando, después de meses de *saudade*, vienen los mejores abrazos y las mejores risas.

Mis amigas y amigos de Brasilia, siempre presentes, me enseñaron a olvidarme de las cinco horas de diferencia horaria a cambio de una buena charla y que los amigos no se alejan si hay WhatsApp y ganas de mantener la convivencia de siempre. Además, me hacen sentir especial en cada regreso a casa. Atocha ESA, UnBlindos y Pipas, sois los mejores.

Desde que inicié mi jornada en Madrid, he ido coleccionando experiencias y amistades que me hicieron sentir, desde el minuto uno, en casa.

Empiezo con Carlos, a quien podría agradecer las horas dedicadas a la revisión de este texto, la ayuda con el no siempre amigable *word* y las respuestas a mis incansables preguntas sobre cómo se dice tal o cual palabra en castellano. Sin embargo, no haré nada de esto, pues sería poco y me dejaría lo más importante: gracias por estar siempre juntos.

Agradezco también a las personas cuya amistad empezó en 2015 y seguirá mucho más tiempo. Ju, Vero, Alejo, Naiara y Claudia, gracias por todo, cada uno con su manera belezinha de ser.

Centrándome ya en la experiencia de escribir el TFM, inicialmente me gustaría agradecer a mi director Rafael de Asís la disponibilidad, el interés y el apoyo para realizar la presente investigación. Agradezco también a la Universidad Carlos III de Madrid y sus docentes por el aprendizaje y, en particular, por la oportunidad de realizar una estancia de prácticas de verano en el comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en Ginebra. Representados por el Secretario del Comité, Jorge Araya, agradezco a todos los miembros del comité, que compartieron sus conocimientos conmigo y me

hicieron inmergir en el mundo de la discapacidad desde una perspectiva no solo académica, sino también práctica.

Además, agradezco al Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional de España, en especial a Luis Pomed y a mis compañeros becarios, por la compañía diaria, el incentivo a la investigación, las sugerencias a este trabajo y, como no, a la vasta biblioteca que utilicé con ahínco para la revisión bibliográfica de este trabajo.

Finalmente, y de manera especial, recuerdo a los que tomaron su tiempo en leer y aportar críticas y sugerencias a este trabajo, lo que ha contribuido a ese texto y a mi experiencia investigadora: Carlos, mi padre Edvaldo, Gabriel, Juliana, Lara y Verônica, muchas gracias.

## **LISTA DE ABREVIATURAS**

CDPD – Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas

CEDAW – Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (por su sigla en inglés)

OIT – Organización Internacional del Trabajo

OMS – Organización Mundial de la Salud

ONU – Organización de las Naciones Unidas

UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por su sigla en inglés)

UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por su sigla en inglés)

## ÍNDICE

<b>CONSIDERACIONES INICIALES .....</b>	<b>7</b>
Introducción.....	7
Justificación del tema .....	10
<b>CAPÍTULO I: UN ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE LOS DERECHOS HUMANOS.....</b>	<b>14</b>
1.1. La violencia sexual contra las mujeres con discapacidad a partir de casos concretos.....	14
1.2. El significado social de ser mujer y persona con discapacidad.....	27
1.3. La discapacidad a partir de los modelos utilizados para comprenderla.....	36
1.4. La discapacidad en el marco de los derechos humanos.....	41
<b>CAPÍTULO II: UN ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA CONVENCIÓN DE LA ONU.....</b>	<b>48</b>
2.1. Los derechos de las personas con discapacidad en la ONU .....	48
2.2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.....	53
2.2.1. Construyendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.....	54
2.2.2. La Convención como un cambio de paradigma .....	59
2.2.3. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .....	64
2.3. El enfoque de la ONU al género y la discapacidad .....	68
2.3.1. Los derechos de las mujeres con discapacidad en la ONU.....	68
2.3.2. El enfoque de género en la Convención .....	71
2.3.3. El enfoque de la ONU a la violencia contra la mujer .....	76
2.3.4. La Observación General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad.....	80
<b>CAPÍTULO III: UN ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS DOCUMENTOS DEL COMITÉ A LOS ESTADOS .....</b>	<b>85</b>
3.1. Análisis de los documentos elaborados por el Comité a los Estados Partes.....	85
3.1.1. Análisis de las listas de cuestiones .....	86
3.1.2. Análisis de las observaciones finales.....	93
3.1.3. Conclusiones a partir del análisis de los datos.....	108
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>113</b>
<b>ANEXO .....</b>	<b>117</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>122</b>

## CONSIDERACIONES INICIALES

### Introducción

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (de aquí en adelante, Convención o CDPD), aprobada el 13 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 3 de mayo de 2008, representa, hasta el momento, la mayor conquista jurídica internacional del movimiento de las personas con discapacidad. La Convención es el resultado del reconocimiento de la importancia de esas personas y de la necesidad de garantizarles una protección especial en el ámbito del Derecho Internacional, considerando su historial de vulneración de derechos y las políticas públicas que ignoran sus demandas específicas.

La aprobación de la Convención motivó un mayor debate público sobre temas como la eliminación del lenguaje peyorativo, la accesibilidad, el acceso a la justicia y la educación inclusiva. Sin embargo, otras cuestiones aún no han recibido relieve semejante, como es el caso de la violencia sexual contra mujeres con discapacidad. Discutir sobre ese asunto es, en sí mismo, un tabú social, lo que dificulta el debate. Sumándole a esa cuestión el elemento de la discapacidad, el resultado puede reflejar los prejuicios y estigmas que la sociedad deposita tanto en las mujeres víctimas de violencia sexual como en las mujeres con discapacidad.

Ante esto, la concienciación social sobre el tema desde la perspectiva de los derechos humanos parece ser el camino más adecuado para promover un mayor debate sobre el asunto sin estigmatizar o culpabilizar a la víctima. Desde ese enfoque, la presente investigación pretende desvelar la violencia sexual contra mujeres con discapacidad a través del análisis, por un lado, de los motivos que ocasionan un riesgo específico de ser un blanco para ese tipo de violencia y, por otro lado, de la protección ofrecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para enfrentar el problema.

Con ese fin, en el primer capítulo se analizará el riesgo específico que sufren las mujeres con discapacidad a partir de casos concretos de violación sufridos por ellas, asociándolos a la bibliografía revisada. Se ha optado por seleccionar casos reportados en noticias de los últimos años de periódicos de distintos países y en artículos académicos

especializados, debido a que la violencia sexual es un tema sensible y, en consecuencia, difícil de abordar en entrevistas personales.

Se pretende demostrar que el público objetivo de la investigación no solo está expuesto a las condiciones y riesgos que padecen las demás mujeres, sino que también puede experimentar situaciones que, en general, las demás mujeres no viven, y que pueden conllevar la violencia sexual, como los casos de violación en instituciones de internamiento o perpetrada por cuidadores personales. En consecuencia, esas situaciones parecen incrementar el peligro de que las mujeres con discapacidad sufran violencia sexual.

Se ha elegido empezar la investigación tratando los casos concretos por entender que estos ilustran la situación de violencia a que están expuestas las mujeres con discapacidad, ofreciendo herramientas para comprender, desde el inicio del trabajo, la relevancia del tema. Además, a partir de los casos, resulta más fácil entender desde qué punto de vista –de los derechos humanos y de la no culpabilización de la víctima– parte esta investigación.

Seguidamente, se abordará la discriminación interseccional y el rol ejercido por las mujeres con discapacidad en la sociedad, una experiencia afectada por la interconexión entre la discriminación oriunda tanto del hecho de ser mujer como del hecho de ser persona con discapacidad. A partir del desarrollo de estos conceptos, en el capítulo uno se abordará la importancia de tratar la discapacidad desde la perspectiva del modelo social y de los derechos humanos.

Posteriormente, en el segundo capítulo se realizará un análisis del objeto de estudio desde el punto de vista internacional, en el ámbito de la ONU. Este se dedicará a comprender los instrumentos que dan la Convención y otros documentos publicados en el seno de las Naciones Unidas para proteger a la mujer con discapacidad frente a la violencia sexual. En ese sentido, se analizará por qué la CDPD representa un cambio de paradigma en el enfoque de la discapacidad y se hará un recorrido histórico de los derechos de las personas con discapacidad en la ONU.

En segundo lugar, el referido capítulo expondrá un examen sobre el proceso de construcción de la CDPD, especialmente en torno a la inclusión del género en el texto y



los instrumentos disponibles en la Convención para proteger a las mujeres con discapacidad ante la violencia sexual. Además, en el segundo capítulo se dialogará con la labor de otros comités de la ONU, especialmente el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW, por su sigla en inglés), en lo que concierne a la protección contra la violencia sexual.

Tras esto, se efectuará un análisis cuantitativo y cualitativo de los documentos elaborados por el Comité que tratan la violencia sexual, incluyendo aquellos redactados a cada Estado Parte posteriormente a las reuniones con el Comité en Ginebra. Desde esa perspectiva, el objetivo de esta investigación es analizar de qué modo la CDPD trata la violencia sexual. Para esto, se examinará el texto de la Convención, la “Observación General n° 3: mujeres y niñas con discapacidad”, que aborda el tema, las observaciones finales (*concluding observations*) del Comité a cada Estado Parte y las listas de cuestiones (*list of issues*) enviadas a cada Estado por el Comité con una serie de contenidos que deben ser abordados en las respuestas del Estado.

Se ha optado por centrar la investigación en los documentos elaborados por el Comité, en vez de incluir los informes de los Estados y de la sociedad civil enviados a este, porque la intención del análisis es averiguar la postura del Comité y, consecuentemente, de la ONU, y no la situación específica de cada Estado en lo que concierne a la violencia sexual contra mujeres con discapacidad. Interesa aclarar que, al incluir tanto las listas de cuestiones como las observaciones finales en los documentos a ser examinados, se garantiza un estudio amplio de la documentación elaborada por el Comité a cada Estado Parte.

En vista de ello, se averiguará en el tercer capítulo la frecuencia de menciones a la expresión violencia sexual y correlatos en las observaciones finales y en las listas de cuestiones del Comité a los Estados Partes, para averiguar si el Comité destaca la cuestión. Por último, se examinará el contenido de las observaciones finales en las que se mencionó el asunto, para verificar cómo el Comité lo trata. Se pretende, con estos datos, realizar un análisis crítico de la protección ofrecida a la mujer con discapacidad ante la violencia sexual en los documentos y normativas del Comité.

### Justificación del tema

El siglo XX representa un marco para los derechos humanos, con un incremento de este tema en la agenda internacional y con el reconocimiento de la necesidad de implementar acciones eficaces para su promoción, que resultaron en la creación de las Naciones Unidas. Desde el fin del pasado siglo, la comunidad internacional se ha concienciado de que un sistema de protección a los derechos humanos que no considera las especificidades de cada colectivo no es suficiente para proteger de igual modo a todos los individuos.

Algunos colectivos enfrentan dificultades específicas de participar en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, por ser víctimas de discriminación e invisibilidad o rechazo social, pese al reconocimiento de sus derechos de modo genérico. Asimismo, para garantizar los derechos a todos de modo pleno y eficaz, se hizo imperativo elaborar tratados centrados en las necesidades de algunos de estos colectivos, como las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad<sup>1</sup> –este ya en el siglo XXI– para luchar contra la mayor vulneración de derechos que sufren.

Este cambio hacia la especificación de los derechos ha sido importante para dar visibilidad social a estos grupos. En el caso de las personas con discapacidad, son muchas sus necesidades específicas que merecen una atención especial de parte de los Estados y de los estudiosos. Entre ellas, se ha elegido abordar la violencia sexual por ser una cuestión que aflige a las mujeres con discapacidad, pero que no se debate ni se investiga de modo suficiente. Como afirma María Soledad Cisternas Reyes (2014, p. 38), la violencia contra ellas “ha estado en un manto oculto”. La presente investigación pretende contribuir al debate acerca de la violencia sexual contra la mujer con discapacidad pueda desvelarse.

---

<sup>1</sup> Es importante resaltar que el término discapacidad es considerado peyorativo por una parte de los activistas e investigadores, por ser asociado a una limitación, restricción (Palacios y Romañachí, 2006, p. 106). Por consiguiente, optan por utilizar la expresión diversidad funcional. Pese a la relevancia de sus argumentos, esta investigación será desarrollada en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y, por tanto, utilizará el término discapacidad a lo largo del presente trabajo, en consonancia con la terminología utilizada en las Naciones Unidas. En la Convención, se define a personas con discapacidad como: “[...] aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. También cumple aclarar que la nomenclatura utilizada en documentos oficiales anteriores a la CDPD fue mantenida en su versión original.

Además, esta investigación busca realzar el aspecto primordialmente social de la discapacidad y de la visión negativa hacia el género, lo que motiva acciones discriminatorias contra las personas con discapacidad y contra las mujeres. Como aporta María del Pilar Cruz Pérez (2012, p. 63), muchas investigaciones centradas en las mujeres con discapacidad adoptan un discurso victimista, definiéndolas como pasivas y mostrando la discriminación como inherente a la condición de mujer y persona con discapacidad. En este trabajo, por el contrario, se pretende resaltarlas como sujetos de derechos merecedores de leyes y políticas públicas que atiendan sus necesidades y les permitan conquistar su espacio en la sociedad en igualdad de condiciones en relación con los demás, viviendo una vida libre de violencia.

Una dificultad enfrentada durante la investigación ha sido la escasez de referencias bibliográficas que traten específicamente sobre la violencia sexual contra mujeres con discapacidad. Comúnmente, las investigaciones que lo tienen como objeto de estudio pertenecen al campo de la salud (Dickens, Gizlice, Kupper, Martin, Moracco, Ray, Sotres-Alvarez, Howland, Hugues, Nosek, 2006, entre otros) y no se estudia el tema de modo suficiente en ninguna rama del conocimiento. Esa dificultad no se restringe al ámbito de la violencia sexual, abarcando la violencia contra personas con discapacidad de modo general. Como afirma Miguel Ángel Verdugo Alonso (2012, p. 5), al consultarse la bibliografía especializada en maltrato a personas con discapacidad, la conclusión que se extrae es la de estar ante un campo de investigación disperso, escaso y, con frecuencia, carente de rigor científico.

En realidad, el problema de la escasez de datos y estadísticas va más allá del ámbito de la violencia. Incluso la cantidad de personas con discapacidad en el mundo se trata de una estimación. Según datos del “Informe mundial sobre la discapacidad” (Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, p. 27), de 2011, alrededor de un 15% de la población mundial está formada por personas con discapacidad. En el informe se relata la dificultad de obtener datos que puedan reflejar con fiabilidad la cantidad de personas con discapacidad en el mundo, pues cada país, al promover encuestas sobre eso, lo hace definiendo la discapacidad y elaborando las preguntas según sus propios criterios, sin que haya una garantía de homogeneidad de la información.

Con la aprobación de la CDPD, hubo un incremento de las encuestas centradas en las personas con discapacidad o que transversalizan el tema. Una de ellas es el “Informe sobre Violencia de Género hacia las Mujeres con Discapacidad a partir de la Macroencuesta 2015”, publicado por la Fundación CERMI Mujeres en febrero de 2017. La encuesta revela que un 31% de las mujeres con discapacidad declaró haber sufrido algún tipo de violencia cometida por su pareja, y que un 8,5% de las entrevistadas fue víctima de violencia de carácter sexual<sup>2</sup> (CERMI, 2016, pp. 38 y 41). Sin embargo, iniciativas de ese tipo, además de no producirse de modo sistemático en muchos países, aún no han sido suficientes para crear una referencia sólida de datos sobre el asunto<sup>3</sup>. Esta es una de las razones por las que la violencia sexual debe ser más abordada en investigaciones académicas.

La dificultad de obtener datos estadísticos fiables acerca del índice de mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual o sobre el riesgo de sufrirlo se hizo evidente al identificar, a lo largo de la investigación, datos inconsistentes, sin referencia o en contradicción con datos de otras encuestas. Según diferentes estudios, existe un riesgo cuatro veces mayor para las mujeres con discapacidad de sufrir violencia sexual en relación con las demás mujeres (Unión Europea, 2004), o tres veces mayor (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Español, 2007, p. 38), o entre dos y once veces mayor (Milberger, Israel, LeRoy, Martin, Patchak-Schuster y Potter, 2003, p. 581).

Sandra Martin *et al* (2006, p. 824) justifican esa escasez de información en virtud de que hay pocos documentos que demuestran que las mujeres con discapacidad están bajo un mayor riesgo de sufrir violencia sexual porque no suele haber comparación de datos entre las estadísticas obtenidas para las mujeres con discapacidad y para las mujeres sin discapacidad.

---

<sup>2</sup> La macroencuesta entrevistó a 442 mujeres con discapacidad en España.

<sup>3</sup> Esto ocurre incluso en España, como concluyó el “Informe sobre Violencia de Género hacia las Mujeres con Discapacidad a partir de la Macroencuesta 2015”: “Numerosas publicaciones en la materia constatan que las mujeres y niñas con discapacidad son olvidadas en la mayoría de los estudios y estadísticas que se desarrollan sobre violencia, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo que a modo de resumen se puede concluir que a pesar de la incipiente normativa en materia de violencia de género y discapacidad, no se cuenta en España con ningún estudio significativo que aporte conocimiento y magnitud vinculando exclusivamente ambas realidades, disponiendo por tanto de estadísticas parciales.” (CERMI, 2016, p. 90).

Otra dificultad es la ausencia de una definición única sobre qué caracteriza un delito de violencia sexual. Si hay una variación del concepto según cada país, los datos estadísticos referentes a ello consecuentemente sufrirán variaciones. Lo mismo ocurre con el propio concepto de discapacidad. Como afirman Esther Raya y Neus Caparrós (2013, p. 196), realizar comparaciones de datos referentes a la discapacidad es un desafío, en virtud de las diferencias entre los sistemas nacionales en lo que se refiere a la recogida de información y a la nomenclatura.

Todo esto demuestra la importancia de investigar sobre la violencia sexual contra mujeres con discapacidad, dando una mayor visibilidad a cuestiones que preocupan a ese colectivo y tratando su protección desde la perspectiva de los derechos humanos. Con esta premisa, la presente investigación surgió por la motivación de dar una respuesta al planteamiento de cuál es la relevancia que se da a la violencia sexual en los documentos normativos de la ONU.

Desde otra perspectiva, teniendo en cuenta el aniversario de los diez años de la Convención en 2016 y sus diez años de vigencia en 2018, este parece constituir un momento acertado para desarrollar el tema. Asimismo, se realizará un balance de la contribución de la Convención y su Comité, hasta el momento, a la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad en materia de protección contra la violencia sexual.

Una estancia de prácticas de verano en la sede del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, responsable del monitoreo de la aplicación de las normas de la Convención, hizo posible que esta investigación fuese construida asociando la perspectiva teórica al aspecto práctico, pues, al acompañar las reuniones del Comité con algunos de los Estados Partes, se pudo comprender de modo más profundo el funcionamiento y el rol desempeñado por el Comité, así como ver los desafíos concretos enfrentados por este al monitorear la aplicación de la Convención.

Por ello, la investigación a ser desarrollada a continuación refleja no solo el conocimiento adquirido a partir del estudio del asunto, sino también el intercambio de experiencias con personas con discapacidad, activistas y los expertos y demás miembros del Comité durante la estancia.

## CAPÍTULO I: UN ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SEXUAL DESDE LOS DERECHOS HUMANOS

### 1.1. La violencia sexual contra las mujeres con discapacidad a partir de casos concretos

La violencia sexual<sup>4</sup> es un tipo de violencia frecuente que atemoriza a las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier país, contexto social y contra cualquier perfil de mujer. Esta forma parte del espectro de la violencia de género, entendida como la violencia física o psicológica practicada contra una mujer por cuestiones directamente asociadas a su género (Banchs, 1996, p. 14). Las distintas formas de violencia de género, incluso la de carácter sexual, son un tipo de violencia directa que se asocia a la desigualdad entre la mujer y el hombre, al origen estructural de la violencia<sup>5</sup> y al abuso de poder.

En el caso específico de la violencia sexual, la víctima es utilizada para la satisfacción sexual del agresor sin su consentimiento, con o sin el uso de violencia física, pudiendo ejercerse a través de intimidación, coerción, chantaje, manipulación, amenaza u otros mecanismos que anulen o limiten la voluntad personal de la víctima (Adesse y Souza, 2005, p. 20).

Cuando la víctima de violencia sexual es una mujer con discapacidad, ese tipo de violencia puede suceder en situaciones que las demás mujeres no suelen vivir, como la violencia sexual sufrida en instituciones de internamiento, perpetrada por personas responsables de sus cuidados o contra víctimas que no pueden ver al agresor o moverse.

---

<sup>4</sup> Para la Organización Mundial de Salud (OMS), la violencia sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumir un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

<sup>5</sup> En esta investigación, se entiende que la violencia sexual se ubica en un contexto de violencia estructural, según el cual se producen daños en el bienestar, identidad, libertad u otras necesidades humanas básicas como resultado de la estratificación social. La estratificación social pone en evidencia la existencia de un conflicto entre dos o más grupos sociales por razones de género u otras y resulta en el perjuicio de un o más grupos específicos en relación con los grupos que se hallan en la cima de la estratificación social (La Parra, Tortosa, 2003, p. 57). La expresión fue utilizada por primera vez por Johan Galtung en su obra “*Violence, Peace and Peace Research*” (1969).

Estos aspectos permiten anticipar que, pese a que la violencia sexual pueda ser practicada contra cualquier mujer, las causas específicas que pueden estar asociadas a la violación contra mujeres con discapacidad demuestran la necesidad de que se realicen estudios centrados en la realidad enfrentada por ellas ante esa amenaza<sup>6</sup>.

El estudio acerca de la prevalencia de violencia sexual en mujeres con discapacidad es un área aún poco explorada por las Ciencias Sociales. Hasta finales del pasado siglo, había incluso incredulidad de parte de la comunidad académica y activista de que ese tipo de violencia pudiese ser preocupante. En ese sentido, relata María Barile, activista canadiense, que, al dar una ponencia sobre el tema por primera vez, a principios de los años ochenta, representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de mujeres, profesionales sanitarios y miembros del Gobierno presentes reaccionaron con escepticismo: “¿Por qué alguien querría violar a una mujer con discapacidad?” (Barile, 2002, p. 5, traducción libre)<sup>7</sup>. Este escepticismo revela que, en ese momento, no estaba claro que la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad fuera una amenaza grave y frecuente y que, por tanto, debiera ser enfrentada.

Un instrumento importante para comprender mejor la dimensión del problema y las situaciones de violencia sexual que puede enfrentar el colectivo son los casos concretos, que retratan la situación de violencia enfrentada por las mujeres con discapacidad. Para ello, se han seleccionado algunas noticias divulgadas en la prensa internacional y una publicada en un artículo especializado sobre mujeres con discapacidad víctimas de violación para ilustrar la teoría a ser desarrollada a continuación.

---

<sup>6</sup> Es importante aclarar que esta investigación no considera que las mujeres con discapacidad son un grupo homogéneo. Como indica Pilar González Rams (2011, p. 2.737) “[l]as mujeres con discapacidad no son un colectivo homogéneo, sino que configuran un grupo muy diverso que experimenta las múltiples desigualdades de diferentes maneras y desde la diversidad de sus vivencias”. Pese a esto, en virtud del objeto de estudio, esta investigación se centrará de modo general en el binomio mujer y discapacidad y en sus experiencias como mujeres con discapacidad, incluso en lo que concierne a la violencia sexual. Por ello, no se resaltarán elementos que afecten a cómo cada individuo vive su experiencia, como su condición financiera, nacionalidad y edad, pues no forma parte de los objetivos de la presente investigación analizar la influencia de estos aspectos sobre la discriminación y la violencia sexual que las mujeres con discapacidad pueden sufrir.

<sup>7</sup> La expresión traducción libre, en esta investigación, hace referencia a traducciones elaboradas por la autora a partir de los textos en su versión original. En la nota al pie de página, constará la versión original de lo que ha sido traducido. En el original: “Why would anyone want to assault a disabled woman?” (Barile, 2002, p. 5).

En el caso I, un hombre de 24 años de Estados Unidos fue detenido acusado de violar a una mujer de 47 años, con discapacidad intelectual y que no puede moverse o comunicarse verbalmente. La víctima vivía en un centro de internamiento para personas con discapacidad, donde trabajaba el encausado, responsable de cuidarla personalmente. El delito fue descubierto por uno de los empleados del centro, responsable de la vigilancia del local. El centro de internamiento no supo informar sobre si otras pacientes también habían sufrido violación y tampoco por cuanto tiempo la víctima sufrió abusos sexuales (Shuterly, 2015).

En el caso II, una pareja de Irlanda del Norte fue enjuiciada por violar a una mujer con discapacidad intelectual durante más de una década. Ambos admitieron ser culpables del delito y afirmaron en el juicio ser conscientes de que, debido a la discapacidad intelectual, la víctima difícilmente podría expresar su recusa al acto. Los agresores se valían de eso para perpetrar sus crímenes durante ese largo tiempo, sin levantar sospechas (Higgins, 2016).

Muchas veces la mujer con discapacidad –o, en el siguiente caso, la niña– no está protegida ni bajo los cuidados de su propia familia, en cuyo seno también puede prevalecer una sensación de impunidad. En el caso III, en Brasil, una mujer ofreció a su novio la virginidad de su hija de 14 años, con discapacidad intelectual y visual. El delito de violación fue descubierto en el colegio de la víctima, debido a su cambio repentino de comportamiento. La madre confesó el delito y dijo que no imaginaba que el caso generaría tanta repercusión, mientras que su novio negó el crimen (Melo, 2016).

La violación a mujeres con discapacidad también puede generar otro tipo de violencia, además de la de carácter sexual, y esta ocurre con la connivencia de los familiares y mediante autorización judicial: la esterilización forzosa. Es lo que se relata en el caso IV. En este caso, padres españoles pidieron judicialmente la incapacitación legal de su hija de 19 años, con discapacidad intelectual, con el objetivo de someterla a una esterilización forzosa<sup>8</sup>. La decisión ocurrió después que la hija se quedara embarazada tras

---

<sup>8</sup> En el referido caso, los padres requieren la esterilización forzosa para su hija porque las leyes españolas lo permiten, tal y como lo establece el artículo 156 del Código Penal Español: “No será punible la esterilización



haber sido violada. La joven sufrió un aborto forzado y ahora los padres esperan la decisión judicial que podrá permitir la esterilización forzosa, pues, según la madre “¡Por dios! Ella no está preparada para ser madre. No puede ni cuidarse a sí misma”, añadiendo que “A mi niña la violaron aprovechándose de su discapacidad y se quedó embarazada. Hemos tomado la decisión correcta. Es lo mejor para la niña y para nosotros” (De la Cal, 2016).

Por último, en el caso V<sup>9</sup>, ocurrido en Australia, la víctima, con discapacidad intelectual, denunció una violación cometida contra ella por un vecino suyo. El agresor dejó clara su intención y, como relata la autora del artículo, por creer que no tenía otra alternativa, la víctima se tumbó en la cama para que el agresor hiciese lo que quería y se fuera, pese a no quererlo. Indica la autora que, para la víctima, –no sin razón–, la violación significa tener una acción sexual con alguien sin su consentimiento, y ella no lo consintió. Sin embargo, la policía no registró su denuncia por considerar que la víctima había consentido el acto sexual (Philips, 1996, p. 159).

Esta mujer también había sido víctima de incesto, que tampoco fue investigado. En virtud de haber llevado algunos años hasta que supiese que padres y hermanos no tienen el derecho de hacerle ese tipo de cosas, ella no pudo ofrecer muchos detalles, por lo que la policía consideró que su testimonio no era suficientemente claro para llevar a cabo una investigación (Philips, 1996, p. 159). Este caso demuestra la dificultad de acceso a la justicia enfrentada por las mujeres con discapacidad al intentar denunciar una violencia sexual y del descredito de la sociedad en relación con lo que expresan.

Se observa que los cinco casos presentados poseen muchas similitudes entre ellos. A grandes rasgos, es posible notar que los autores de la violencia se aprovechan de su posición de guardia o cuidado hacia la mujer con discapacidad para cometer su delito. Es lo que ocurre en el caso I, en el que el agresor es cuidador personal de la víctima; en el caso

---

acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.” El referido artículo es contrario al artículo 23, inciso c, de la Convención, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Véase: Serra, 2015.

<sup>9</sup> Diferentemente de los demás casos, el caso V no fue seleccionado a partir de un reportaje en la prensa, sino a partir de un artículo escrito por la trabajadora social Julie Philips, en el que relata casos de violencia sexual de algunos clientes suyos, entre ellos el caso elegido para ilustrar esta investigación. Véase: Philips, 1996.

III, en el que la encausada es la madre de la víctima, actuando al lado de su novio; en el caso IV, en el que la esterilización forzosa es solicitada judicialmente por los padres de la mujer con discapacidad; y en el caso V, en que uno de los delitos sexuales fue cometido por el padre y el hermano de la víctima.

Para sostener el análisis de los casos concretos presentados, se utilizarán las categorías de violencia propuestas por María Soledad Arnau Ripollés (2005, p. 43). La violencia a que se hace referencia puede tener distintas vertientes, como sexual, física o que viola la libertad de elección de la mujer, como el aborto y la esterilización realizados de modo forzoso. La autora divide la violencia practicada contra la mujer con discapacidad en tres ámbitos: doméstico, cuando se practica en el entorno familiar, por parejas, cónyuges o familiares; social, cuando perpetrada por personas de su entorno social o incluso desconocidos en la calle; e institucional, cuando la violencia se comete dentro de instituciones, como centros de día o residencias.

A partir de esa sistematización, se concluye que el caso I es un ejemplo de violencia institucional; el caso II, de violencia social; y los casos III y IV de violencia doméstica. Pese a que, en el caso III, el agresor no fuese familiar de la víctima, la violación ocurrió en un contexto doméstico y debido a la connivencia de su madre. En el caso V, en lo que concierne al vecino, es un caso de violencia social y, en lo que se refiere a sus familiares, una violencia doméstica.

Los casos analizados indican que las mujeres con discapacidad pueden no estar seguras ni en la presencia de aquellas personas en las que más confían, sus familiares y cuidadores personales. En general, cuando la violencia sexual es cometida por personas externas al seno familiar y social, son los parientes y amigos los primeros en identificar las señales de que la mujer con discapacidad sufrió violencia y apoyarla ante el trauma. Sin embargo, cuando el peligro adviene de la propia casa y su entorno, es más difícil identificar el delito. Esto puede conllevar la impunidad de los agresores, caso la víctima necesite el auxilio de otras personas para denunciar el delito.

Otro elemento que facilita la impunidad de los responsables de violaciones es su creencia en el silencio y en la dificultad de la víctima de tomar decisiones, como ocurre en

los casos II y III. En el primero de ellos, los encausados admitieron haberse aprovechado de la discapacidad intelectual de la víctima, que, según ellos, la impediría de rechazar la violencia, para cometer el crimen. En el otro caso, la madre de la víctima no creía en la repercusión de la violación, posiblemente confiando en el silencio de su hija. Adicionalmente, se destaca la falta de formación de la policía para lidiar con denuncias de personas con discapacidad, como en el caso V. Esto refuerza la imagen prejuiciosa de que estas no son fiables y no deben ser creídas, además de imponerles una gran barrera al denunciar, un momento que, en sí mismo, puede ser bastante difícil.

La comprensión de la violencia, no solo de carácter sexual, contra las mujeres con discapacidad no puede ignorar que la sociedad es “anormalfóbica” (Pié Balaguer, Riu Pascual, 2014, p. 52) y construye imágenes sociales prejuiciosas de las mujeres con discapacidad como mujeres inferiores, incompletas o que no saben tomar sus propias decisiones. Los valores sociales en vigor se construyeron utilizando como referente la idea de que el concepto de “normal” significa la ausencia de discapacidades (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Español, 2007, p. 16), lo que genera como consecuencia tratar a estas mujeres con horror, pena, caridad o violencia, considerando este tipo de actitudes formas legítimas de relación o tratamiento.

Esto contribuye a comprender qué causas llevan a las mujeres con discapacidad a ser un blanco para la violencia, incluso la de carácter sexual. Los motivos apuntados en distintas investigaciones pueden ser divididos en categorías, según el contexto que se asocia a cada factor que conlleva una mayor susceptibilidad a la violencia sexual. Las categorías conciernen a aspectos que pueden estar más asociados al agresor o al entorno físico o familiar de la mujer con discapacidad.

Debe ponerse de manifiesto que, con estas categorías, no se quiere imputar la culpa o parte de ella por la violencia sexual a la familia o al ambiente de la víctima –el único culpable por el delito es el agresor–. Por el contrario, como será desarrollado, los motivos presentados no son inherentes a la familia de la mujer con discapacidad o su entorno, sino que influyen en los estereotipos negativos que los agresores construyen de la víctima. Asimismo, la división en categorías tiene el propósito de desmenuzar los factores que

contribuyen a que los agresores refuercen su percepción de que las mujeres con discapacidad son un blanco en potencial para la violencia sexual<sup>10</sup>.

Entre los elementos estrictamente relacionados con el agresor, están: a) las percepciones estereotipadas y erróneas que posee sobre las mujeres con discapacidad, que le hacen creer que estas son incapaces de tomar sus propias decisiones y de presentar una denuncia y ser creídas, originando una sensación de impunidad (Díaz Funchal, 2013, pp. 88 y 95); b) su percepción de que ellas son menos resistentes a la violencia (Junta de Andalucía, sin fecha, p. 14); c) su percepción de que el cuerpo de la mujer con discapacidad es como una “mercancía dañada” (Caballero Pérez, 2016, p. 109); y d) su posición de autoridad y cuidado en relación con la víctima, en el caso de ser su cuidador o familiar (Ramiro, 2005, p. 41).

En relación con el entorno físico y familiar en que vive la mujer con discapacidad, se encuentran: e) la vivienda o estancia de algunas en entornos que facilitan la acometida de violencia, como instituciones de salud; f) el aislamiento y la exclusión de la sociedad a que algunas mujeres con discapacidad están sometidas (Ramiro, 2005, p. 41); g) la sobreprotección familiar, tratándolas como eternas niñas y privándoles de educación sexual (Benedet y Grant, 2014, pp. 142-143); y h) las dificultades que las mujeres con discapacidad enfrentan al intentar denunciar el agresor (Díaz Funchal, 2013, p. 95).

El aspecto “a” –sobre las percepciones estereotipadas que posee el agresor sobre mujeres con discapacidad, que pueden generarle una sensación de impunidad– llama la atención para la imagen negativa que tiene el agresor de la mujer con discapacidad. Esto puede incluir también la idea errónea de que hace un favor a la víctima –por intentar justificar sus actos en el hecho de que nadie más se interesaría en ella– o intentar

---

<sup>10</sup> Amy Elman (2005, p. 2) subraya el peligro de hacer generalizaciones sobre el riesgo más elevado que la mujer con discapacidad sufre de ser víctima de violencia sexual, pues estas conforman un grupo heterogéneo, y lo que puede ampliar el riesgo para una puede no ejercer efecto semejante en relación con otra. Consciente de esto, la presente investigación tiene la intención de traer a la discusión distintos motivos que pueden aumentar la posibilidad de que la mujer con discapacidad sea víctima de violencia sexual. Aunque algunos no sean válidos para todas ellas, se ofrece un panorama general de la situación de cara a intentar alcanzar un mayor número de supuestos. En vista de ello, pese a que los casos concretos analizados se refieran a mujeres con discapacidad intelectual, elegidos por ilustrar mejor la teoría a ser desarrollada, las categorías que se presentan amplían los contextos en los que puede ocurrir la violencia sexual, incluyendo experiencias que pueden ser vividas por mujeres con los demás tipos de discapacidad.

desacreditar la historia de la víctima si lo cuenta a alguien, confiando en su mayor credibilidad social y dificultando que la mujer con discapacidad sea creída (Gobierno Vasco, 2012, p. 37).

También contribuye a la sensación de impunidad que tiene el agresor la dificultad que enfrentan las mujeres con discapacidad de acceder a la justicia, que se refleja en las barreras experimentadas para denunciar un delito y seguir con una demanda judicial. Estas advienen de la denegación a muchas mujeres con discapacidad –como aquellas con discapacidad intelectual– de ejercer sus derechos autónomamente y de la manifestación, en el ámbito legal, de prejuicios que construyen una imagen negativa de la mujer con discapacidad en su posición de sujeto de derechos (Carignano y Palacios, 2012, p. 43).

Sobre el aspecto “b” –sobre la percepción del agresor de que las mujeres con discapacidad son menos resistentes a la violencia– Elman (2005, p. 6) afirma que los violadores suelen elegir sus víctimas buscando aquellas que creen ser más indefensas y vulnerables. Al depararse ante una mujer con discapacidad, el agresor puede suponer que ella se adecua a esas características, debido a la imagen victimizada que la sociedad construye en torno a las personas con discapacidad (Arnau Ripollés, 2005, p. 44).

En relación con “c” –sobre la percepción del agresor de que el cuerpo de la víctima con discapacidad es una “mercancía dañada”– Isabel Caballero Pérez (2016, p. 109) señala que, socialmente, los casos de violación cometidos contra mujeres con discapacidad son considerados un ataque a un bien jurídico de menor valor, debido al mito de que el cuerpo de la mujer con discapacidad es como algo imperfecto que puede ser agredido y mutilado. Esto tiene una relación directa con la presunción social de que cuerpo femenino es un objeto del que se puede disponer<sup>11</sup>, lo que banaliza la violencia (Almeida, 2016, p. 127). En consecuencia, el cuerpo de las mujeres con discapacidad sería, así como el de las demás mujeres, un objeto, pero imperfecto y, por tanto, inferior.

---

<sup>11</sup> La objetificación del cuerpo femenino puede ser observada en distintos ámbitos. En lo que concierne a esta investigación, Karen Giffin (1994, p. 153) sostiene que la violación es una demostración de objetificación de la mujer, pues, en estos casos, el agresor ejerce control y fuerza sobre el cuerpo de la víctima para su placer sexual a través de una violencia que representa tratar al otro como un objeto. Para saber más sobre la teoría de la objetificación del cuerpo femenino, véase: Fredrickson y Roberts, 1997.

En una asociación de los aspectos “d” y “f” –asociados a la posición de autoridad que ejerce el agresor y el aislamiento social de la víctima– María López González (2007, pp. 151-152) indica que muchas veces las mujeres con discapacidad que viven en situación de aislamiento y exclusión social y son víctimas de violencia de parte de un cuidador o familiar sienten miedo a denunciar y con ello romper con el contacto social o los cuidados que recibe del agresor.

En lo que se refiere a “e” –sobre la vivienda en instituciones de internamiento–, si una mujer con discapacidad frecuenta mucho o vive en instituciones de salud, sus referentes masculinos no se restringen a su padre, hermano, novio, amigos o vecinos, sino que incluyen también a cuidadores personales, asistentes sociales, médicos, psicólogos, entre otros. Muchos de ellos realizan actividades que exigen un contacto íntimo, además de ejercer una relación de poder y jerarquía sobre la víctima, lo que puede incrementar la posibilidad de sufrir abusos (Gobierno Vasco, 2012, p. 37).

En cuanto al aspecto “g” –sobre la sobreprotección familiar–, investigaciones demuestran (Howland, Hugues y Nosek, 2001, p. 480) que las mujeres con discapacidad tienen menos oportunidad que las demás de aprender qué les gusta o no sexualmente y establecer límites en cuanto a eso. Al ser tratadas como niñas y sobreprotegidas, muchas veces no están autorizadas por sus familias a salir de noche, tener pareja o vivir su sexualidad y disponer de su propio cuerpo y así reconocer qué es apropiado y qué no lo es en una relación consentida.

Por último, sobre el aspecto “h” –sobre las dificultades al intentar denunciar el agresor–, cabe señalar que los obstáculos para denunciar una violación y ser creída son enfrentados por las mujeres de modo general, pero que, al tratarse de mujeres con discapacidad, esa dificultad puede intensificarse. Esto ocurre por la asociación entre lo que puede ocurrir con las mujeres independientemente de su discapacidad –como la presunción de que la mujer está inventando el delito (Barros, Jorge-Birol, 2007, p. 7)– con construcciones sociales negativas más asociadas a las mujeres con discapacidad, como la idea de que estas no pueden expresarse de modo coherente (Díaz Funchal, 2013, p. 95).

Igualmente, Janine Benedet y Isabel Grant (2014, p. 134) indican que una de las dificultades de las mujeres con discapacidad de denunciar proviene del apoyo que necesitan para hacerlo. Esto se convierte en un problema cuando su interlocutor no trata la violencia sufrida como un delito, la minimiza, o considera que es mejor no exponer a la víctima a un proceso judicial, desincentivándola a denunciar. Estas actitudes contribuyen a la disminución de los índices de denuncias, la impunidad de los agresores y son un incentivo para que se sigan cometiendo delitos de carácter sexual.

Cabe resaltar que algunos autores (por ejemplo, Brownridge, 2006; Howland *et al*, 2001) indican motivos para la violencia sexual que son asociados a las propias mujeres con discapacidad, como su nivel de dependencia, el tipo de discapacidad de que se trata o la percepción negativa que tiene de sí misma. Sin embargo, en esta investigación se comparte la visión defendida por Jennifer Mays<sup>12</sup> (2006, p. 152) de que, pese a que estos elementos puedan tener influencia en la percepción que el agresor tiene de la víctima, enfatizar aspectos individuales singulariza las causas de violencia sexual y disminuye el peso del real culpable de la violación –el agresor–, al mismo tiempo que refuerza estereotipos nocivos a la lucha contra la violencia sobre las mujeres, como la culpabilización de la víctima<sup>13</sup> y la marginalización de las mujeres con discapacidad. En vista de ello, los referidos aspectos no serán objeto de estudio en esta investigación.

Para romper con la culpabilización y marginalización de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia sexual, Miriam Arenas Conejo (2015, p. 374) sostiene que se debería desviar el foco de causas individuales de la violencia y centrarlo en

---

<sup>12</sup> Véase: Mays, 2006.

<sup>13</sup> Para autores como Douglas Brownridge (2006, pp. 807-808), examinar los motivos asociados a las mujeres con discapacidad que conllevan la violencia sexual no representa una culpabilización de la víctima. Al contrario, defiende que omitir esta clase de motivos lleva a la conclusión, errónea en su opinión, de que la víctima individualmente no tiene el poder de reducir el riesgo de sufrir violencia sexual. Sin ignorar el debate teórico en torno al esto, la idea defendida en esta investigación es la de que esa argumentación representa un refuerzo a la culpabilización de la víctima, por imputarle la carga o parte de ella de evitar una violencia sexual cuyos orígenes no provienen de cuestiones que puedan ser cambiadas individualmente. Además, contribuye para promover una autoimagen negativa de la víctima, que puede sentirse culpable por la violencia al no haberla impedido. Por todo ello, el desarrollo de ese análisis en la presente investigación ocurre a partir del enfoque de que todas las mujeres tienen derecho de gozar de una vida libre de violencia sexual, independientemente de sus circunstancias personales.

condiciones históricas y sociales que refuerzan la discriminación y contribuyen a reforzar y perpetuar la violencia.

Si el feminismo logró que la violencia sexual dejase de ser tratada como una cuestión privada y coyuntural, independiente de la ropa o del comportamiento de la víctima, las teorías de análisis de la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad también pueden lograrlo.

Todo ello conlleva comprender que los aspectos aquí desarrollados, por sí solos, no hacen que la mujer con discapacidad se encuentre en una posición de mayor susceptibilidad a la violencia sexual, pero pueden afectar o conducir las acciones delictivas de los agresores, debido al refuerzo del estigma social que existe en torno a la mujer con discapacidad (Philips, 1996, p. 157)<sup>14</sup>. En consecuencia, ellas no son, en sí mismas, más susceptibles a sufrir violencia sexual, sino que la sociedad está basada en estructuras y aspectos culturales, institucionales y jurídicos que facilitan que este tipo de violencia ocurra con mayor predominancia en determinados grupos (CERMI, 2013, p. 63), entre ellos el de las mujeres con discapacidad.

Tras haber analizado las causas y el contexto asociados a la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad, es importante reflexionar sobre las consecuencias que pueden recaer sobre ellas después de haber sufrido ese tipo de violencia. Una de ellas ocurre en el caso IV, con el intento de esterilizar forzosamente a la mujer con discapacidad víctima de violación. Para María Laura Serra (2015, p. 84), cuando la familia o representante legal de una mujer con discapacidad opta por esterilizarla, esa decisión significa ocultar una

---

<sup>14</sup> Como definido por Erving Goffman (1982, p. 7 y 12), el estigma es la situación del individuo que está inhabilitado para la aceptación social plena, por un atributo que lo diferencia de aquellos que pertenecen a una categoría en la que pudiese ser incluido. La opción por el uso del término estigma a partir de la definición de Goffman no está exenta de críticas, como la de Mike Oliver (1998, p. 38). Para el autor, la idea de estigma de Goffman se basa más en la percepción del grupo que estigmatiza que del grupo que está siendo estigmatizado, sin ir más allá de la discapacidad como cuestión individual y tragedia personal. Sin embargo, Oliver reconoce que algunos teóricos consideraron la comprensión de la idea de estigma un avance en la manera de comprender la discapacidad como una cuestión social. Pese a estar de acuerdo con Oliver en relación con que Goffman no se profundizó en la crítica a la cuestión social del estigma, sin disociarlo de aspectos individuales, se reconoce la relevancia de sus estudios para la Sociología, lanzando las bases para investigaciones posteriores asociando el estigma social a la discapacidad. Por ello, en este trabajo se utilizará la idea de estigma a partir de la definición de Goffman.



forma de violencia –la sexual– con un acto de violencia –la esterilización sin el consentimiento libre e informado de la mujer–.

Lo mismo ocurre en el caso de que la mujer con discapacidad sea obligada por sus responsables legales a realizar un aborto tras sufrir violación, tal y como ocurrió en el caso IV. Una mujer sin discapacidad tiene garantizado su derecho a elegir sobre realizar o no un aborto de un embarazo derivado de una violación<sup>15</sup>, y no se plantea imponerles la obligación de realizar una esterilización al ser víctima de violencia sexual. A las mujeres con discapacidad, en contraste, se les deniega en muchas legislaciones nacionales el derecho a elegir sobre su vida sexual y reproductiva de manera autónoma (Cruz Pérez, 2012, p. 61), sustituyendo su decisión por la de sus padres o tutores. Esta práctica, así como la esterilización forzada, ocurre de modo oculto pues, al ser legales y socialmente aceptadas, no suelen ser vistas como formas de violencia<sup>16</sup>.

Por consiguiente, la coexistencia de los elementos mujer y persona con discapacidad genera una situación específica de prejuicio y discriminación que puede no suponer la simple suma de ambas discriminaciones, sino su intensificación (González Rams, 2011, p. 2.742), como se desarrollará más adelante. Esto puede provocar consecuencias en distintos ámbitos de la vida de una mujer con discapacidad, y, como se ha podido observar, también en relación con el riesgo de sufrir violencia sexual.

En ese sentido, un estudio realizado con 11 mujeres con discapacidad de distintas provincias de España<sup>17</sup> y su percepción sobre la violencia demuestra que estas reconocen el peso de las consecuencias específicas y más intensas asociadas a la coexistencia de los

---

<sup>15</sup> Con esta afirmación, se hace referencia a los países en los que el derecho al aborto en caso de violación está reconocido legalmente.

<sup>16</sup> Esta, sin embargo, no es la perspectiva de la Convención, que, como se ha mencionado, garantiza a las personas con discapacidad el derecho a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. Asimismo, en la “Observación General nº 3: mujeres y niñas con discapacidad”, el Comité recalca que “los Estados partes deben combatir la discriminación múltiple, en particular mediante [...] la derogación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias que impiden que las mujeres con discapacidad disfruten de todos los derechos consagrados en la Convención, [con] la prohibición de todas las formas de esterilización forzada, aborto forzado y control de la natalidad no consensuado”.

<sup>17</sup> En la metodología de la investigación se resalta que en la selección de las entrevistas se buscó tener representados varios tipos de discapacidad, con el objetivo de contemplar el mayor número de características y necesidades particulares que pueden presentar los distintos tipos de discapacidad (Gomiz Pascual, 2014, p. 100).

aspectos género femenino y discapacidad también en el ámbito de la violencia, incluyendo la de carácter sexual (Gomiz Pascual, 2014, p. 100).

El 78% de las entrevistadas cree que la mujer con discapacidad está más expuesta a la violencia sexual que las demás, señalando como razones que propician esto causas semejantes a las previamente mencionadas: la mayor dependencia de otras personas, por razones económicas, emocionales y de cuidado; la falta de acceso a la información; una menor interacción social; y el miedo a romper situaciones afectivas o crear desequilibrios dentro de la familia o de la institución donde se encuentran (Gomiz Pascual, 2014, pp. 100, 106 y 107).

Al ser cuestionadas sobre a quién pueden acudir en el caso de ser víctima de violencia, la respuesta más frecuente fue que la mujer con discapacidad se enfrenta sola la violencia, por no querer ser una carga para la familia, por tener escasa relación con el entorno o por no tener información suficiente sobre qué medidas adoptar (Gomiz Pascual, 2014, pp. 106-107). La investigación resalta que a esto se suman las trabas arquitectónicas y socioeconómicas que las mujeres con discapacidad tienen que enfrentar para lograr denunciar la violencia y recibir apoyo profesional (Gomiz Pascual, 2014, pp. 106-107). Por ello, muchas de las entrevistadas relataron que, al denunciar situaciones de violencia, intentan ocultar su discapacidad. Otras, a su vez, no han intentado denunciar por pensar que no serían creídas o por haber tenido una mala experiencia respecto a eso (Gomiz Pascual, 2014, p. 108).

Es posible que las dificultades enfrentadas por las mujeres con discapacidad al intentar denunciar una violencia sean una de las razones por las que las estadísticas sobre la frecuencia de violencia sexual en ese colectivo sean contradictorias, considerando que muchas mujeres dejan de denunciar y algunas investigaciones se basan solamente en denuncias concretas y otras incluyen estimaciones. Lo cierto es que el número real de mujeres con discapacidad que han sido víctimas de violencia sexual es superior al número

de denuncias interpuestas, siguiendo la tendencia que se presenta cuando las víctimas son las demás mujeres<sup>18</sup>.

A partir del análisis desarrollado en este apartado, es posible concluir que son muchas las dificultades enfrentadas por las mujeres con discapacidad de acceder a la protección contra la violencia sexual y a los mecanismos de denuncia de este crimen, y que no siempre estas dificultades coinciden con las enfrentadas por las demás mujeres. Por tanto, estas están expuestas a un riesgo específico de sufrir violencia sexual y, por ende, deben recibir una protección específica, no resultando suficiente la elaboración de leyes y políticas públicas que no consideren la discapacidad.

Una de las herramientas para concienciar a los Estados sobre la importancia de incluir la discapacidad en todas las políticas públicas que conciernen a las mujeres –y, especialmente, las de lucha contra la violencia sexual– es dar espacio y voz a estas mujeres, observando su percepción de la violencia, sus miedos, necesidades y demandas, rompiendo con la invisibilidad social a que suelen estar sometidas.

## 1.2. El significado social de ser mujer y persona con discapacidad

Para comprender mejor los desafíos enfrentados por las mujeres con discapacidad, no solo en lo que se asocia a la violencia sexual, sino también desde el punto de vista social, es muy importante escuchar sus relatos y entender sus experiencias viviendo en una sociedad que aún no ha logrado incluir plenamente a las personas con discapacidad ni a tratar igualmente a mujeres y hombres.

¿Dónde estoy yo –como mujer con discapacidad– en la cultura general que me rodea? En general, no estoy ahí. Puedo ver la televisión durante años, posiblemente una vida entera, sin ver mi experiencia reflejada en dramas, documentales, periódicos. Podría llevar toda la vida yendo a teatros, bibliotecas, librerías, leyendo periódicos, sin encontrar ningún retrato de la vida de una mujer con discapacidad que represente mi experiencia.

---

<sup>18</sup> En una encuesta realizada en Canadá, se concluyó que, de cien casos de abuso sexual, solo seis son denunciados. Recuperado de <http://www.sexassault.ca/statistics.htm> Igualmente, una encuesta de Estados Unidos revela que la violación es el delito menos denunciado. Recuperado de [http://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications\\_nsvrc\\_factsheet\\_media-packet\\_statistics-about-sexual-violence\\_0.pdf](http://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf)

Puedo intentar afirmar mi existencia viendo programas de televisión “especializados” en discapacidad, producidos por personas con discapacidad, pero relegados a una pequeña parte de la programación, y fuera del *prime time*. Puedo encontrar uno o dos libros (si tengo mucha suerte) en la librería feminista local que refleje mi realidad. Además de eso, si quiero mantener mi confianza en el valor de mi experiencia, debo ignorar firmemente el retrato —o falta de retrato— de las personas con discapacidad en la cultura general. Si no es así, puedo llegar a creer que la definición que el mundo sin discapacidad me ofrece sobre mí y mi vida es la real —y lo que vivo es mera fantasía— (Morris, 1991, p. 57, traducción libre)<sup>19</sup>.

El relato de Jenny Morris refleja el doble desafío de ser mujer y persona con discapacidad en la sociedad actual. Estas no se identifican con el retrato estándar de las personas con discapacidad y luchan contra la invisibilidad social, buscando conquistar un mayor reconocimiento social para cambiar esa realidad.

Además, enfrentan la carga de no corresponder a los papeles sociales tradicionalmente asociados a las mujeres, como los roles de madre, esposa (Gesser, Nuernberg y Toneli, 2013, p. 421) y cuidadora de los demás, nunca de sí misma (Mañas Viejo, 2009, p. 16). Una mujer con discapacidad motora relató que, en su adolescencia, al pasear con su novio, todos suponían que aquel empujándole la silla de ruedas era un familiar suyo, porque no podían concebirla como una joven que atraía a los chicos (Campling, 1979, p. 13).

Mientras que las demás mujeres luchan para romper con el estereotipo de mujer como madre y esposa y demostrar a la sociedad que son libres para elegir los roles que desean ejercer, a las mujeres con discapacidad se les ha denegado el derecho de asumir incluso estos papeles tradicionalmente femeninos, siendo socialmente consideradas inferiores a las demás mujeres.

---

<sup>19</sup> En el original: “Where am I — as a disabled woman — in the general culture that surrounds me? Generally, I am not there. I could watch television for years, possibly a lifetime, without seeing my experience reflected in its dramas, documentaries, news stories. I could spend a lifetime going to theatres, libraries, bookshops, reading newspapers, without finding any portrayal of a disabled woman's life which speaks to my experience. I can try to affirm my existence by watching the ‘specialist’ disability television programmes, produced by disabled people but squeezed into tiny, out-of-peak-viewing time slots. I may discover one or two books (if I'm very lucky) in my local feminist bookshop which reflect my reality. Apart from this, if I want to maintain my confidence in the validity of my experience, I must steadfastly ignore the portrayal or lack of portrayal of disabled people within the general culture. Otherwise, I may come to believe that the non-disabled world's definition of me and my life is the real one — and my reality is mere fantasy.” (Morris, 1991, p. 57).

Se suma a esto que ellas mismas incorporan el discurso y la presión social de que las mujeres deben tener el cuerpo ideal y ser la esposa y madre perfecta. Al darse cuenta de que no cumplen con estos estereotipos, las mujeres con discapacidad son asaltadas por una gran frustración. Esta fue la conclusión de una investigación realizada con ocho mujeres con discapacidad en el sur de Brasil. Se ha podido observar que las entrevistadas se apropiaron de las expectativas socialmente impuestas a las mujeres y, al no identificarse con ese modelo de mujer preestablecido, sufrieron a lo largo de toda su vida (Gesser *et al*, 2013, p. 427).

Esto se refleja en el relato de una joven de 26 años con discapacidad: “Yo nunca pensé que podría tener una pareja, porque quién iba a querer cargar conmigo” (Conde y Shum, 2009, p. 126). Por su declaración, se observa que la entrevistada se considera una carga para los demás, no una mujer con derecho de mantener una relación afectiva. Es posible deducir que la visión social negativa de las personas con discapacidad afectó a la construcción de su identidad, lo que suele ocurrir con muchas mujeres de ese colectivo, influenciadas por el significado social de su imagen (Conde y Shum, 2009, p. 130).

Aseveran Peter Blanck, Douglas Kruse y Lisa Schur (2013, pp. 157-158) que la realidad enfrentada por las mujeres con discapacidad es, en relación con las demás mujeres y con los hombres con discapacidad, de menores niveles de educación y sueldo, mayores tasas de desempleo, soledad, visión social negativa y autopercepción negativa. Igualmente, señalan que, pese a que su estatus social cambie según el país de referencia, es innegable que, en todos, la discapacidad representa un mayor desafío a las mujeres.

Esto se debe a que las mujeres con discapacidad están sometidas, al mismo tiempo y de modo asociado, a la discriminación<sup>20</sup> contra las mujeres y a la discriminación contra las personas con discapacidad<sup>21</sup>. En consecuencia, pueden ser discriminadas por no

---

<sup>20</sup> La discriminación puede ser definida como: “Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en características como raza, color, sexo, lenguaje, religión, política u otra opinión, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estatus, que tenga como propósito o efecto anular o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades por todas las personas, en igualdad de condiciones, de todos los derechos y libertades”. (Makkonen, 2002, p. 4, traducción libre).

<sup>21</sup> Para tratar la discriminación sufrida por motivos de discapacidad, viene tomando fuerza entre los teóricos y activistas de la discapacidad el término capacitismo (en inglés *ableism*), en analogía a los términos racismo y sexismo. Los defensores de su uso argumentan que el lenguaje tiene simbolismo, que nombrar a situaciones

corresponder al patrón de belleza y salud socialmente impuesto, por ser considerada incapaz, etc. Cuando la discriminación es motivada por más de un elemento social presente en un mismo individuo, que se asocian generando una profundización de la discriminación enfrentada por él, se trata de una discriminación interseccional<sup>22</sup>.

Como esclarece Lucas Platero (2014, p. 56), la expresión se refiere a “diferentes fuentes estructurales de desigualdad u organizadores sociales que mantienen relaciones recíprocas”. El autor destaca aún que el concepto de interseccionalidad va más allá de la noción intuitiva de doble o múltiple discriminación, pues las identidades son construcciones dinámicas, conformando nuevas organizaciones sociales y desigualdades.

Es lo que ocurre con la discriminación sufrida por las mujeres con discapacidad. Es decir, las barreras sociales y discriminatorias impuestas a ese colectivo no representan una suma entre las discriminaciones enfrentadas por el hecho de ser mujer y por ser persona con discapacidad, sino que se profundizan, generando una discriminación aún más intensa y específica, interseccional (González Rams, 2011, p. 2.742).

Como aporta Caballero Pérez (2016, p. 103), la teoría de la interseccionalidad aplicada a las experiencias de las mujeres con discapacidad representa una pieza fundamental para construir una base teórica que conecta distintos elementos de estigmatización de las mujeres con discapacidad que, hasta entonces, habían permanecidos invisibles en los ámbitos académico y activista. Como resalta Avtar Brah (2012, p. 14): “aunque el concepto de interseccionalidad es muy reciente, los procesos de interseccionalidad han operado desde hace mucho tiempo”.

---

de discriminación permite de manera más concreta y posible enfrentarlas y que esto es uno de los elementos que contribuyen para el cambio de paradigma del modelo médico de la discapacidad hacia el modelo social. Véase: Harpur, 2009.

<sup>22</sup> Esa expresión fue concebida por Kimberley Crenshaw (1991, p. 1.242) basándose en los elementos de identidad social de género femenino y etnia negra. Sin embargo, actualmente el término es aplicable a cualesquiera dos o más identidades sociales estigmatizadas o discriminadas que se interrelacionan intrínsecamente en un individuo o grupo de individuos, como es el caso de mujer y discapacidad. En esta investigación, se utilizará discriminación interseccional en detrimento de otras expresiones, como doble o múltiple discriminación, pues estas pueden ser entendidas como sinónimo de dos o más fuentes de discriminación y desigualdad que actúan de modo distinto, sin considerar su interconexión en el individuo (Caballero Pérez, 2012, p. 28). Véase: Makkonen, 2002.

La discriminación interseccional se manifiesta en el contexto de discriminación estructural vigente, que representa la identificación de desigualdades de derecho y de hecho derivadas de una situación de exclusión social o de sometimiento de ciertos grupos sociales –como las mujeres y las personas con discapacidad– por otros –como los hombres y las personas sin discapacidad, respectivamente–, en virtud de prácticas sociales, culturales y prejuicios históricos excluyentes (Pelletier Quiñones, 2014, p. 207).

La discriminación interseccional sufrida por las mujeres con discapacidad se observa en la intensificación, desde el punto de vista social, de las características de fragilidad femenina asociadas a ellas. Asimismo, suelen ser más infantilizadas y sobreprotegidas por sus familias que las demás mujeres y que los hombres con discapacidad (Carvalho, Dantas y Silva, 2014, pp. 558-559).

En ese sentido, William Hanna y Betsi Rogovsky (2008, p. 57) teorizan que hay tres aspectos del sistema sociocultural actualmente en vigor que son los más relevantes para comprender la situación de discriminación interseccional<sup>23</sup> en que se hallan las mujeres con discapacidad: el sexismo, la discriminación contra personas con discapacidad y lo que denominan un factor adicional.

El factor adicional es, en realidad, un conjunto de factores que afectan especialmente a las mujeres con discapacidad. Estos son: la inadecuación social debido a la discapacidad, que hace que la persona con discapacidad no esté totalmente integrada en la sociedad; el cuidado de las personas con discapacidad, que se suele atribuir a las mujeres y, en el caso de que sea la mujer quien posee una discapacidad, se considera que ella no está habilitada para cumplir su rol social; y la belleza robada, según el que se suele considerar que las mujeres con discapacidad no se adecuan a los roles de símbolo sexual y pareja (Hanna y Rogovsky, 2008, pp. 57-60).

A partir de la comprensión de la teoría de Hanna y Rogovsky (2008, p. 57), se entiende que las mujeres con discapacidad enfrentan, por una parte, presión social y

---

<sup>23</sup> Pese a que los autores no utilizan la expresión discriminación interseccional, refiriéndose a una suma de discriminaciones y conjunto de factores de discriminación que resultan en relaciones complejas entre sí, se entiende que su teoría se adecua al concepto de discriminación utilizado en esta investigación. Véase: Hanna y Rogovsky, 2008.

discriminación debido primordialmente a estos elementos que, relacionados, generan consecuencias que son sentidas de modo más intenso por las mujeres con discapacidad, al compararse con los hombres con discapacidad o con las demás mujeres.

Por otra parte, la discriminación interseccional también les genera consecuencias en el ámbito de la violencia sexual. Por detrás de ese tipo de violencia se esconde la discriminación interseccional hacia las mujeres con discapacidad, pues ambas condiciones, mujer y persona con discapacidad, asociadas a un mismo individuo, dan lugar a una injusta y silenciada experiencia de abuso de poder (Iglesias, 2005, p. 86). El abuso de poder y la discriminación interseccional pueden ser vividos por las mujeres con discapacidad de distintos modos, y son ejemplos de ello el aborto no consentido y la esterilización forzosa (Ballester, 2013, p. 75), como un abuso de poder de parte de sus padres o tutores.

En definitiva, es crucial tener claro que, al contemplar las vidas de las mujeres con discapacidad y pensar políticas públicas destinadas a ellas, no cabe plantear si su factor determinante es el género o la discapacidad, pues sus experiencias como individuo no son fragmentadas (González Rams, 2011, p. 2.750), sino que mezclan ambos elementos de modo intrínseco, no pudiendo, el uno o el otro, ser desconsiderados al analizar la condición social de la mujer con discapacidad.

Al buscar explicaciones para la discriminación que sufren, las mujeres con discapacidad identifican la estigmatización social hacia ellas y la falta de educación de la sociedad como impulsores de la discriminación, recalcando que la sociedad no conoce ni entiende las necesidades y barreras que enfrentan. De igual modo, tampoco creen que la Administración Pública sea consciente de su situación en la sociedad (Gomiz Pascual, 2014, p. 95), lo que dificulta un enfoque de género y de discapacidad en las políticas públicas, para compensar la situación de desventaja social a que están sometidas.

Se podría pensar que un camino adecuado para romper con las bases de la discriminación interseccional que afecta a las mujeres con discapacidad, dándoles el reconocimiento social y por parte del Estado que merecen, es a través de los movimientos sociales. Los movimientos feminista y de personas con discapacidad actúan desde hace



décadas en nombre de los intereses de aquellos a quienes representan, divulgando su causa mundialmente, y podrían liderar ese proceso.

Sin embargo, la lucha por una mayor visibilidad de las mujeres y de las personas con discapacidad no ha ocurrido conjuntamente, sino más bien ignoró que los aspectos género femenino y discapacidad pudiesen coexistir. Igualmente, no se ha desarrollado de modo amplio un diálogo entre las acciones del movimiento feminista y del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, o al menos una preocupación por destacar a las mujeres con discapacidad en ambos movimientos. En virtud de esa invisibilidad, las mujeres con discapacidad han sido dejadas al margen de los debates y decisiones tanto en los movimientos que defienden los derechos de la mujer como en aquellos en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad (Schumacher, 2014, p. 16).

La mujer con discapacidad se ha mantenido en una posición social de desigualdad más acentuada que aquella ocupada no solo por las demás mujeres, sino también por los hombres con discapacidad (Foro Europeo de la Discapacidad, 2011, p. 7). Además, no se suele sentir plenamente acogida en el movimiento feminista y tampoco en el movimiento de las personas con discapacidad, que deberían actuar como representantes de sus intereses. Una mujer con discapacidad expresa su sensación de exclusión: “Finjo olvidar lo profundamente odiadas que son las personas con discapacidad. Finjo olvidar como esto es verdad incluso en la casa que elegí para mí, que son las comunidades lesbiana y feminista” (Lambert *apud* Morris, 1991, p. 22, traducción libre)<sup>24</sup>.

Al analizar la actuación de los movimientos feminista y de personas con discapacidad, se observa que el primero, de modo general, ha considerado un patrón de mujer que no incluye a las que pertenecen a minorías, como las mujeres con discapacidad. A su vez, el movimiento de la discapacidad se ha centrado en las demandas de un grupo homogéneo, como si la discriminación afectase de mismo modo a todos sus integrantes (Carignano y Palacios, 2012, p. 42).

---

<sup>24</sup> En el original: “I pretend to forget how deeply disabled people are hated. I pretend to forget how this is true even with my chosen home, the lesbian and feminist communities.” (Lambert *apud* Morris, 1991, p. 22).

Gary Albertch (2002, p. 30) critica esa falsa idea de homogeneidad dentro del movimiento de las personas con discapacidad. El autor aclara que no todos sus integrantes se identifican con una identidad común de la discapacidad, socialmente relacionada con personas con discapacidad blancas, privilegiadas y con una discapacidad visible, que son aquellas que lideran el movimiento. Pese a que Albertch no lo menciona, se podría añadir que se asocia al movimiento de las personas con discapacidad una imagen masculina de sus líderes, dejando a las mujeres al margen. Asimismo, esclarece que, cuando esas personas hablan en nombre de las personas con discapacidad, muchos –personas pobres, negras, sin una discapacidad visible y mujeres– se cuestionan si están representados en su discurso. “El poder está relacionado con la representatividad. Si solo algunos están representados en el movimiento, los demás no tienen voz” (Albertch, 2002, p. 30, traducción libre)<sup>25</sup>.

Un proceso semejante se reproduce en el movimiento feminista y genera como consecuencia la invisibilidad de las mujeres con discapacidad en su discurso. Serra (2015, p. 16) indica tres razones por las que las mujeres con discapacidad no están plenamente integradas a la teoría feminista.

La primera se refiere a las metas establecidas por el feminismo. Entre los derechos reivindicados por el colectivo, no se encuentran demandas originadas en el seno de la lucha trabada por las mujeres con discapacidad. Como resalta la autora, esto no significa que las metas perseguidas por el feminismo no valgan para las mujeres con discapacidad. Sin embargo, no suele haber una perspectiva de la discapacidad en las metas.

Otra de las razones es la estrategia del movimiento feminista como teoría homogeneizadora. Esto significa el establecimiento del feminismo como teoría estándar que luego integra a otros tipos de feminismos y, consecuentemente, de mujeres, como el feminismo negro y el lésbico, en oposición al patrón de mujer blanca, heterosexual y sin discapacidad que prevalece en el movimiento feminista (Serra, 2015, p. 24). No obstante, los patrones estándar, en cualquier ámbito del conocimiento, representan un estereotipo, una media y, consecuentemente, contemplan únicamente a una parte de la diversidad

---

<sup>25</sup> En el original: Power is about representation. If only some are represented in the movement, the others are without voice (Albertch, 2002, p. 30).

existente. Es lo que ocurre con las mujeres con discapacidad, que no se identifican con el modelo estándar de mujer. Por tanto, si el feminismo no amplía su discurso para incluir a la diversidad de las mujeres –con discapacidad, mayores, negras–el referido colectivo se siente al margen.

Por último, una razón externa al feminismo, pero que genera desdoblamiento en la exclusión de las mujeres con discapacidad del movimiento, es la invisibilidad. Para Serra (2015, p. 13), existen factores sociales, culturales e históricos que hacen que la discapacidad sea percibida socialmente de modo que propicie su invisibilidad. Estos factores están asociados al juicio discriminatorio de que las mujeres con discapacidad son personas prescindibles, lo que ocasiona una exclusión. Este tipo de discriminación hace que ellas se vuelvan invisibles ante los demás y no se sientan incluidas socialmente.

Por ello, contribuiría a las mujeres con discapacidad y al feminismo que la teoría feminista incorporase la perspectiva de los estudios actuales de la discapacidad. Es lo que propone Anita Silvers (1998, p. 87): incluir en la teoría feminista el aspecto de discriminación interseccional experimentado por las mujeres con discapacidad y englobar en su discurso a todas las mujeres que son discriminadas por múltiples razones, como las mujeres de bajos recursos, negras o migrantes, entre otras.

Al defender que no existe un rol social predeterminado para las mujeres, el feminismo contribuye a formar un sistema de valores que les libera de presiones relacionadas con tener el cuerpo ideal o ser la madre y esposa perfecta, dejándoles libres para estar cómodas como son. Una de las soluciones para integrar la discapacidad dentro del feminismo sería que el movimiento fomentase en su agenda los enfoques más actuales de respeto a la diversidad, debates sobre el cuerpo (Cruz Pérez, 2012, p. 67) y la inclusión de la mujer con discapacidad en el discurso por el fin de la presión social para tener el cuerpo perfecto.

Paulatinamente, se observan avances en ese sentido. Teóricas que interrelacionan feminismo y discapacidad trajeron al debate la importancia del cuidado, la valorización de los cuidadores de las personas con discapacidad –en su mayoría, cuidadoras–, criticaron la generalización de la idea de independencia como algo a ser alcanzado por todas las

personas con discapacidad, investigaron sobre la opresión del cuerpo de la persona con discapacidad y como esto se relaciona con género, edad y etnia (Diniz, 2009, p. 5). Son cuestiones esenciales a todas las personas con discapacidad, pero que se hallaban fuera del orden del día de los teóricos de la discapacidad. La visibilidad de estos temas se debe a teóricas feministas como Eva Kittay<sup>26</sup>, Jenny Morris<sup>27</sup> y Susan Wendell<sup>28</sup>, entre otras.

Una de las metas del feminismo es el fin de patrones físicos y sociales a ser seguidos. Si se incluye a las mujeres con discapacidad como público objetivo de ese discurso, abandonando un ideal basado en la teoría homogeneizadora, se promoverá en las mujeres –con discapacidad o no– un proceso de auto aceptación, un grito de libertad y se agregarán más interesadas en, juntas, cambiar el actual significado social de ser mujer con discapacidad.

### 1.3. La discapacidad a partir de los modelos utilizados para comprenderla

La condición social de las mujeres con discapacidad y, de modo general, de las personas con discapacidad, ha cambiado a lo largo de la historia y, hasta el momento, este colectivo sigue buscando la conciliación entre el reconocimiento de sus derechos y reivindicaciones y su ampliación en la participación social, sin que haya estigmas, prejuicios y discriminaciones.

Al analizar la evolución histórica de las cuestiones sociojurídicas que se refieren a las personas con discapacidad, se observan comprensiones distintas, que los teóricos dividieron en modelos. A cada uno de esos modelos se asocian también diferentes nomenclaturas para referirse a la discapacidad.

Basándose en la división teórica propuesta por Agustina Palacios (2008, p. 37), hay tres modelos para comprender la discapacidad. El primer modelo histórico fue el de la prescindencia, según el cual la discapacidad adviene de causas religiosas, como un castigo divino, y las personas con discapacidad no tienen condiciones de aportar nada a la sociedad.

---

<sup>26</sup> Véase: Kittay, 1999.

<sup>27</sup> Véase: Morris, 1996.

<sup>28</sup> Véase: Wendell, 1996.

En virtud de ello, estos representaban una carga para la familia y la sociedad, siendo marginadas o incluso asesinadas. Por tanto, el concepto de discapacidad prevalente en dicho modelo es el de una condición desgraciada, inherente al individuo debido a un castigo de Dios por un pecado cometido, en general por sus padres (Palacios, 2008, pp. 39-40).

A su vez, el modelo rehabilitador o médico –históricamente posterior– se basa, por una parte, en la discapacidad como una enfermedad que debe ser tratada, para que, a partir del intento de normalización del individuo, él pueda aportar algo a la sociedad, como un reflejo de la ideología de la normalización<sup>29</sup>. No se consideran aspectos sociales para definir la discapacidad, considerada una anomalía. Por otra parte, la comprensión de la discapacidad ya no proviene de la religión, sino de la ciencia y, consecuentemente, la cura de la discapacidad se convierte en un objetivo a ser alcanzado (Palacios, 2008, pp. 66-67). En ese paradigma, las personas con discapacidad son tratadas con conmiseración.

Las mujeres con discapacidad han sentido especialmente la coerción impuesta por el modelo médico por rehabilitarse y adecuarse. Esto se debe a que, al no corresponder al patrón de salud y de belleza vigente, las mujeres con discapacidad eran ubicadas socialmente en un escalón inferior a las demás personas, siendo presionadas por médicos e incluso familiares a “curar esa ‘malformación’ física, por un lado, y la ‘desubicación social’, por otro” (Iglesias, 2005, p. 84).

El rechazo a ambas visiones, especialmente de parte de las personas con discapacidad y sus familias –que demandaban una comprensión de la discapacidad que reflejase su componente sociocultural y resaltase el individuo, no un diagnóstico médico– hizo surgir el tercer modelo, según el cual fueron elaborados los documentos jurídicos internacionales más modernos de protección a la persona con discapacidad (Palacios, 2008, p. 104). Es el modelo social.

De acuerdo con ese modelo, la causa de la discapacidad es preponderantemente social, es decir, la sociedad, al no considerar la diversidad funcional al momento de planear su organización social, impone barreras y limitaciones a los individuos cuyas necesidades

---

<sup>29</sup> La ideología de la normalización está basada en la comprensión de que las personas con discapacidad solo podrán ejercer y gozar de sus derechos si se adaptan al modelo impuesto por la sociedad, que exige que alcancen los requisitos de lo que es considerada la normalidad (Cuenca Gómez, 2012, p. 30).

no fueron consideradas. En ese modelo, la discapacidad no es entendida como una anormalidad del sujeto, sino de la sociedad (Asís Roig, 2010, p. 165). Además, bajo esa visión, queda claro que las personas con discapacidad tienen tanto que aportar a la sociedad como una persona sin discapacidad, si hay inclusión y aceptación de las diferencias entre los individuos (Palacios, 2008, p. 104).

En los modelos anteriores, no existía la idea de discapacidad como mayoritariamente social, dando lugar a una coincidencia entre los conceptos de deficiencia<sup>30</sup> y discapacidad. En el modelo social, esto cambia, habiendo una disociación entre ambos términos. La deficiencia describe aspectos físicos o mentales, se asocia a una limitación y posee una carga peyorativa. La discapacidad, en contraste, refleja las barreras sociales que pueden generar estigmatización (Asch, Blusten, Putnam y Wasserman, 2016), como la falta de adaptación del entorno para adecuarse a las necesidades de las personas con discapacidad. Al separar características físicas o intelectuales del proceso social de la discriminación, el modelo social refuerza que la discapacidad es una cuestión social, no personal (Hugues, 2002, p. 59).

También es posible observar una evolución terminológica en referencia a las personas con discapacidad, según lo defendido en cada modelo. Se observan, incluso en documentos jurídicos, términos peyorativos como minusválidos, impedidos, incapaces o retrasados. Como afirma Jorge Cardona Llorens (2007b, p. 50), esa terminología presenta la carga ideológica de disminuir a la persona con discapacidad, siendo discriminatoria.

Se defiende que la expresión persona con discapacidad, en contraste, destaca la persona antes que la discapacidad, y refleja que la discapacidad es una condición, no lo que la persona es (Cardona Llorens, 2007b, p. 51), en consonancia con el modelo social. No obstante, por envolver una ideología, el lenguaje utilizado para referirse a las personas con

---

<sup>30</sup> Sin olvidar el carácter peyorativo de la palabra deficiencia, se utiliza ese término para explicar la idea de discapacidad tal y como definida en la Convención, como será profundizado en el capítulo siguiente.

discapacidad recibe nuevas propuestas y críticas, como la elaborada por los defensores de la expresión diversidad funcional<sup>31</sup>.

La teoría del modelo social también recibe críticas, y el feminismo es responsable de algunas de ellas. Una muy relevante se refiere a que la construcción de la teoría del modelo social fue guiada por una agenda establecida por hombres con discapacidad y no por la simultaneidad de las experiencias de mujeres y hombres, manteniéndolas al margen del proceso. En consecuencia, cuestiones como el derecho a la sexualidad, el cuestionamiento de imágenes estereotipadas sobre una madre y la maternidad, entre otros, no fueron priorizados (Lloyd, 2001, p. 716). Pese a esto, se reconoce que el modelo representa una gran conquista para las personas con discapacidad.

A los modelos de la discapacidad descritos por Palacios cabe añadir dos otros modelos, surgidos posteriormente al modelo social. Uno de ellos es el modelo de integración, también llamado bio-psico-social, que asume una perspectiva integradora de los modelos médico y social. Ese modelo asocia los tres ámbitos en los cuales se puede manifestar la discapacidad, el biológico, el personal y el social. Según ese modelo, la discapacidad sería una cuestión social y personal, que no necesita solamente atención médica y rehabilitadora, sino también apoyo para la integración social (Jiménez Lara, 2007, p. 190).

El último modelo agrega elementos al modelo social. Es el llamado modelo de diversidad. Según ese modelo, la discapacidad es vista de modo semejante al modelo social, pero considera que esta no representa una limitación, algo malo, independientemente de tener orígenes sociales o individuales. De ese modo, la persona con discapacidad es una persona diversa a otra, y esa diversidad debe ser considerada un aporte a la sociedad. Por tanto, “la política pública en materia de discapacidad debe tener como objetivo hacerla desaparecer, sin que ello suponga hacer desaparecer, necesariamente, la deficiencia.” (Asís Roig, 2009, p. 312).

---

<sup>31</sup> Como se ha presentado en la justificación del tema de la investigación, el uso de la expresión diversidad funcional en detrimento de persona con discapacidad es propuesto por autores como Palacios y Romañachi (2006).

El modelo de diversidad posee muchas similitudes en relación con el modelo social, entre las que se destacan: un concepto amplio de discapacidad, que no se refiere a un diagnóstico de un porcentaje de deficiencia, y un rechazo a la idea tradicional de dignidad humana, basado en las capacidades y en el papel social de las personas, que entiende que, cuantas más capacidades y aportaciones a la sociedad, más dignidad posee el sujeto (Asís Roig, Barranco Avilés, Cuenca Gómez y Palacios, 2010, p. 16).

Incluso los modelos más coherentes para analizar la discapacidad presentan un fallo, que es la ausencia de perspectiva de género en los análisis de la discapacidad. Las investigaciones en Ciencias Sociales que tratan los diferentes modelos no suelen resaltar los recortes de edad, sexo y condición social, ni tratar cuestiones de género, transmitiendo la impresión de que las personas con discapacidad son un grupo homogéneo, ignorando su individualidad y diversidad. Una mujer con discapacidad entrevistada por Iglesias (2005, p. 84) hace una crítica a este proceso: “Concebida como un todo compacto, objeto exclusivo de estudio, conflicto al que dar soluciones, la discapacidad nos ahoga e ignora como individuos. Al ignorarse la individualidad, se obvia, también, nuestro género”. Esto se refleja en los escasos ejemplos y referencias a mujeres en la bibliografía que trata de los modelos de la discapacidad.

Pese a esto, el modelo social y el modelo de diversidad son los más adecuados para abordar la discapacidad, por rechazar la idea de que la discapacidad es una cuestión individual que debe recibir tratamiento para que la persona pueda normalizarse. Sin embargo, en la sociedad siguen existiendo reflejos de los dos modelos anteriores, especialmente el modelo médico. Una demostración de esto es la discriminación sufrida por las personas con discapacidad, asociada a la idea de que deben buscar tratamiento para adecuarse a la sociedad.

El análisis de los modelos de la discapacidad permite concluir que el modelo social representa un cambio de paradigma en la comprensión de la discapacidad, incluyéndola definitivamente en el discurso de los derechos humanos. Para ello, el enfoque se centra en la dignidad de las personas con discapacidad, que ejercen el protagonismo en la toma de decisiones que les afecte y exigen del Estado la responsabilidad por derrumbar los



obstáculos físicos, cognitivos y sociales que les impiden de estar en igualdad de condiciones en relación con los demás (Degener y Quinn, 2002, p. 14).

#### 1.4. La discapacidad en el marco de los derechos humanos

El cambio paradigmático proporcionado por el modelo social de la discapacidad, al tratar la discapacidad como una construcción social<sup>32</sup> (Degener y Quinn, 2002, p. 14), ha ofrecido nuevas herramientas para la lucha contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad. Además, esa nueva comprensión de la discapacidad genera desdoblamientos en distintos ámbitos, entre los cuales cabe destacar: la esfera jurídica; la esfera práctica, referente a políticas públicas, y la esfera social.

Como afirma Oliver (1998, p. 47), la idea de que los problemas de la discapacidad son primordialmente sociales constituye un elemento crucial para entender adecuadamente las respuestas sociales a la discapacidad. Para ello, es necesario comprender cómo la individualización de la discapacidad se sigue manifestando en la sociedad, la política, la práctica y la experiencia personal, para intentar reformular la percepción de la discapacidad como una cuestión social.

Desde el punto de vista normativo, se observa que, a grandes rasgos, está vigente internacionalmente la transición entre el modelo médico –considerando ejemplos como la legalidad de la esterilización forzosa en muchos países y la manutención de términos peyorativos en las legislaciones nacionales– y el modelo social, con especial atención a la CDPD, que será objeto de análisis más adelante.

Patricia Cuenca Gómez (2012, p. 116) esclarece que, cuando el Derecho es aplicado ubicando a la discapacidad dentro del modelo médico, tratándola como una característica individual o de un determinado colectivo, se refuerzan los estigmas y la discriminación contra las personas con discapacidad.

---

<sup>32</sup> De acuerdo con esa teoría, la construcción social de las diferencias humanas no es innata, sino que es socialmente construida a partir de etiquetas asignadas a cada individuo. Asimismo, nadie nace con discapacidad, las personas son definidas así a partir de la comparación con el patrón socialmente preestablecido de ser persona sin discapacidad (Degener y Quinn, 2002, pp. 14-15).

Previamente a la vigencia del modelo social, las personas con discapacidad se hallaban en el discurso de los derechos como personas merecedoras de atención y cuidados, pero no como sujetos de derechos activos en el proceso de reconocimiento de sus necesidades, lo que justificaba leyes paternalistas y centradas en la asistencia médica (Cuenca Gómez, 2016, p. 56). Incluir a las personas con discapacidad en el discurso de los derechos humanos significa romper con esa lógica, posicionándolos como actores principales en el proceso de conquista de derechos.

El Derecho, como uno de los más importantes instrumentos de organización de la vida social, tiene el poder de ejercer un papel de propulsor del respeto por los derechos humanos y por la no discriminación, incluyendo a las personas con discapacidad en ese proceso (Asís Roig, 2008, p. 21). Para ello, la teoría de los derechos humanos debe abordar la discapacidad a partir del enfoque del modelo social, con la lucha por el fin de las barreras discapacitantes y el reconocimiento de derechos.

Asimismo, el Derecho puede contribuir en ese proceso estableciendo como discriminatorias ciertas actitudes y elaborando medidas de acción afirmativa para las personas con discapacidad. Sin embargo, un cambio meramente jurídico no es suficiente para lograr que la discapacidad sea encarada como una cuestión de derechos humanos, pues la aplicación y eficacia de las leyes seguirá dependiendo de percepciones sociales de la discapacidad (Emens, 2012, p. 1387), por lo que es importante avanzar igualmente en los tres aspectos.

Bajo una perspectiva práctica, la comprensión de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos consolida la visión de que el Estado debe ejercer un papel de garante de las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, en detrimento del patrón de conmiseración vigente en el modelo médico, y debe guiar la elaboración y aplicación de políticas públicas.

Por consiguiente, el enfoque basado en los derechos humanos redefine los significados de benefactor y beneficiado, Estado y personas con discapacidad, tratándoles no bajo una perspectiva de caridad, sino de deberes legales y compromisos internacionales, atribuyendo responsabilidad política al Estado en caso de incumplimiento de ese deber

(Caparrós y Raya, 2013, p. 194). En ese sentido, la Convención ejerce un rol fundamental, al establecer con los Estados un compromiso internacional en relación con los derechos de las personas con discapacidad y exigirles un cambio en las esferas jurídica, práctica y de concienciación social para que la discapacidad sea tratada como una cuestión de derechos humanos a nivel nacional.

En lo que atañe al aspecto social, se observan muchas debilidades. Se suele considerar la discapacidad como un estigma, una condición a ser corregida, siguiendo los parámetros del modelo médico. La discriminación y la invisibilidad que las mujeres con discapacidad sufren son elementos que desafían el enfoque social de la discapacidad desde el paradigma de los derechos humanos.

De igual modo, se asocia al aspecto social la analogía discapacidad-género (Brandwein y Scotch, 2001, p. 465), que evidencia que ambos conceptos son construcciones sociales, pudiendo ser reconstruidos según el valor y la interpretación que la sociedad da a ambos elementos. Como se ha visto, la discapacidad es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno, siendo un concepto condicionado a los apoyos ofrecidos a las personas con discapacidad para gozar de una vida sin barreras, sean estas físicas, cognitivas o actitudinales<sup>33</sup>. Lo mismo ocurre con el significado de género, un concepto socialmente construido (Makkonen, 2002, p. 2) en torno a la idea del femenino, condicionado por aspectos históricos, sociales y políticos (Díaz Castillo y Muñoz Borja, 2005, p. 158). Pese a que muchas veces el término sea erróneamente utilizado como sinónimo de sexo, en realidad el género femenino representa el resultado del imaginario social sobre qué significa ser mujer, una idea que ha cambiado a través de los siglos.

---

<sup>33</sup> Santiago Pisonero (2007, p. 100) trae un ejemplo de la construcción social de la discapacidad: “[...] resulta que una deficiencia no es igual a discapacidad, ya que nuestra sociedad evita que, por ejemplo, un miope, un diabético o un asmático estén en situación de discapacidad, porque existen las gafas, la insulina y el Ventolín. Con el nuevo concepto, pensar en que es el resultado de unos factores equivale a decir que una persona con problemas de movilidad, por poner un ejemplo, se encontrará en una situación de desventaja y discapacidad si su entorno no es accesible, si no hay rampas y sí escaleras, etc. Es decir, una persona puede encontrarse en situación de discapacidad y otra, con la misma deficiencia, puede no estarlo y funcionar perfectamente en la sociedad [...]. Por tanto, la discapacidad es una situación y no una característica intrínseca de la persona, por lo que no sería correcto hablar de ‘discapacitados’ y sí de ‘personas con discapacidad’ y de ‘situaciones que discapacitan’”.

Ambas construcciones sociales han ocurrido de forma que, en las sociedades occidentales contemporáneas, prevalece una visión del género femenino y de la discapacidad como inferiores a sus correlatos masculino y sin discapacidad, lo que da lugar a discriminación y, entrelazando los dos aspectos, discriminación interseccional, como se ha desarrollado anteriormente. Como ambos no son conceptos fijos, sino socialmente contruidos y variables, es posible revertir la percepción social de la mujer con discapacidad con auxilio del marco de los derechos humanos.

Asimismo, para que sea posible avanzar en el aspecto social, es necesario invertir en educación y concienciación para romper con la imagen negativa que existe acerca de la discapacidad y del género, y también con la ideología de la normalización, que impone un patrón a ser seguido. Considerar la discapacidad una cuestión de derechos humanos es acercar el debate social a la equidad de género, la justicia y la libertad como instrumentos contra la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad (Diniz y Santos, 2010, p. 11).

Es cierto que la analogía discapacidad-género también tiene implicaciones en los aspectos social y práctico, relativas al enfoque a ser empleado en las leyes y políticas públicas de lucha contra la discriminación por razones de discapacidad. Esto es apenas una demostración de que, más allá de las características, avances y retrocesos de cada ámbito, las tres esferas se interrelacionan, generando nuevos desdoblamientos.

La interrelación entre los tres aspectos también se manifiesta en la interpretación de las leyes sobre discapacidad ante casos concretos, en consecuencia del mayor avance legal en relación con la percepción social de la discapacidad. Elizabeth Emens (2012, p. 1386) destaca que la diferencia de apreciación existente entre las perspectivas jurídica y social de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos genera efectos negativos en la aplicación y eficacia de las leyes sobre la discapacidad. Esto ocurre porque la percepción social negativa de la discapacidad dificulta un cambio doctrinal para adecuar

las leyes nacionales al nuevo paradigma legal de los derechos de las personas con discapacidad<sup>34</sup>.

A su vez, la invisibilidad de las mujeres con discapacidad presenta consecuencias en dos vertientes: la primera, social, hace que esta sea dejada al margen tanto en el colectivo de las mujeres como en el colectivo de las personas con discapacidad; la segunda, práctica, por la escasez de datos estadísticos que incluyan una vertiente de género en encuestas sobre la discapacidad y también una perspectiva de la discapacidad dentro de las encuestas con enfoque de género.

En vista de ello, un objetivo inherente al enfoque basado en los derechos humanos es la visibilidad del colectivo afectado por la vulneración de derechos, basándose en datos estadísticos fiables (Caparrós y Raya, 2013, p. 195). Con una mayor preocupación de los Estados por esto, los datos estadísticos podrían servir de base para la implementación de políticas públicas que tengan como público objetivo las mujeres con discapacidad.

En definitiva, en el ámbito legal se observan los mayores avances de la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, mientras que los aspectos práctico y social carecen de un respaldo contundente de parte de muchos Estados y de la sociedad. Por consiguiente, es necesario avanzar en estos aspectos para consolidar la percepción de los problemas concernientes a las mujeres con discapacidad a partir de un enfoque de derechos humanos.

---

<sup>34</sup> Para ilustrar las dificultades enfrentadas por las personas con discapacidad al buscar el reconocimiento de sus derechos, cabe mencionar el Auto 196/2016, de 28 de noviembre, del Tribunal Constitucional de España, que inadmitió a trámite el recurso de amparo planteado por los padres de una joven con discapacidad intelectual, a quien se le denegó el derecho al voto. En el auto, el Tribunal Constitucional declaró que la inadmisión procede en virtud de una manifiesta ausencia de violación del derecho alegado. Afirmó, además, que la decisión de no reconocerle el derecho al voto no representa una violación de lo que dispone la CDPD. Sin embargo, el artículo 29 de la Convención prevé que los Estados Partes se comprometerán a “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, [...] incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas”. Para ver otros ejemplos en el ámbito jurisprudencial: Fernández, J. M. (2016). La recepción de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en la jurisprudencia constitucional y ordinaria españolas. En: Lorenzo, R., Pérez Bueno, L. C. (dir.). *La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia* (pp. 187-216). Madrid: Ediciones Cinca.

Considerando esto, en el Segundo Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea, de 2011 (p. 10), se resalta la importancia de garantizar la transversalidad de género en los programas desarrollados a nivel comunitario, estableciendo sistemas de registro de datos desglosados por sexo y otros indicadores sensibles al género y diseñando programas de atención específicos a las mujeres, para tratar temas como la salud, la violencia y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, a partir de sus necesidades concretas.

De igual modo, no se puede olvidar que el discurso de la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres y, específicamente, las mujeres con discapacidad, debe desarrollarse bajo la perspectiva de los derechos humanos. Ese enfoque considera que: la violencia sexual contra la mujer es una violación de derechos humanos (Merry, 2001, p. 86); la violencia contra la mujer es una manifestación de discriminación, que limita o impide el goce de los derechos fundamentales; la integridad física, psíquica y la autonomía de la mujer deben estar en el centro de las medidas de prevención de la violencia; las medidas de prevención deben estar en línea con otros derechos de las mujeres, por lo que las cuestiones que conciernen al género deben ser analizadas desde una perspectiva transversal; las mujeres deben ser empoderadas y protagonizar la exigencia por sus derechos y la planificación de medidas contra la violencia contra la mujer; y que debe ser priorizada la prevención de la violencia contra las mujeres que sufren discriminación interseccional y que enfrentan mayor riesgo de violencia, como las mujeres con discapacidad.

La mayoría de esas ideas están expresadas en el documento “Un marco de apoyo a la prevención contra la violencia contra la mujer”, elaborado por ONU Mujeres<sup>35</sup> en 2015. Este es uno de los ejemplos de que las Naciones Unidas ejercen un papel político importante en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad y en la concienciación de los Estados Miembros de que es

---

<sup>35</sup> ONU Mujeres es una institución en funcionamiento desde 2011 y ejerce el rol de apoyo normativo, técnico y de asesoramiento a los Estados Miembros de Naciones Unidas, a solicitud de estos, sobre la igualdad entre los géneros, el empoderamiento y los derechos de la mujer y la incorporación de una perspectiva de género en su labor, según la Resolución de la Asamblea General 64/289 (2010).

necesario dar relevancia a estos contenidos, especialmente cuando ocurre interseccionalidad entre ellos.

Para consolidar estos temas como una cuestión de derechos humanos, es necesario involucrar a la sociedad en el proceso, abandonando la idea de que la lucha por los derechos de las personas con discapacidad cabe únicamente a ese colectivo. Las personas con discapacidad son las protagonistas en ese proceso, pero este no se podrá concluir sin el compromiso de todos, y se vive un momento de garantizar que el cambio social acompañe los preceptos legales. Para que esto ocurra, Rafael de Asís Roig (2015, p. 32) propone que el ideal “nada sobre nosotros sin nosotros”<sup>36</sup>, símbolo de la lucha por la participación de las personas con discapacidad en todos los procesos que les afectan, sea ampliado con la inclusión de la expresión “con vosotros”, marcando la importancia de que toda la sociedad integre ese proceso, expandiendo el debate en torno a la discapacidad.

---

<sup>36</sup> James Charlton (2000, p. 17) aclara que la expresión (en original, *nothing about us withous us*) traduce un movimiento de crecimiento de la identificación y del diálogo de las organizaciones de personas con discapacidad las unas con las otras, así como entre personas con discapacidad individualmente, reforzando que, para comprender cualquier aspecto de las personas con discapacidad es necesario, antes que nada, reconocer sus necesidades como colectivo y como individuos. Bajo ese lema, el movimiento sugiere un gran cambio en el modo en el que la opresión por cuestiones de discapacidad es entendida y resistida. Véase: Charlton, 2000.

## CAPÍTULO II: UN ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA CONVENCIÓN DE LA ONU

### 2.1. Los derechos de las personas con discapacidad en la ONU

La “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, de la ONU, representa el producto final de un largo camino de lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Es el resultado de un proceso de cuatro años de construcción colectiva, que involucró representantes de organizaciones no gubernamentales, instituciones de derechos humanos, Estados Miembros y Observadores de la ONU y el Relator Especial de la ONU para la discapacidad.

La lucha por el reconocimiento legal de las personas con discapacidad se remonta a los años sesenta y setenta, cuando surgió un movimiento progresista comprometido con la elaboración de estándares internacionales sobre las personas con discapacidad, más que sobre la discapacidad como tal (Lord y Stein, 2008, p. 12). Hasta entonces en el ámbito internacional, la discapacidad era abordada como una cuestión de beneficencia y rehabilitación (Cardona Llorens y Sanjosé Gil, 2008, p. 181). Esa perspectiva ultrapasada se refleja en el primer documento específico sobre la discapacidad en el marco de las Naciones Unidas, “Rehabilitación Social de los Disminuidos Físicos”, aprobado por el Consejo Económico y Social en 1950 con el propósito de establecer programas de rehabilitación y tratamiento para las personas con discapacidad, especialmente visual.

El cambio de paradigma hacia el reconocimiento legal de las personas con discapacidad, que creó las bases para que la discapacidad fuese tratada bajo la perspectiva de los derechos humanos, buscaba romper con la idea de caridad y tutela comúnmente asociada al tema<sup>37</sup>. En ese nuevo contexto, fueron adoptadas la “Declaración de los

---

<sup>37</sup> Cardona Llorens (2007a, p. 264) indica que ese cambio de perspectiva ocurrió en el marco del movimiento de vida independiente, surgido en Estados Unidos en la postguerra de Vietnam, debido a que muchos de los soldados estadounidenses, al volver de la guerra afectados física o mentalmente, lucharon por el reconocimiento de sus derechos como personas con discapacidad. El movimiento se basaba en tres objetivos principales: la prevención de la dependencia, la rehabilitación para tratar la dependencia y el mantenimiento para la independencia (Aguado Díaz, 1995, p. 241). Esto refleja, así como ocurre con las declaraciones sobre la discapacidad de la ONU adoptadas en la década de 1970, una coexistencia de los modelos médico y social.



Derechos del Retrasado Mental”, de 1971, y la “Declaración de los Derechos de los Impedidos”, de 1975.

Estos documentos representan la conquista histórica de una mayor visibilidad y garantía de derechos de las personas con discapacidad. Ambas declaraciones reflejan muchas concepciones del modelo médico de la discapacidad, pese a que las primeras manifestaciones del modelo social datan de finales de la década de sesenta, al mismo tiempo en que avanzan hacia el modelo social. Es posible observar esto ya en el título de las dos declaraciones –que se refieren a la discapacidad como retraso e impedimento–. En contraste, se trata la persona con discapacidad como sujeto de derechos, acercándose a la concepción reflejada en el modelo social<sup>38</sup>, según la cual se deja de tratar sobre asistencia para tratar sobre derechos (Palacios, 2008, p. 218).

En los años ochenta, hubo un crecimiento de la atención dada a temas de discapacidad por la ONU, con el establecimiento del año de 1981 como año internacional de los impedidos y el reconocimiento formal de la responsabilidad de los Estados de garantizar la igualdad de derechos a las personas con discapacidad (Barnes, Barton y Oliver, 2002, p. 3), bajo el lema “participación e igualdad plenas” (Cardona Llorens, 2007b, p. 71). Como resultado de los trabajos realizados a lo largo de ese año, se formuló el “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” el año siguiente.

En 1984, se creó el puesto de Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías<sup>39</sup> (Carbert y Rioux, 2003, p. 3). El primer relator, Leandro Despouy,

---

<sup>38</sup> Ese carácter dual de las declaraciones, reflejando una transición entre el modelo médico y el modelo social, está en el artículo 7 de La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, que así prevé: “Si algunos retrasados mentales no son capaces, debido a la gravedad de su impedimento, de ejercer efectivamente todos sus derechos, o si se hace necesario limitar o incluso suprimir tales derechos, el procedimiento que se emplee a los fines de esa limitación o supresión deberá entrañar salvaguardas jurídicas que protejan al retrasado mental contra toda forma de abuso. Dicho procedimiento deberá basarse en una evaluación de su capacidad social por expertos calificados. Asimismo, tal limitación o supresión quedará sujeta a revisiones periódicas y reconocerá el derecho de apelación a autoridades superiores.” Como es apreciable, el texto garantiza a la persona con discapacidad mental el goce de los derechos en su artículo 1, pero lo limita en el artículo 7 basándose en la gravedad de su impedimento –lo cual será determinado por un especialista responsable de un diagnóstico– no en las barreras sociales que impiden la utilización de recursos como el consentimiento informado.

<sup>39</sup> Actualmente, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

recomendó que la discapacidad fuese tratada como una cuestión de derechos humanos y solicitó un mayor compromiso de los organismos de monitoreo de la ONU con las demandas de las personas con discapacidad.

En ese contexto, la discapacidad no era tratada desde la perspectiva de los derechos humanos, sino como una condición particular del individuo, sin que hubiese una preocupación a nivel internacional por incentivar que los Estados Miembros de la ONU promoviesen políticas públicas centradas en las necesidades de las personas con discapacidad (Carbert y Rioux, 2003, p. 3). El nombramiento de un relator especial demuestra la intención de las Naciones Unidas de cambiar ese paradigma.

El decenio entre 1983 y 1992 fue proclamado la década internacional de las personas con discapacidad, con el objetivo de promocionar los derechos de dicho colectivo. Al término del decenio, la Asamblea General de la ONU elaboró la “Estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el Año 2000 y Años Posteriores” (Cardona Llorens, 2007b, pp. 79-80).

Pese a los avances conquistados, la década internacional de las personas con discapacidad no cumplió algunos de los objetivos trazados. La justificación para esto fue la escasez de recursos financieros y un planteamiento imperfecto de integración de la discapacidad dentro de políticas públicas de otras áreas (Cardona Llorens, 2007b, pp. 79-80).

Desde la perspectiva jurídica, Cardona Llorens (2007b, pp. 79-80) presenta como principal fracaso del decenio la no elaboración del pretendido Convenio Internacional sobre la Discapacidad. Es posible que haya contribuido a la no elaboración de ese documento la resistencia de algunos activistas a reconocer la necesidad de aprobación de una convención específica para las personas con discapacidad –posteriormente superada con la CDPD–.

Para estos activistas, una especificación sobre las personas con discapacidad sería estigmatizante, promoviendo su exclusión y segregación, además de resaltar las diferencias entre ellos y los demás. Para ellos, la solución ideal sería que la ONU reforzara los tratados

de derechos humanos ya existentes para que protegiesen de modo efectivo a las personas con discapacidad (Kanter, 2015, p. 43).

En vez del Convenio, la ONU aprobó, en 1993, las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”<sup>40</sup>. Entiende Palacios (2008, p. 205) que a partir de ese documento las personas con discapacidad fueron identificadas como un colectivo que debe ser protegido, pues el texto presenta necesidades específicas y medidas de protección especiales para el goce de algunos derechos. También tuvo mucha importancia la Observación General<sup>41</sup> n° 5 aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1994, por declarar, por primera vez, que la denegación de ajustes razonables configura una forma de discriminación (Trömel, 2009, p. 1.062).

Todas esas acciones marcan el principio de un movimiento dentro de la ONU para la consolidación de la discapacidad en el discurso de los derechos humanos. Sin embargo, los documentos adoptados entre los años 1970 y 1990 no eran legalmente vinculantes (*soft law*) y reflejaban el modelo médico y paternalista según el cual las personas con discapacidad eran tratadas por la sociedad y los Estados (Lord y Stein, 2008, p. 12). Además, ninguno poseía mecanismos de monitoreo y elaboración de informes a los Estados (Kanter, 2015, p. 34). En vista de ello, las personas con discapacidad siguieron sin recibir una protección internacional de carácter legalmente vinculante, hasta que empezaron los trabajos de elaboración de una convención internacional para las personas con discapacidad (Lorenzo, 2009, pp. 68-69).

---

<sup>40</sup> Es posible citar aún otros documentos producidos en el seno de las Naciones Unidas que ayudan a trazar el recorrido histórico de los derechos de las personas con discapacidad. Son estos: “Directrices de Tallin para el Desarrollo de los Recursos Humanos en la esfera de los impedidos” (1989); “Los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud mental” (1991); “Declaración de Beijing sobre los derechos de las personas con discapacidad” (2000); “Derechos Humanos y Discapacidad: uso actual y posibilidades futuras de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad” (2002).

<sup>41</sup> Como será desarrollado en profundidad al final de este capítulo, las observaciones generales (*general comments*) son documentos elaborados por los comités de derechos humanos para orientar a los Estados Partes en la elaboración de sus informes oficiales en respuesta a los comités (Kanter, 2015, p. 35), profundizándose en temas que los comités identifican que hay mayor dificultades en la aplicación de las convenciones. También son llamadas recomendaciones o comentarios generales, según la traducción.

El proyecto tenía el enfoque en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en un planteamiento integral, contextualizando la discapacidad en distintos aspectos de la vida en sociedad y en los derechos fundamentales ya garantizados en otros tratados (Lorenzo, 2009, pp. 68-69).

Como resultado, el trabajo del comité culminó con la elaboración de la propuesta de texto de la CDPD, que rompió con el paradigma hasta entonces vigente de conmiseración hacia las personas con discapacidad. Como mencionó Gerard Quinn (2008, p. 28): “La Convención es la refutación más elocuente del paternalismo que yo pueda imaginar en el campo de la discapacidad”.

Posteriormente a la aprobación de la Convención, es relevante citar la aprobación de la resolución “La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las Personas con Discapacidad hasta 2015 y después de esa fecha”, cuyo objetivo es el de asociar los objetivos del milenio a las necesidades de las personas con discapacidad. La resolución viene para compensar la ausencia de mención a ese colectivo en la resolución que trata los objetivos del milenio, aprobada en 2000 en el seno de las Naciones Unidas.

En el documento, la Asamblea General recalca que está “muy preocupada porque las personas con discapacidad con frecuencia son objeto de formas múltiples o agravadas de discriminación y son aún en gran medida invisibles en los procesos de cumplimiento, seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Es posible que la preocupación por transversalizar el tema de la discapacidad en todos los documentos de la ONU sea un reflejo del nuevo paradigma introducido con la CDPD, como se profundizará a continuación.

## 2.2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Convención fue adoptada en 2006 y abierta para firmas el 30 de marzo de 2007, obteniendo 82 rúbricas y una ratificación<sup>42</sup>, de Jamaica (Lopes, 2009, p. 67), siendo el número más elevado de firmas en la apertura de un tratado de la historia de las Naciones Unidas (Van Weele, 2012, p. 9). El mismo día, el Protocolo Facultativo tuvo 44 firmas (Mladenov, 2013, p. 72). Hasta el momento, la Convención ha sido ratificada por 172 Estados y una organización de integración regional<sup>43</sup>, la Unión Europea, en su primera vez como parte en un tratado de derechos humanos.

El día de su adopción, Kofi Annan, entonces Secretario General de la ONU, afirmó que el documento representaba el nacer de una nueva era, en la que las personas con discapacidad no tendrían que soportar prácticas discriminatorias que fueron permitidas por demasiado tiempo. Recalcó además que, pese a que nada cambia de la noche a la mañana, el cambio llega más rápido si hay una ley apoyándolo (Lawson, 2007, p. 563).

Como afirma Antônio Cançado Trindade (2006, p. 408), los Estados que ratifican un tratado se ponen de acuerdo en agregar ese conjunto mínimo de derechos en su agenda común, haciendo posible que el tema sea incluido en el orden del día internacional y que se pueda discutirlo y establecer metas para lograr la consolidación de los derechos que recoge. Es lo que ha ocurrido con la discapacidad desde la aprobación de la CDPD, tomando fuerza en el escenario internacional.

En virtud de la aplicación de los modelos social y de diversidad en un documento de alcance internacional sobre la discapacidad y de su naturaleza vinculante, la CDPD representa un punto de inflexión en la historia de los derechos de las personas con

---

<sup>42</sup> Conforme consta en el “Manual para Parlamentarios sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo” (2007, pp. 40-41), publicado por la ONU, la ratificación de un tratado representa un acto por el que un Estado establece, en el ámbito internacional, su consentimiento de obligarse a un tratado, volviéndose legalmente vinculado a este. La firma de un tratado, a su vez, indica que el Estado expresa su intención de ratificar el tratado en el futuro. Firmarlo también representa la prohibición de ejecutar actos que vayan en contra de los objetivos y del propósito del tratado firmado.

<sup>43</sup> Hasta el 14 de mayo de 2017.

discapacidad y también en la historia del tratamiento de la discapacidad (Asís Roig, 2016, p. 113).

### 2.2.1. Construyendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Las organizaciones de personas con discapacidad desempeñaron un importante papel en la construcción colectiva de la Convención. A diferencia de los debates para la elaboración de los documentos anteriores en materia de discapacidad, participaron un elevado número de organizaciones no gubernamentales, independientemente de poseer estatus consultivo en la ONU (Trömel, 2009, p. 1.065). Dicha participación incentivó debates sobre la accesibilidad física y de comunicación en el ámbito de las Naciones Unidas (Lorenzo, 2009, p. 69). El presidente del comité especial para preparar la Convención, Don McKay, embajador de Nueva Zelanda, enfatizó que el 70% del texto de la CDPD adviene de lo que fue aportado por las organizaciones de personas con discapacidad, reflejando su protagonismo en el proceso (Trömel, 2009, p. 1.065).

Utilizando el lema “nada sobre nosotros sin nosotros”, las entidades representativas de las personas con discapacidad demostraron al comité responsable de elaborar la Convención que su protagonismo en las discusiones era crucial (Beco, 2011, p. 101). El movimiento recalcó que las personas con discapacidad deben controlar y tener la responsabilidad sobre sus vidas y los temas que les afectan (Charlton, 2000, p. 17), como es el caso de la Convención.

Todo empezó cuando, en la 56ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en 2001, se aprobó la propuesta del presidente de México de establecer un comité especial para analizar la posibilidad de elaborar una convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad (Lorenzo y Palacios, 2016, pp. 17-18). El comité *ad hoc* incluía a representantes de más de 40 países y más de 400 organizaciones de la sociedad civil – organizaciones de personas con discapacidad, de derechos humanos y demás interesados– (Kanter, 2007, p. 289).

La decisión de aprobar una convención sobre la discapacidad expresa el reconocimiento de que las demás convenciones de derechos humanos no garantizan el goce de derechos de las personas con discapacidad. Esto ocurre porque las obligaciones derivadas de las convenciones de derechos humanos no resaltan las barreras específicas que estos enfrentan al intentar gozar de sus derechos (Lord y Stein, 2008, pp. 11-12). Por ello, el reconocimiento de la necesidad de una convención centrada en las personas con discapacidad evidencia la percepción de que los demás tratados de derechos humanos no protegen completamente a las personas con discapacidad, pues muchas de sus necesidades y violaciones de derechos que sufren advienen directamente de la discapacidad, cuestión que se mantiene invisible en las demás convenciones (Melish, 2007, p. 7). Pese a que las personas con discapacidad hayan estado incluidas de modo genérico en el discurso de los derechos humanos, las leyes y las políticas públicas muchas veces les denegaban el acceso a sus derechos (Mégret, 2007, p. 7).

En consecuencia, la Convención tuvo el papel de visibilizar la causa de las personas con discapacidad y garantizarles “el derecho a tener derechos” (Mégret, 2007, p. 7, traducción libre)<sup>44</sup>: el reconocimiento oficial y evidente de la igualdad entre las personas con discapacidad y los demás. Por tanto, uno de los ejes centrales de la Convención fue el de conformar las normas establecidas en los demás tratados de derechos humanos al contexto de la discapacidad (Bariffi y Palacios, 2007, p. 55).

Como no podría dejar de ser, los modelos que prevalecen en la Convención son el modelo social y el modelo de diversidad. En consonancia con los preceptos de dichos modelos, el texto de la Convención no aporta una definición de discapacidad o de deficiencia. Se optó por la ausencia de definición del término por razones políticas (Van Weele, 2012, p. 24), pues definir la discapacidad puede transmitir una idea estigmatizante hacia las personas con discapacidad (Graumann y Harnacke, 2012, p. 35). Por el contrario, la Convención recoge en el artículo 1 una concepción de personas con discapacidad, entendida como:

[...] aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan

---

<sup>44</sup> En el original: “Right to have rights” (Mégret, 2007, p. 7).

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

La definición resalta el aspecto social de la discapacidad (Palacios, 2008, p. 347), cuyo significado refleja un concepto mutable según el tiempo y la sociedad que lo interprete, lo que refuerza que la discapacidad no existiría si no hubiese las barreras que actualmente prevalecen en la sociedad.

En efecto, se optó por definir la expresión “persona con discapacidad”, pero no discapacidad, porque se llegó a la conclusión de que cualquier definición incluiría a unos y no a otros, y que, con el tiempo, esa definición podría quedarse obsoleta, excluyendo a grupos que, en un futuro, podrían necesitar la protección de la CDPD (Kanter, 2007, p. 292). Además, añadir una definición del término podría representar una contradicción con el compromiso de la Convención con el modelo social de la discapacidad, debido al carácter preponderantemente social de la propia idea de discapacidad (Kanter, 2007, p. 292).

Pese a esto, al analizar el concepto, se identifican elementos del modelo médico. La Convención utiliza el término deficiencia para definir a la persona con discapacidad, concepto rechazado por los activistas por estar basado en una condición individual y un diagnóstico, como en el modelo médico, y reflejar la falta o defecto de algún aspecto del individuo, concepción que el modelo social de la discapacidad rechaza. En ese sentido, sería más coherente con lo defendido en la CDPD que no se hubiese incluido el término deficiencia en la definición de discapacidad.

Además de esto, la adecuación de la terminología al modelo social enfrenta otro desafío: la traducción. En algunos idiomas, no hay un sentido oficial para el término discapacidad y se mantiene el uso de sustitutos que, en otras lenguas, son considerados peyorativos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en francés y en portugués. En la Convención de países francófonos y de lengua portuguesa, el término discapacidad fue traducido como minusvalía (*handicap*) y deficiencia (*deficiência*), respectivamente. En consecuencia, la



Convención en estos idiomas no refleja el gran avance que fue conquistado en la terminología<sup>45</sup>.

No obstante, esto no disminuye la importancia del concepto de persona con discapacidad, que deja de estar asociado a condiciones individuales para expresar el aspecto social de las barreras arquitectónicas, educativas y sociales que enfrentan en su vida cotidiana. Pese a las críticas, la adopción del término discapacidad representa el resultado de la lucha política y de significados que acompaña esa conquista, que no pertenece únicamente a los teóricos de la discapacidad, sino también a activistas y a cada individuo con discapacidad (Thomas, 2002, pp. 38-39).

En definitiva, al definir persona con discapacidad, lo que propone la Convención es un concepto mínimo y abierto, también denominado “concepto paraguas”, para abarcar aquellos que encajan en la definición al mismo tiempo que no excluye a otras personas que puedan estar incluidas en definiciones de derecho interno más amplias, pues estas continúan válidas (Cuenca Gómez, 2012, p. 52).

Sobre el enfoque de la Convención, se optó por elaborar un texto de fórmula mixta o integral, en una perspectiva que concilia las prescripciones contra la discriminación hacia las personas con discapacidad con el establecimiento de herramientas que posibilitan el ejercicio de los derechos por dicho grupo, aplicándolas a distintas áreas de los derechos humanos (Bariffi y Palacios, 2007, p. 55). Como aclaran Francisco Bariffi y Palacios (2007, p. 56):

[...] el Tratado aborda una serie de derechos sustantivos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al empleo, entre otros, pero dichos derechos son abordados desde la perspectiva y desde la fórmula de la no discriminación, utilizando las herramientas del derecho antidiscriminatorio. El objeto, por tanto, no fue crear nuevos derechos, sino asegurar el uso del principio de no discriminación en cada uno de los derechos, para que puedan ser ejercidos en igualdad de oportunidades por las personas con discapacidad. De este modo, se debió identificar, a la hora de regular cada derecho, cuáles eran las necesidades extra que debían garantizarse, para lograr adaptar dichos derechos al contexto específico de la discapacidad.

---

<sup>45</sup> Para profundizar el debate de los problemas y desafíos de traducción en la CDPD, véase: Mladenov, 2013.

Por ende, la CDPD transversaliza el tema de la no discriminación a lo largo de todo el texto, pero no se limita a la adopción del modelo antidiscriminatorio utilizado en otras convenciones, como en la CEDAW. La Convención incluye esa perspectiva, pero no se limita a ella (Courtis, 2010, p. 80), agregando al texto políticas de desarrollo social para aplicar los derechos fundamentales al contexto de la discapacidad.

Asimismo, el objetivo principal de la Convención, como menciona el artículo 1, es el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. Para ello, aborda, desde la perspectiva de la discapacidad, cuestiones como discriminación, accesibilidad, acceso a la justicia, violencia, salud, educación, entre otros.

Además de la CDPD, también se aprobó su Protocolo Facultativo, que reconoce la competencia del Comité para recibir e investigar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado Parte de alguna de las disposiciones de la Convención. El Protocolo se firma de modo separado de la Convención, por lo que no todos los Estados Partes en la CDPD reconocen esa competencia del Comité.

Pilar Trinidad Nuñez (2012, p. 161) resalta que la decisión de adoptar un protocolo facultativo fue tomada por el comité *ad hoc* la última semana de negociaciones de la Convención, debido a la ausencia de consenso sobre la inclusión de un sistema de comunicaciones individuales en el texto del documento. Para la autora, la desvinculación del contenido del Protocolo Facultativo del texto principal de la Convención, permitiendo su firma por separado, representa el fracaso de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad de modo integral.

Pese a que muchos Estados Partes no hayan firmado el referido protocolo, la adhesión de 92<sup>46</sup> de ellos al documento, hasta el momento, confirma el éxito del Protocolo

---

<sup>46</sup> Hasta el 14 de mayo de 2017.

Facultativo. No obstante, su incorporación en el texto principal de la Convención garantizaría una protección igualitaria a todos los ciudadanos de Estados Partes ante las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad.

### 2.2.2. La Convención como un cambio de paradigma

La Convención representa la ruptura –al menos en el ámbito legal– de prácticas paternalistas hacia las personas con discapacidad. Esto se evidencia con el no reconocimiento de algunos documentos como antecedentes históricos a la Convención –la “Declaración de los Derechos del Retrasado Mental” y la “Declaración de los Derechos de los Impedidos”–. La CDPD no hace referencia a ellos en virtud de que ambas declaraciones son criticadas por asumir un tono paternalista e incluso peyorativo hacia las personas con discapacidad (Dhanda, 2008, p. 45).

No ocurre lo mismo con el “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” y las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, reconocidos en el preámbulo de la Convención como instrumentos importantes en la lucha por la igualdad de las personas con discapacidad.

Por ser textos más modernos y coherentes con la visión de discapacidad propuesta en el modelo social, ambos documentos son considerados como dos de las bases que hicieron posible la existencia de una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Carlos Parra-Dussan (2010, p. 357), actual miembro del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicita que la CDPD no representa una ruptura con las normas no vinculantes sobre discapacidad, manteniendo la orientación marcada por ambos documentos previamente citados.

Sin embargo, la CDPD adopta el lenguaje de los derechos de modo más contundente que los documentos que la preceden, reconociendo y consagrando los derechos de las personas con discapacidad en vez de solamente establecer metas a ser alcanzadas (Parra-Dussan, 2010, p. 370).

Las soluciones normativas propuestas a lo largo del documento se basan en la eliminación de las barreras sociales, vinculando su existencia a la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y exigiendo una postura activa de los Estados para lograr eliminar dichas barreras. Esta es una de las demostraciones de que la Convención incorporó de modo categórico el modelo social de la discapacidad (Lorenzo, 2009, p. 70).

Se suma a esto que en el preámbulo de la Convención se hace hincapié en la necesidad de una especial protección a las personas con discapacidad –tanto a nivel internacional como en el ámbito de los Estados–, derivada de su alta exposición a situaciones como la pobreza, la exclusión social, la vulneración de derechos y, como se ha visto en el capítulo anterior, la violencia (Lorenzo, 2009, p. 72). Además, la Convención fue el primer tratado de derechos humanos en contener una referencia explícita a la discriminación múltiple, en el artículo 6<sup>47</sup>, al hablar de las mujeres con discapacidad (Degener, 2014, p. 15)<sup>48</sup>. Igualmente, en la Convención se reconoce la diversidad de las personas con discapacidad, asumiéndola como un valor que agregan a la sociedad, al mismo tiempo que resalta la pluralidad de necesidades, demandas y exigencias que coexisten dentro del colectivo (Lorenzo, 2009, p. 72).

En consecuencia, el documento aborda la discapacidad bajo una perspectiva de no discriminación, accesibilidad física, comunicación, apoyos, consentimiento informado, entre otros, a partir de distintas condiciones sociales, como la pobreza, la población rural, indígena, el género y la infancia (Lorenzo, 2009, p. 72). Como sostiene Amparo Sanjosé Gil (2007, p. 3):

---

<sup>47</sup> El artículo 6 dispone: 1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.

<sup>48</sup> En el texto de la Convención no se utiliza la expresión discriminación interseccional, sino discriminación múltiple. Sin embargo, en las observaciones generales y en algunas de las observaciones finales más recientes se observó el uso de la expresión, demostrando que el Comité se mantiene actualizado y en consonancia con las teorías sociológicas que consideran, como se entiende en esta investigación, que la expresión discriminación interseccional refleja de modo más adecuado los procesos complejos e interrelacionados de discriminación que sufren las mujeres con discapacidad.

esta Convención no es sólo una norma necesaria para facilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad, es también y sobre todo una respuesta internacional a una cuestión de justicia básica y de convivencia democrática. La eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad es una exigencia ética de nuestro tiempo y una manera de responder al imperativo de la igualdad que ha de estar en la base de las relaciones sociales de todos los países que son parte de la Comunidad internacional.

La Convención se consolida como un documento jurídico internacional que positiva muchas de las demandas presentadas por las organizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso de su elaboración. Entre las conquistas de la CDPD, están la visibilidad de las personas con discapacidad dentro del sistema de protección de derechos humanos de la ONU y ante los Estados, el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el respaldo de un documento jurídicamente vinculante como instrumento para la exigencia del cumplimiento de los derechos de ese colectivo (Lorenzo, 2009, p. 74).

Por una parte, su carácter vinculante es un aspecto crucial, pues lo diferencia del resto de documentos internacionales sobre la discapacidad. Debido a esto, se puede exigir de los Estados Partes cambios legislativos, estructurales y de políticas públicas para adecuarse a los preceptos establecidos en el texto de la Convención, lo que no ocurría hasta entonces (Parra-Dussan, 2010, p. 350). Por otra parte, la Convención naturaliza la discapacidad, tratándola como parte de la experiencia en sociedad (Dhanda, 2008, p. 45). Además, Miguel Ángel Cabra de Luna (2009, p. 186) destaca que:

[I]a Convención no es ni debe ser interpretada como un instrumento aislado, sino que supone la última manifestación de una tendencia mundial, a favor de restaurar la visibilidad de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito de los valores como en el ámbito del Derecho.

En el mismo sentido, Cançado Trindade (1997, p. 24) sostiene que los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas constituyen el eje central del sistema universal de protección a los derechos humanos y, por ello, cada uno debe ser abordado en conexión

intrínseca con los demás tratados. Con esto en mente, se puede apreciar que la CDPD se asocia, en lo que concierne al tema de esta investigación, a la CEDAW.

En cuanto a las críticas por adoptar la Convención, considerándola innecesaria debido a que las personas con discapacidad ya estarían protegidas en las convenciones anteriores, Esther Van Weele (2012, p. 26) hace una reflexión. Para ella, críticas semejantes fueron direccionadas a la CEDAW, y el tiempo comprobó su relevancia mundial para la lucha por la igualdad de género y el fin de la discriminación contra la mujer.

En caso de que la referida crítica fuera válida, no solo se aplicaría a la CDPD, sino que sería posible considerar que no es necesario especificar derechos para proteger de modo más adecuado a colectivos específicos, prescindiendo de convenciones como la de derechos del niño, contra la discriminación racial, entre otras. Sin embargo, no es casualidad que los grupos en situación de mayor riesgo de sufrir discriminación hayan recibido atención especial de la ONU a lo largo de su historia (Deneger y Quinn, 2002, p. 26). Ante un mayor riesgo de vulneración de derechos, es necesaria una protección aún más contundente para garantizar la igualdad, razón de la importancia de la CDPD en el siglo XXI.

Otra conquista de la Convención ha sido reforzar el debate sobre la discapacidad en toda la agenda del sistema ONU. De ese modo, la actuación de organismos como UNESCO<sup>49</sup>, UNICEF<sup>50</sup>, OIT<sup>51</sup>, entre otros, se guía por los ideales defendidos en la Convención. Igualmente, los comités referentes a las demás convenciones tienen una base legal en la que apoyarse para, en el momento de revisar el cumplimiento de su convención por parte de cada Estado, exigir que las personas con discapacidad también sean consideradas y respetadas (Bariffi, Cabra de Luna y Palacios, 2007, p. 63). Esto auxilia la lucha contra la discriminación interseccional, como la practicada contra mujeres, niños o personas migrantes con discapacidad.

En lo que se refiere a los mecanismos de protección establecidos en la CDPD, se optó por aplicar la solución dada en otras convenciones del sistema universal de protección

---

<sup>49</sup> Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su sigla en inglés.

<sup>50</sup> Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por su sigla en inglés.

<sup>51</sup> Organización Internacional del Trabajo.

de derechos humanos: la constitución de un Comité, la revisión de informes estatales periódicos y la posibilidad de escuchar peticiones individuales y de realizar investigaciones, esas dos últimas a tenor de la aprobación del Protocolo Facultativo.

Se pueden citar algunas provisiones novedosas en relación con otros documentos de la ONU de carácter vinculante, como la obligación de recopilar datos y estadísticas (artículo 31), la implementación de la cooperación internacional (artículo 32) y la obligación de establecer organismos de seguimiento nacional (artículo 33) (Courtis, 2011, p. 72).

Por todo ello, los diez años de vigencia de la CDPD han contribuido a incrementar el debate sobre la discapacidad, con más publicaciones sobre el tema y eventos dedicados a esto en el seno de las Naciones Unidas y en las universidades, no restringiendo la cuestión a una discusión médica, de tratamiento, sino asociándola a los derechos humanos. Adoptar la Convención hizo posible ofrecer una mayor visibilidad a las personas con discapacidad, sus demandas y derechos.

Sin embargo, ese camino no ha sido recorrido sin percances. Asís Roig (2016, p. 144) indica que los avances producidos desde la aprobación de la Convención han sido menores que los esperados, debido a los desafíos –como los de orden jurídico, práctico y social anteriormente desarrollados– al intentar aplicar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva del modelo social. Pese a esto, se observa que se está conquistando lo dispuesto en el preámbulo de la CDPD, que afirma que una convención internacional amplia e integral para promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad ayudará a disminuir su desventaja social y promoverá su participación en la sociedad en igualdad de condiciones.

No cabe tratar a las personas con discapacidad a partir de una visión rehabilitadora, y el Derecho, en su rol de promotor de la justicia y adecuándose a nuevos contextos y necesidades sociales (Neves, 2001, p. 354), se remodela para contemplar el paradigma del modelo social de la discapacidad. A través del cambio normativo, el Derecho instiga a la sociedad a reflexionar sobre la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, contribuyendo a que, socialmente, esa transformación también se promueva.

### 2.2.3. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El Comité responsable del monitoreo de la aplicación de las normas de la CDPD está formado por dieciocho expertos<sup>52</sup> independientes de distintas partes del mundo, en su mayoría, personas con discapacidad. Su mandato es de cuatro años, con posibilidad de una reelección.

Los expertos son asignados por los Estados Partes y elegidos a través de una votación secreta entre los representantes de cada Estado, como dispone el apartado 4 del artículo 34 de la Convención. El documento insta a los Estados Partes a, al asignar sus candidatos, tener en cuenta: la opinión de representantes de la sociedad civil, especialmente las organizaciones para las personas con discapacidad; una distribución geográfica equitativa; la representación de distintas formas de civilización y ordenamientos jurídicos; una representación de género equilibrada; y la participación de expertos con discapacidad.

Cada Estado Parte debe enviar periódicamente al Comité un informe inicial sobre la situación de las personas con discapacidad en su país. El objetivo principal del informe es comunicar qué medidas han sido adoptadas para garantizar la aplicación de los derechos asegurados por la CDPD, así como los desafíos enfrentados por el Estado al implementarlos (Lopes, 2009, pp. 86).

El Comité examina cada informe inicial y, basado en ello, elabora una lista de cuestiones con preguntas y una solicitud de más información sobre algunos de los temas abordados (*Global Disability Rights now!*, 2016). El objetivo del documento es que el Comité profundice sus conocimientos sobre lo que considera prioritario según la realidad de cada país.

Los informes enviados por el Estado no son la única fuente de información para que el Comité evalúe la situación de los derechos de las personas con discapacidad en el país. A los representantes de la sociedad civil también se les anima a enviar al Comité

---

<sup>52</sup> El Comité funciona desde 2009. El artículo 34 de la CDPD establece que, a partir de la entrada en vigor de la Convención y hasta que se obtuviesen 60 adhesiones, el Comité tendría 12 expertos. Superada esta marca, se sumarían 6 expertos, en un total de 18.



informes sombra (*shadow reports*)<sup>53</sup>, que se constituyen en informes alternativos al estatal notificando al Comité sobre el cumplimiento de la CDPD (Lidón, 2016, p. 280).

Los informes sombra poseen relevancia porque ofrecen a las organizaciones de la sociedad civil un instrumento para destacar asuntos que no son abordados por el Estado, o señalar áreas en que el Estado no está actuando debidamente, dando al Comité una segunda perspectiva sobre la situación del país. Asimismo, los informes sombra posibilitan que los expertos construyan, a partir de toda la información recibida, un retrato más fiel de la realidad del Estado (Frohmader, Swift, 2016, p. 8). Pese a su importancia, no todos los países envían informes sombra, especialmente los que no poseen apertura política suficiente para el funcionamiento de una sociedad civil organizada.

Además, el artículo 38 de la CDPD establece que el Comité podrá invitar a organismos especializados y a otros órganos de la ONU a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en los países a ser examinados, en las esferas que estén dentro de su área de actuación. De igual modo, previa invitación de los gobiernos, los expertos podrán viajar al país para analizar directamente la situación de las personas con discapacidad y fomentar la aplicación de la CDPD.

Posteriormente al análisis de todo el material, se celebra una reunión entre el Comité y el Estado Parte para dialogar sobre la situación de las personas con discapacidad en el país y el cumplimiento de la Convención. La sesión, que tiene lugar en Ginebra, es pública y coordinada por el experto relator asignado a ese Estado Parte. Como establece el documento de “Métodos de trabajo del Comité”, está vedado que los expertos nacionales asistan a la reunión con su país, por motivos de imparcialidad.

En el documento también se invita el Estado Parte a enviar una delegación de representación al diálogo para que expongan su informe y contesten a las preguntas de los expertos. Igualmente, en el caso de que la sociedad civil del país tenga la oportunidad de, además de enviar un informe sombra, enviar representantes a Ginebra, el Comité podrá reunirse con ellos para debatir sus mayores preocupaciones y demandas. Basado en estos documentos y en las reuniones realizadas, el Comité elabora sus observaciones finales

---

<sup>53</sup> También llamado informe a la sombra, según la traducción.

respecto de los aspectos positivos de la implementación de la CDPD en el país, preocupaciones del Comité por los problemas identificados y sugerencias al Estado Parte para intensificar el cumplimiento de la Convención.

Además, en la CDPD está previsto que los Estados Partes den difusión pública a sus informes y a las observaciones finales elaboradas por el Comité, siendo el primer tratado de derechos humanos de la ONU en contener una obligación en ese sentido. Esto demuestra su pionerismo en la aplicación de nuevas estrategias de participación política al promover la participación y el debate de organizaciones sobre discapacidad también en el ámbito nacional (Lewis, 2010, p. 115).

Para auxiliar en la función de monitoreo del Comité, en la Convención hay una disposición para que los Estados Partes establezcan organismos independientes que actúen como herramientas de seguimiento de la discapacidad a nivel doméstico. Tales organismos deben tener poder suficiente para examinar la situación de las personas con discapacidad en cada país, hacer recomendaciones a las autoridades y participar en la elaboración de proyectos de ley (Lewis, 2010, p. 116).

Rafael de Lorenzo y Agustina Palacios (2016, p. 30) destacan la labor interpretativa del Comité, mediante la elaboración de las observaciones generales acerca de los artículos específicos de la CDPD que necesiten especial atención. Como prevé el artículo 47 del “Reglamento del Comité”, este órgano podrá formular observaciones generales sobre temas que conciernen a la Convención.

El objetivo de las observaciones generales, emitidas por los comités de tratados de derechos humanos, es el de orientar a los Estados Partes en la elaboración de sus informes oficiales en respuesta a los comités (Kanter, 2015, p. 35). En el documento, el Comité describe como un artículo específico de la Convención debe ser interpretado, asociando su contenido al de los demás artículos. Para la elaboración de dichas observaciones, el Comité también recibe el auxilio de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en contribuir con aportaciones a los borradores (Lidón, 2016, p. 290).

El Comité también es responsable de analizar las demandas y denuncias individuales sobre violaciones a la Convención, siendo responsable de juzgar los casos

presentados. Como se ha comentado anteriormente, estas competencias son válidas únicamente para los Estados Partes que ratificaron el Protocolo Facultativo a la Convención.

Para ser admitidas, las denuncias deben cumplir los siguientes requisitos: no pueden ser anónimas; deben haber agotado los recursos judiciales internos, excepto en casos de retraso injustificado; deben tratar hechos que ocurrieron después de la ratificación del Protocolo o, en el caso de ser anteriores, que hayan tenido continuidad después de dicha ratificación. El proceso de investigación es confidencial, pero el Comité espera que el Estado colabore con la verificación de la información y presente explicaciones por escrito sobre la materia (Lopes, 2009, p. 88). Hasta el momento, no han sido presentadas denuncias respecto de la violencia sexual. Sin embargo, el Protocolo Facultativo garantiza a las mujeres con discapacidad un instrumento adicional de protección de reparación a las víctimas en esa cuestión.

Señala María Soledad Cisternas Reyes (2015, p. 26), expresidente del Comité, que, a través de dichas acciones, el órgano ejerce un papel de doble carácter, preventivo y revisionista. También se resalta que, así como ocurre en las reuniones con los países, los expertos nacionales del Estado investigado no pueden participar en las sesiones que tratan el tema.

Una situación difícil que el Comité está enfrentando desde enero de 2017 es la ínfima representación femenina en la actual formación del Comité: una única mujer, Theresia Degener, representante de Alemania, entre los 18 expertos. Esta situación perdurará al menos hasta 2019, cuando tendrá lugar la toma de posesión de nuevos expertos en el Comité. Sin embargo, no es posible prever si habrá un esfuerzo de parte de los Estados votantes de cambiar ese panorama, una vez que, antes de las elecciones de 2016, la ONU reforzó en el sitio web del Comité la necesidad de presentar candidatas al puesto, en virtud de que cinco de ellas concluían su mandato, entre ellas la representante española, Ana Peláez Narváez (ONU, 2016). No obstante, tan solo tres países presentaron candidatas mujeres, y ninguna fue elegida.

Ante el resultado de las elecciones, la reacción negativa de la comunidad internacional de derechos humanos fue intensa, con especial relevancia de la nota publicada por ONU Mujeres (2016) mostrando su preocupación por el futuro del reconocimiento de los derechos y voces de las mujeres con discapacidad. El Comité, por el contrario, no se pronunció sobre el asunto, dejando atrás una oportunidad de destacar la importancia de la participación femenina en el proceso de protección de los derechos de las personas con discapacidad.

### 2.3. El enfoque de la ONU al género y la discapacidad

El género y la discapacidad son dos elementos de gran peso para el desarrollo psicológico y social del individuo, como se ha podido observar en esta investigación. Por tratarse de aspectos que pueden tener una connotación negativa si no siguen lo que se considera el patrón social, generando discriminación interseccional, es necesario que se adopten leyes y políticas públicas específicas para evitar que esto ocurra.

En el ámbito internacional, las Naciones Unidas ejercen el papel de orientar a los Estados Miembros, casi la totalidad de países del mundo, en la elaboración de leyes y aplicación de políticas públicas concernientes a temas relevantes en la agenda internacional. Asimismo, la postura que la ONU adopta ante las cuestiones que se asocian intrínsecamente el género y la discapacidad dicta el tono que debe ser seguido por los Estados.

#### 2.3.1. Los derechos de las mujeres con discapacidad en la ONU

Garantizar el derecho de las personas con discapacidad no supone que las mujeres con discapacidad estén suficientemente protegidas por tales leyes. Como se ha querido demostrar a lo largo de esta investigación, el reconocimiento de las mujeres con discapacidad como grupo con necesidades específicas –y no siempre coincidentes con las de los hombres con discapacidad o las de las demás mujeres– tiene importancia política y

jurídica, por ofrecer mayor visibilidad a ese colectivo y ampliar su fuerza para la reivindicación de derechos.

En vista de ello, es esencial acompañar no solo la trayectoria recorrida por las personas con discapacidad dentro del sistema ONU rumbo a la positivación de sus demandas, sino también aquella trazada por las mujeres con discapacidad de modo específico, sus dificultades y logros en la búsqueda de un mayor espacio en el ámbito de Derecho Internacional.

Como afirma Ana Peláez Narváez (2007, p. 147), lograr que las mujeres con discapacidad sean incluidas en la agenda de trabajo de la ONU no ha sido tarea fácil. Una referencia al tema ocurrió por primera vez en 1975, en la “Declaración de los Derechos de los Impedidos”, pero de modo implícito, al prohibir la discriminación por cuestiones de género.

En 1980, se dio por primera vez una referencia expresa a las mujeres con discapacidad, en el seno de la Segunda Conferencia Mundial sobre Mujeres, realizada en Copenhague (Peláez Narváez, 2007, p. 147). En su informe final, se requirió a los Estados Miembros de la ONU, a sus agencias especializadas y demás organizaciones ofrecer atención especial a las mujeres con discapacidad, para promover su participación e integración en la sociedad (ONU, 1980, pp.61-63). El tema vuelve a ponerse de manifiesto en las conferencias mundiales sobre mujeres de los años siguientes. Hasta mayo de 2017, se organizaron cuatro conferencias y posteriores exámenes quinquenales.

En el “Programa de Acción Mundial para los Impedidos” (1982), las mujeres con discapacidad fueron mencionadas como un grupo especial entre las personas con discapacidad, resaltándose que las consecuencias de la discapacidad son particularmente graves para las mujeres, muchas veces viendo limitado o incluso impedido su acceso a la salud, la educación, la justicia y el trabajo, entre otros. En 1985, la OIT aprobó el “Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas”, en el que se establece que se debe respetar la igualdad de oportunidades y de trato para trabajadoras y trabajadores con discapacidad.

En 1990, el debate sobre mujeres con discapacidad fue por primera vez el tema central de un evento organizado por las Naciones Unidas, en el Seminario sobre las mujeres con discapacidad, en Viena (Peláez Narváez, 2007, p. 149). En la misma década, tuvo relevancia también la “Observación General n° 18: mujeres con Discapacidad”, aprobada por el Comité de la CEDAW, en 1991. En esta, el Comité:

[r]ecomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos información sobre las mujeres discapacitadas y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a su situación particular, incluidas las medidas especiales para que gocen de igualdad de oportunidades en materia de educación y de empleo, servicios de salud y seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de la vida social y cultural.

Hacer hincapié en la necesidad de recoger datos estadísticos sobre las mujeres con discapacidad fue importante, pues en el momento de la publicación de esa observación no se hacía esa exigencia en ningún documento en el ámbito de la ONU. En 1993, estas fueron mencionadas en las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad” como un grupo que merece especial atención debido a sus necesidades específicas.

En 1999, la CEDAW volvió a abordar la situación de las mujeres con discapacidad en una observación general. En su “Observación General n° 24: mujeres y salud”, el artículo 12 llama la atención de los Estados sobre las necesidades sanitarias y a los derechos de las mujeres en situación de desventaja, como las mujeres con discapacidad. Sin embargo, el mayor relieve dado a estas en los documentos de la ONU fue conquistado en los años 2000, con la inclusión expresa del tema en la Convención.

Se ha podido observar que, hasta los años ochenta, las mujeres con discapacidad fueron invisibles en el ámbito de la ONU y, a partir de esa década, pese a la mejora, ningún documento que mencionara expresamente a la mujer con discapacidad era legalmente vinculante, excepto el Convenio de la OIT (Arnade y Haefner, 2011, p. 44). Esto revela la importancia de una Convención como la CDPD, que transversaliza el género y lo consolida como una cuestión prioritaria dentro de la agenda de los derechos de las personas con discapacidad y de la ONU como un todo.

### 2.3.2. El enfoque de género en la Convención

El texto de la CDPD dedica un artículo específico a las mujeres con discapacidad (artículo 6) y transversaliza el tema en otros artículos y en el preámbulo, reflejando la importancia de dar notoriedad y protección especial a la condición enfrentada por las mujeres con discapacidad, positivando sus necesidades y derechos específicos. Como afirma Stephanie Ortoleva (2010, p. 113), la Convención adoptó “gafas de género” para tratar la discapacidad, mirando todo el contenido desde una perspectiva de género.

Como en el caso de las personas con discapacidad y su inclusión en los demás tratados de derechos humanos, las normas establecidas para las personas con discapacidad en general son aplicables a las mujeres pertenecientes a ese grupo. Sin embargo, ellas no han podido gozar de estos derechos en igualdad de condiciones en relación con los demás (Schumacher, 2014, p. 16).

El género no fue abordado al principio de las discusiones sobre la Convención, pues las delegaciones gubernamentales y las ONGs involucradas no tomaron conciencia de su urgencia (Peláez Narváez, 2012, p. 229). Paulatinamente el tema tomó fuerza, pero, mientras que algunos de los agentes implicados en el proceso de construcción de la CDPD ya tenían clara la necesidad de destacar las cuestiones de género en el texto, no había consenso sobre la relevancia de añadirlo.

Aquellos contrarios a la incorporación del género en la Convención argumentaban que las mujeres con discapacidad estaban protegidas por la CEDAW y estarían protegidas por la CDPD. Por tanto, no habría necesidad de incluir una perspectiva de género en el texto, sino que se debería mejorar, en el ámbito de la CEDAW, el proceso de presentación de informes y el monitoreo relativos a la situación de las mujeres con discapacidad (Ullrich, 2014, p. 78).

A su vez, los que defendían la perspectiva de género en la CDPD señalaban la insuficiencia de esa propuesta, pues su inclusión en la Convención tendría como objetivo, además de garantizar una protección específica a las mujeres, impulsar la visibilidad de las mujeres con discapacidad dentro de las discusiones sobre discapacidad (Ullrich, 2014, p. 78).

Otra propuesta fue la de hacer una referencia específica a las mujeres con discapacidad únicamente en el preámbulo, reconociendo la discriminación múltiple sufrida por ellas. De ese modo, no sería necesario incorporar ese debate al articulado de la Convención. Se justificaba esa sugerencia basándose en la función interpretativa de los artículos que se otorga a los preámbulos (Ullrich, 2014, p. 78 y 82). Sin embargo, esta solución fue criticada, pues el preámbulo no tiene poder vinculante, lo que podría ocasionar una ausencia de compromiso de los Estados Partes en relación con los derechos de las mujeres con discapacidad.

Finalmente, se llegó a un consenso: era necesario enfatizar, entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la sociedad en general, las formas específicas de discriminación que experimentan las mujeres con discapacidad y, en virtud de ello, sería crucial tratar la situación de las mujeres en los informes de los Estados, lo cual no podría ocurrir sin que se incorporase la perspectiva de género entre los artículos de la CDPD (Ullrich, 2014, p. 78).

El mejor modo de hacerlo, entre incluir el debate de género a lo largo de la Convención o dedicar un artículo específico para las mujeres, sería otro desafío a ser transpuesto. Por una parte, la propuesta de transversalizar la cuestión de género a lo largo de la Convención sin dedicarle un artículo específico fue considerada insuficiente, por no dar visibilidad a la importancia del tema, al no relevar la situación específica vivida por las mujeres con discapacidad entre los artículos. Además, la existencia de un artículo específico tendría también el rol de compensar la ausencia de mención explícita sobre mujeres con discapacidad en la CEDAW (Ullrich, 2014, p. 83).

Por otra parte, la idea de dedicar un artículo a las mujeres con discapacidad fue criticada con base en lo que ocurrió en la “Convención sobre los Derechos del Niño”, al tratar los niños con discapacidad en el artículo 23. Algunos Estados Partes consideraron que todos los derechos de ese colectivo estuviesen contemplados por dicho artículo, limitando la aplicación o no aplicando los demás artículos a los niños con discapacidad, pese a que esa no hubiese sido la intención de la convención (Ullrich, 2014, p. 82). En vista de ello, se optó por un enfoque de doble vía (Peláez Narváez, 2012, p. 232): dedicar a las mujeres con discapacidad un artículo específico (artículo 6) y transversalizar el género



a lo largo del texto, con referencia al género en algunos artículos, a saber, los artículos 8, 16, 25 y 28.

En definitiva, la opción por ese doble enfoque en la Convención garantiza que las mujeres con discapacidad tengan reconocido un artículo en el marco normativo de la discapacidad –relevando la discriminación interseccional que sufren y garantizándoles una protección especial para que puedan gozar de sus derechos y libertades fundamentales– al mismo tiempo que referencias al género son realizadas en los artículos de toma de conciencia, violencia, salud y nivel de vida adecuado. Se resalta además que la CDPD reconoce que la discriminación debe ser enfrentada no solo cuando ocurre por cuestión de discapacidad, sino también de género.

Otra propuesta elaborada por algunas de las activistas para resaltar el género en la CDPD fue la de que la Convención se llamase “Convención sobre los Derechos de las Mujeres y Hombres con Discapacidad”, utilizando el lenguaje inclusivo para visibilizar las mujeres en el colectivo de las personas con discapacidad. Finalmente, la propuesta no tuvo éxito, pero se logró incorporar las cuestiones de género en la CDPD de modo amplio (Jaime, Soler y Teixeira, 2015, p. 7). Si en el primer borrador de la Convención, disponible en 2004, eran escasas las referencias a las mujeres o al género (Peláez Narváez, 2012, p. 231), la versión definitiva del documento, presentada dos años después, contiene un artículo íntegramente dedicado a ellas y transversaliza el tema a lo largo del texto.

En ese proceso de visibilidad del género en la Convención, fue importante la labor desempeñada por la facilitadora<sup>54</sup> responsable de llevar a cabo la inclusión de las mujeres con discapacidad en la CDPD. La elegida por el presidente del comité *ad hoc* fue Theresia Degener (Arnade y Haefner, 2011, p. 32), actual presidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además del texto de la Convención, el género posee proyección en los documentos elaborados por el Comité, como las observaciones finales a los Estados Partes y las

---

<sup>54</sup> Como esclarece Ana Peláez Narváez (2012, p. 233), las personas facilitadoras en la elaboración del borrador de la CDPD eran elegidas para actuar en casos en que las delegaciones gubernamentales fuesen incapaces de llegar a un acuerdo sobre un artículo en las sesiones plenarias del comité *ad hoc*. Su papel era el de elaborar un posicionamiento colectivo de aquellos gobiernos que desearan participar en el proceso.

observaciones generales. Hasta el momento, han sido aprobadas observaciones generales sobre igual reconocimiento como persona ante la ley (artículo 12), accesibilidad (artículo 9), ambas el 11 de abril de 2014, educación (artículo 24) y mujeres y niñas con discapacidad (artículo 6), ambas el 26 de agosto de 2016. La Observación General nº 3 será analizada en un apartado específico más adelante.

En la “Observación general sobre el artículo 9: accesibilidad”, el Comité sostiene que, para ofrecer una protección efectiva y significativa frente a la violencia, el abuso y la explotación que pueden sufrir las personas con discapacidad, en especial las mujeres y los niños, los centros de acogida, servicios de apoyo y procedimientos deben ser accesibles. Esa preocupación del Comité interrelaciona la protección a la violencia, incluso la de carácter sexual, el género y la accesibilidad.

A su vez, en la “Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante ley”, el Comité afirma que las mujeres deben poseer capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los hombres, lo que implica esfuerzos para eliminar la discriminación interseccional que sufren las mujeres con discapacidad, que también tiene consecuencias en ámbito legal. Como se indica en el documento, algunas demostraciones de esa discriminación son las tasas elevadas de esterilización forzosa que sufren, la denegación del control de su salud reproductiva y la presunción de que no son capaces de otorgar su consentimiento para las relaciones sexuales.

Por último, en la “Observación general sobre el artículo 24: el derecho a la educación inclusiva”, el Comité también destaca las consecuencias que la discriminación interseccional sufrida por las mujeres con discapacidad puede tener en el ámbito educacional, exigiendo medidas para prohibir que niñas y mujeres sean impedidas de estudiar, que se eliminen de los libros estereotipos de género y discapacidad y que se enfrente la violencia escolar hacia ellas.

A través del análisis del contenido de estos documentos, se observa que, desde su aprobación, la Convención refleja la intención de contemplar las cuestiones específicas de género, y que el Comité mantiene esa postura incluyendo el asunto en los documentos posteriores a la Convención que elabora.

No obstante, cabe una crítica a la transversalidad de género en la Convención, una vez que no está presente en artículos sobre los cuales las mujeres, históricamente, enfrentan mayores desafíos de igualdad en relación con los hombres, como trabajo y empleo, participación política y pública, vida independiente, entre otros. Como afirma Gloria Álvarez Ramírez (2012, p. 45), el hecho de que la transversalidad solo se haga en algunos derechos revela la persistente infrapresencia de las cuestiones de género en las políticas de discapacidad. La autora también critica la ausencia de mención a la violencia sexual en el texto de la Convención. Para ella, la referencia a la violencia que contiene el artículo 16 es insuficiente para simbolizar la adopción de una adecuada perspectiva de género en el tema de la violencia sexual, considerando el alto nivel de vulneración de derechos que las mujeres con discapacidad sufren en ese ámbito (Álvarez Ramírez, 2012, p. 49).

Para minimizar la ausencia del género en las cuestiones mencionadas y tratar la violencia sexual y otros tipos de violencia de género, profundizando el debate sobre el asunto, fue elaborada por el Comité la “Observación General nº 3: mujeres y niñas con discapacidad”.

Pese a la ausencia de referencia expresa a la violencia sexual en la Convención, es posible encontrar algunas referencias indirectas al tema. En el preámbulo, se destaca la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad, reconociendo que ellas suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación. A su vez, en el artículo 16<sup>55</sup>, que

---

<sup>55</sup> Los demás apartados del artículo 16 disponen:

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

incluye una referencia al género, se trata la violencia en general, y se afirma, en los párrafos iniciales, que

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.

La mención a la importancia de tener en cuenta el género al adoptar medidas contra la violencia permite que el Comité exija de los Estados Partes actitudes específicas de protección a las mujeres contra la violencia. Además, al referirse de modo general a la violencia, se entiende que la violencia sexual debe ser objeto de las medidas establecidas en ese artículo, como aclaró el Comité al elaborar la Observación General n° 3, que será profundizada más adelante.

### 2.3.3. El enfoque de la ONU a la violencia contra la mujer

Además de la protección garantizada por la CDPD, las mujeres con discapacidad gozan de las garantías ofrecidas por los documentos aprobados en el seno de la ONU destinados a las mujeres. Asimismo, considerando que la violencia sexual se halla en un contexto de violencia de género y con el objetivo de examinar las herramientas de protección de que disponen las mujeres con discapacidad ante esa amenaza, serán analizados los documentos más relevantes, en el ámbito de las Naciones Unidas, que tratan la violencia contra la mujer y la violencia sexual, aunque no se centren expresamente en las mujeres con discapacidad.

El reconocimiento de la violencia contra la mujer dentro del paradigma de los derechos humanos es históricamente reciente. Hasta mediados de los años ochenta, esta no se hallaba en la agenda internacional, razón por la que el término violencia no aparece en la CEDAW, aprobada en 1979 (Ullrich, 2014, p. 140), y tampoco hay referencias a delitos de naturaleza sexual. La cierta novedad de este debate puede ser una de las razones por las que la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad no es suficientemente debatida ni estudiada. Pese a la ausencia de la expresión en esta convención, la actuación del Comité de la CEDAW ejerció un papel fundamental en el relieve del contenido en la agenda de la ONU, culminando en el reconocimiento de la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos (Ullrich, 2014, p. 140).

En 1980 se celebró la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en Copenhague, uno de los eventos en homenaje al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). En la Conferencia, fue aprobada una resolución sobre la violencia en la familia, con referencia a la violencia doméstica contra la mujer.

En el ámbito de la CEDAW, la violencia sexual fue tratada en la “Observación General nº 12: violencia contra la mujer”, aprobada en 1989, y en la Observación General nº 19 de la CEDAW, sobre el mismo tema, aprobada en 1992. En la primera de ellas se recomendó a los Estados Partes que contemplasen en sus informes periódicos al Comité información sobre la legislación vigente en el ámbito nacional para proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana, incluso la sexual, así como datos estadísticos sobre la cuestión. En la segunda se les orientó a aplicar la CEDAW mediante medidas específicas centradas en eliminar todo tipo de violencia contra la mujer.

En la Observación General nº 19 se afirma que, hasta su aprobación, los informes de los Estados Partes no reflejaban de modo adecuado la estrecha vinculación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Con el objetivo de cambiar esa situación, la referida observación fue aprobada. En el documento se destaca la violencia sexual en sus diversas formas, como el turismo sexual y la trata de mujeres para fines sexuales.

El año siguiente, la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” fue aprobada por la Asamblea General de la ONU. La definición de violencia presentada en el documento establece que la violencia contra la mujer es:

cualquier acto de violencia basado en el género que produzca, o acabe produciendo resultados de daño físico, psíquico o sexual o sufrimiento en la mujer, incluyendo amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de libertad, ocurriendo todo esto tanto el ámbito público como en el privado.

Además, en la Declaración se reconoce que

[...] la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.

Otro aspecto importante logrado por la Declaración fue el reconocimiento de que las mujeres con discapacidad son particularmente vulnerables a la violencia. Así como en la Observación General, en el documento también se destaca la violencia sexual como un problema grave a ser enfrentado por los Estados Partes.

A través de la Declaración y de la Observación General n° 19, la comunidad internacional afirmó inequívocamente que todo tipo de violencia contra la mujer se consideraría discriminación de la mujer, según la definición que se establece en el artículo 1 de la CEDAW, y que los Estados Partes asumirían el compromiso de eliminarla (Ullrich, 2014, p. 140).

En 1994, la ONU asignó una Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. En el año siguiente, fue aprobada la “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing”, adoptada por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por la ONU. En el documento se menciona la violencia sexual al hablar de datos sobre la violencia contra las mujeres.

En 2007, la ONU publicó el estudio “Poner fin a la violencia contra la mujer –De las palabras a los hechos”. En el estudio, las Naciones Unidas resaltan que los motivos para la violencia de género son el uso de la fuerza para resolver conflictos, las doctrinas sobre la intimidad y la inercia de los Estados, reforzando así el deber de los Estados Miembros de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En el documento también se indican medidas a ser cumplidas por los Estados para alcanzar ese objetivo, además de destacar temas como la violencia sexual, la esterilización forzosa, la discriminación múltiple y las mujeres con discapacidad en diversos momentos.

Entre las acciones de la ONU para la lucha contra la violencia de género, se lanzó por el entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la campaña “UNiDOS para poner fin a la violencia contra las mujeres”, que contempló el período 2008-2015, estableciendo una serie de medidas a ser ejecutadas a lo largo de estos años. El documento con las acciones a ser concretadas en la campaña no hace referencia a las mujeres con discapacidad.

En el “Informe mundial de la discapacidad”, de 2011, no se hace una diferenciación entre los tipos de violencia que sufren hombres y mujeres con discapacidad y tampoco se menciona su frecuencia desglosada por sexo. Los hombres con discapacidad también son un blanco para la violencia, pero la experiencia de hombres y mujeres ante la violencia es vivida de modo distinto, y adoptar una postura de neutralidad en relación con esto no parece ser el modo más adecuado de tratarlo, por invisibilizar la violencia específica contra las mujeres, como el aborto forzoso.

En 2012, la ONU divulgó el “Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad”, cuyo objetivo fue el de examinar las causas de la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, analizar leyes, políticas y programas nacionales de protección y prevención de la violencia, señalar las dificultades de la eliminación de la violencia y recomendar medidas legislativas, administrativas, políticas y programáticas necesarias para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad. En el estudio se menciona también la violencia sexual.

A su vez, ONU Mujeres publicó en 2015 el documento “Un marco de apoyo a la prevención de la violencia contra la mujer”, como resultado de las discusiones ocurridas en la 57ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada en 2013. En el documento se resalta que las mujeres con discapacidad son especialmente susceptibles a la violencia de género.

A través de ese breve recorrido por los documentos de la ONU que tratan la violencia contra la mujer, y la violencia sexual en específico, se observa que la preocupación de la comunidad internacional por el tema ha crecido las últimas décadas, así como la presión para que los Estados cumplan con el compromiso de erradicar la violencia de género en sus países. Pese a que, en la práctica, los casos de violencia sexual contra las mujeres y, en lo que concierne a esta investigación, contra las mujeres con discapacidad, se mantenga frecuente, medidas de ese tipo contribuyen para enfrentar el problema.

#### 2.3.4. La Observación General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad

Un importante paso en la búsqueda por la igualdad de género en cuestiones de discapacidad fue dado con la aprobación de la “Observación General nº 3, artículo 6: Mujeres y Niñas con Discapacidad” por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Observación General nº 3 auxilia a los Estados en la interpretación y aplicación de la CDPD en cuestiones de género, aplicando a los derechos garantizados en la Convención en contextos específicos.

Como esclarecen Carolyn Frohmader y Karin Swift (2016, p. 8), las observaciones generales son un componente primordial para garantizar las obligaciones y el compromiso de los Estados vinculados a un tratado, pues ofrecen información sobre los aspectos prácticos de la garantía de los derechos humanos y establecen una serie de criterios para evaluar el progreso de los Estados en la implementación de estos derechos. Además, se resalta la relevancia de estos documentos para la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad, por su carácter explicativo y amplio alcance (Kanter, 2015, p. 35).



Cabe añadir que ese tipo de documento apoya a miembros de gobierno y representantes de la sociedad civil en la comprensión de las provisiones de un tratado, en este caso la CDPD, y contribuye al refuerzo de la defensa de derechos a nivel nacional (Frohman y Swift, 2016, p. 8), funcionando como una guía a los Estados Partes para elucidar ciertas cuestiones abordadas en la Convención (Lorenzo, Palacios, 2016, p. 30).

En lo que concierne a su estructura, en el documento se describe el contenido normativo del artículo 6, identificando las obligaciones de los Estados Partes relacionadas con la materia y, a partir de una interpretación sistemática, se examina el referido artículo en relación con otras disposiciones de la Convención que estén relacionadas con mujeres y niñas con discapacidad (Lorenzo y Palacios, 2016, p. 32). Muchas veces se utilizan ejemplos y aclaraciones dadas en observaciones finales anteriormente elaboradas por el Comité para sostener sus argumentos.

En la Observación, el Comité reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan barreras en distintas áreas –barreras que crean situaciones de discriminación interseccional contra la mujer–, que las leyes y políticas públicas centradas en la discapacidad fueron negligentes con los aspectos asociados al género y, a su vez, que las leyes y políticas dirigidas a las mujeres han ignorado la discapacidad. En consecuencia, dicha invisibilidad ha perpetuado la discriminación interseccional contra las mujeres y niñas con discapacidad.

El Comité también esclarece el objetivo de la existencia de un artículo específico para las mujeres con discapacidad. Es un artículo transversal, asociado a todos los demás artículos de la Convención, para que los Estados Partes recuerden incluir a sus derechos en todas sus acciones para aplicar la Convención, especialmente elaborando medidas para garantizar que las mujeres con discapacidad no sufran discriminación múltiple e interseccional y puedan disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad en relación con los demás.

Asimismo, el Comité recalca que, pese a que no siempre se haga una referencia directa al género o a las mujeres con discapacidad en el texto de la Convención, se debe

interpretar sus artículos considerando las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos.

Específicamente en relación con la violencia contra las mujeres con discapacidad, la Observación General aporta relevantes aclaraciones, cuando se menciona el artículo 16, que trata la violencia, como especialmente asociado a cuestiones de género. También se destaca que las mujeres con discapacidad se encuentran bajo un mayor riesgo de sufrir violencia, explotación y abuso si son comparadas a las demás mujeres.

Como se afirma en el documento, esto ocurre porque el derecho a una vida libre de violencia, explotación y abuso puede ser amenazado por estereotipos negativos que infantilizan a las mujeres con discapacidad, dudan de su habilidad de discernimiento o presumen que es una persona asexual o hipersexualizada, aumentando su riesgo de sufrir violencia, como se ha profundizado en el capítulo anterior.

El Comité también dedica un párrafo específico del documento a la violencia sexual contra mujeres y niñas con discapacidad. Según aporta, esta incluye la violación y el acoso sexual y ocurre en distintos contextos, en instituciones, en el ámbito de la familia y de la comunidad. Resalta además que algunas mujeres con discapacidad, especialmente las mujeres sordas, sordociegas y con discapacidad intelectual, pueden exponerse a un mayor riesgo de violencia y acoso debido a factores como el aislamiento, la dependencia o la opresión.

Se destaca que mujeres y niñas con discapacidad poseen especial riesgo de ser sometidas a “pruebas de virginidad” y, por mitos asociados al VIH/SIDA, ser sometidas a “violaciones de vírgenes”. Finalmente, refuerza que prácticas basadas en interpretaciones patriarcales de la cultura no pueden ser utilizadas para justificar la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad.

A tenor de lo dicho, se puede observar que la Observación General aquí analizada da una importancia mayor al tema de la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad que la Convención, que no lo menciona expresamente. Considerada la propia naturaleza del documento, es posible desarrollar de modo más minucioso aspectos que no están expresados en la Convención. La Observación General parece tener entre sus

objetivos destacar el debate sobre la violencia sexual, hasta entonces no contextualizado a la discapacidad en el ámbito internacional.

Cabe señalar, sin embargo, que en el documento no se menciona el artículo 31<sup>56</sup>, que trata la recopilación de datos y estadísticas, dejando atrás la oportunidad de asociarlo a la importancia de obtener datos fiables sobre los casos de violencia sexual en las mujeres con discapacidad e incluso datos sobre cuántas mujeres con discapacidad hay en cada Estado.

Encuestas demuestran (Blanck, Kruse y Shur, 2013, p. 158) que las mujeres son mayoría entre las personas con discapacidad, pero dichos estudios se basan en cifras estimativas, debido a la ausencia de datos basados en los mismos criterios en cada país. Es importante incentivar a los Estados Partes a realizar encuestas que desglosen los datos por sexo e incluyan cuestiones vividas por las mujeres, como la agresión de violencia sexual. Por ello, en esta investigación se entiende que hay una relación directa entre el artículo 31 y la protección a las mujeres con discapacidad, que debe ser recalcada.

También hay que mencionar el carácter no vinculante de las observaciones generales, es decir, los Estados Partes no están legalmente obligados a dar cumplimiento a lo que está dispuesto en ese tipo de documento. En consecuencia, no posee el mismo efecto jurídico el desarrollo de un tema en el ámbito de una observación general en relación con el que tendría si estuviese positivado en una convención. Como resalta Stefan Trömel (2009, p. 1.073), muchos Estados Miembros de la ONU cuestionan el grado de obligatoriedad de las observaciones generales. Esto podría debilitar el debate sobre la

---

<sup>56</sup> El artículo 31 dispone: 1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá:

- a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;
- b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de estadísticas.

2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.

3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas.

protección de las mujeres con discapacidad ante la violencia sexual en el ámbito internacional.

Sin embargo, el texto de la Observación General sobre mujeres y niñas con discapacidad tiene por objetivo ser una guía interpretativa de la CDPD a los Estados Partes, sin la intención de crear nuevos derechos, sino aclarar y pormenorizar los derechos positivados en la Convención. El documento también representa la interpretación oficial de la ONU (Kanter, 2015, p. 35) en cuanto a la intersección entre género y discapacidad. Aprobada durante el desarrollo de la presente investigación, la Observación General n° 3 representa una herramienta para fundamentar la obligación que tienen los Estados Partes de ofrecer a las mujeres con discapacidad una protección específica contra la amenaza de violencia sexual.

De ese modo, además del peso y de la importancia política comunes a todos los documentos de la ONU que no son jurídicamente vinculantes, es posible considerar que la Observación General n° 3 posee el rol fundamental de dictar las bases de la interpretación jurídica a ser realizada en cuestiones de género. Esto asegura que el artículo 16 de la Convención, entre otros, no pueda ser interpretado de modo dissociado a lo que dispone la Observación, pues su objetivo es el de reflejar la intención de lo que establece el documento original de la CDPD. En virtud de eso, en 2016 las mujeres con discapacidad conquistaron la aprobación de un documento más que actúa como base jurídica y política para exigir la garantía de sus derechos.

## CAPÍTULO III: UN ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LOS DOCUMENTOS DEL COMITÉ A LOS ESTADOS

### 3.1. Análisis de los documentos elaborados por el Comité a los Estados Partes

Son muchas las vías de diálogo entre el Comité y los Estados Partes, como los informes periódicos de cada Estado al Comité y las reuniones de seguimiento en Ginebra. Sin embargo, uno de los mayores canales de comunicación entre el Comité y los Estados Partes son las observaciones finales emitidas con posterioridad a las reuniones. Este documento reúne los aspectos positivos realizados por el Comité y sus motivos de preocupación en relación con la aplicación de la CDPD en cada país, para guiar la actuación del Estado en la implementación de los derechos de las personas con discapacidad los años posteriores.

Como esclarece Ana Sastre Campo (2009, p. 345), el documento es una evaluación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de la Convención por parte de los Estados, y su objetivo es servir de guía para la correcta aplicación del tratado en el país objeto de análisis. En general, el Comité se reúne dos veces al año, como se infiere por la frecuencia de observaciones finales publicadas, y, en cada encuentro, promueve reuniones con distintos Estados signatarios.

En vista de ello, es posible suponer que las observaciones finales tienen impacto en cómo un tema será tratado a nivel nacional, en las leyes y políticas públicas elaboradas por cada Estado Parte. Por ello, se ha decidido analizar las observaciones finales con la intención de examinar con qué frecuencia se aborda la violencia sexual, de qué manera se trata el asunto y cuáles son las recomendaciones a los Estados Partes en lo que se refiere a la prevención y la penalización de ese delito.

Otro documento importante para la promoción de un diálogo constructivo entre los Estados Partes y el Comité son las listas de cuestiones. No se tratan de listas estándar, sino formuladas específicamente para la realidad de cada país, posteriormente al análisis de los informes iniciales de cada Estado. Asimismo, el Comité formula esa lista con preguntas para que los Estados Partes aclaren o complementen la información inicialmente enviada (*International Disability Alliance*, 2017).

Las listas de cuestiones son sucintas, sin un mayor desarrollo de los asuntos mencionados. Sin embargo, se ha considerado relevante su análisis para garantizar el examen de todos los documentos del Comité a los Estados Partes, ofreciendo un amplio alcance de las manifestaciones del Comité sobre la violencia sexual.

Para el estudio de ambos documentos, se han recopilado para esta investigación todas las observaciones finales y las listas de cuestiones<sup>57</sup> a los Estados Partes<sup>58</sup> publicadas por el Comité en su sitio web hasta 10 de abril 2017.

### 3.1.1. Análisis de las listas de cuestiones

Este apartado se dedicará al análisis de las listas de cuestiones, que, como se indica en el “Reglamento del Comité”, sirven de base para que los Estados Partes ofrezcan más información sobre la situación de las personas con discapacidad en el país, en un máximo de 30 páginas. Asimismo, los gráficos que se explican a continuación muestran un retrato del relieve de los temas y artículos de la Convención que, a grandes rasgos, el Comité considera que merecen mayor atención de los Estados Partes.

Los artículos 6, 16 y 31 son el centro de la investigación por ser considerados los más relevantes para analizar el enfoque de la violencia sexual. Por una parte, los artículos 6 y 16 tratan la cuestión de las mujeres con discapacidad y la protección contra cualquier tipo de violencia. Por otra parte, el artículo 31 prevé la posibilidad de que el Comité refuerce a los Estados Partes la importancia de presentar datos y estadísticas específicas sobre mujeres con discapacidad y sobre la frecuencia de violencia sexual contra ellas en

---

<sup>57</sup> Se ha recopilado únicamente las listas de cuestiones referentes a los Estados Partes que ya hayan recibido las observaciones finales correspondientes de parte del Comité. Ese criterio ha sido establecido para que no hubiese diferencia entre el número total de observaciones finales y de listas de cuestiones, teniendo en cuenta que algunos Estados ya han recibido la lista de cuestiones, pero no la observación final. Debido a esa delimitación, ambos poseen un total de 47 documentos cada uno.

<sup>58</sup> Hasta el 10 de abril de 2017, la ONU había divulgado las observaciones finales de los siguientes Estados Partes: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Etiopía, Gabón, Guatemala, Hungría, Islas Cook, Italia, Lituania, Mauricio, México, Mongolia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, República Checa, República de Corea, República de Kenia, República Dominicana, Serbia, Suecia, Tailandia, Túnez, Turkmenistán, Ucrania, Unión Europea, Uganda y Uruguay (47 Estados). Las observaciones finales se refieren a sesiones que ocurrieron entre el inicio de las actividades del Comité y agosto de 2016.

cada país, puesto que la ausencia de datos ha sido una dificultad observada a lo largo de esta investigación.

Gráfico I – menciones al artículo 6 en las listas de cuestiones

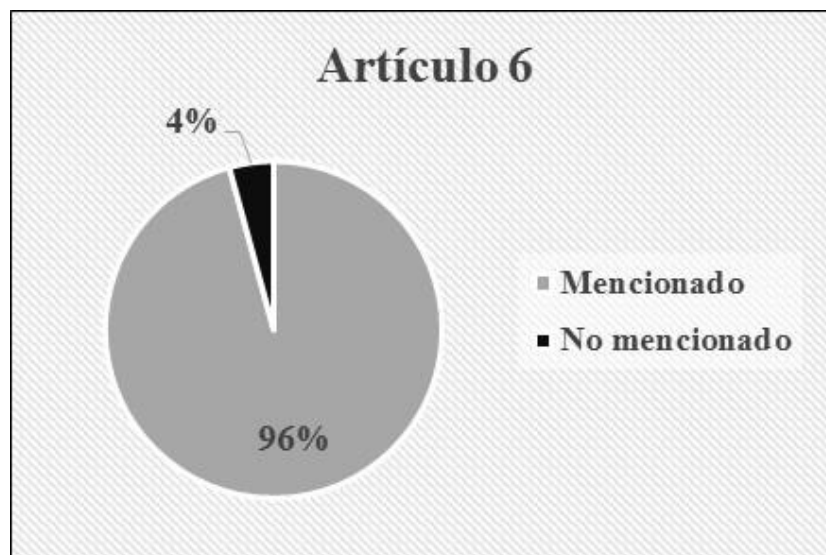


Gráfico II – menciones al artículo 16 en las listas de cuestiones

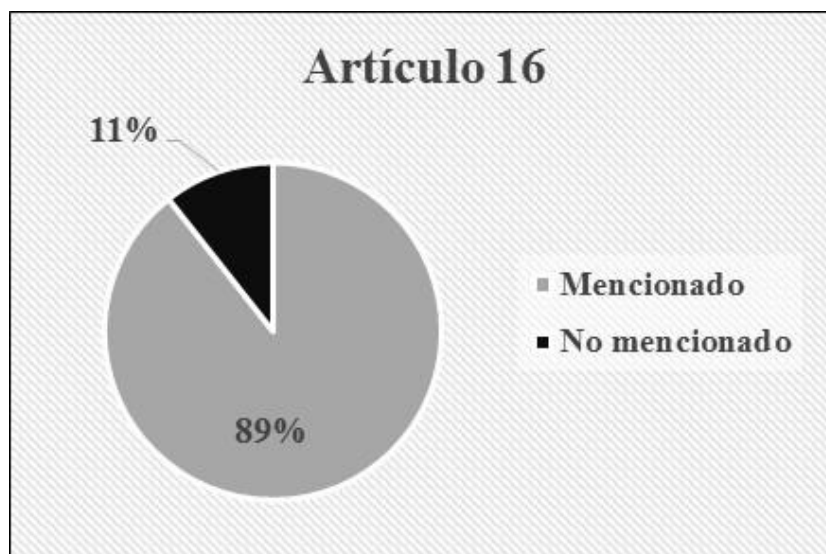
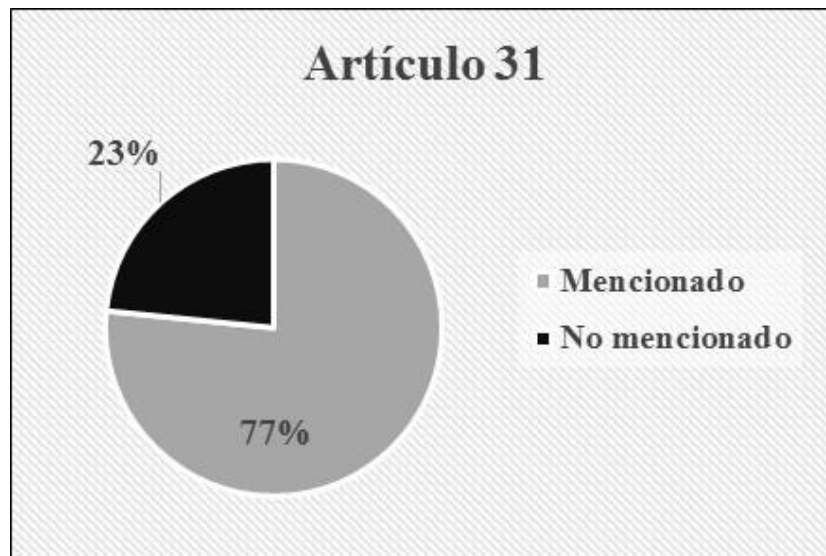


Gráfico III – menciones al artículo 31 en las listas de cuestiones



Los gráficos evidencian que los artículos 6, 16 y 31 se destacan entre los mencionados en las listas de cuestiones. La gran relevancia de estos artículos se percibe especialmente en relación con el artículo 6, mencionado en 45 de las 47 listas y omitido solamente en las listas de Alemania y Perú. Esto contribuye a la consolidación de los derechos de las mujeres con discapacidad, especialmente considerando el historial de invisibilidad a la que han sido sometidas las mujeres dentro del movimiento de las personas con discapacidad.

Los demás artículos siguen el mismo patrón. El artículo 16 es mencionado en 42 de las 47 listas de cuestiones, estando ausente en las listas de Costa Rica, Ecuador, México, Túnez y Turkmenistán. A su vez, el artículo 31 se cita algo menos, en 36 listas. No consta en las listas de Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, China, Ecuador, España, Nueva Zelanda, República Checa y Ucrania.

Específicamente en relación con el artículo 31, Sastre Campo (2009, p. 346) entiende que la obligación que contiene el artículo, de recopilar datos estadísticos sobre las personas con discapacidad, es uno de los más importantes instrumentos para la elaboración de los informes iniciales de los Estados, por lo que todos los avances realizados por cada Estado en ese sentido deberían reflejarse en sus primeros informes. En consecuencia, dada la relevancia del artículo 31, en el caso de que no se reflejen datos sobre violencia sexual



en los informes iniciales, el Comité debería mencionar el asunto en las listas de cuestiones. La prioridad que el Comité da a esto es crucial para la lucha contra la violencia sexual que amenaza a las mujeres con discapacidad. Avanzar en ese aspecto implica reforzar a los Estados Partes sobre que estas requieren atención específica y centrada en sus necesidades, incluso en lo que concierne a la violencia, y que la ausencia de datos estadísticos dificulta la elaboración de políticas públicas al respecto. En ese sentido, corrobora a ese proceso que el Comité solicite a los Estados Partes más información sobre datos estadísticos.

Sin embargo, estos son solo los primeros pasos para enfrentar la violencia sexual. La inclusión de una mención expresa al término en los documentos elaborados por el Comité a los Estados Partes contribuye más específicamente para dar mayor relieve al asunto. Por ello, se ha investigado también con qué frecuencia la expresión violencia sexual ha sido mencionada en las listas de cuestiones. Los resultados se muestran en los Gráficos IV y V.

Gráfico IV – menciones a la violencia sexual en las listas de cuestiones

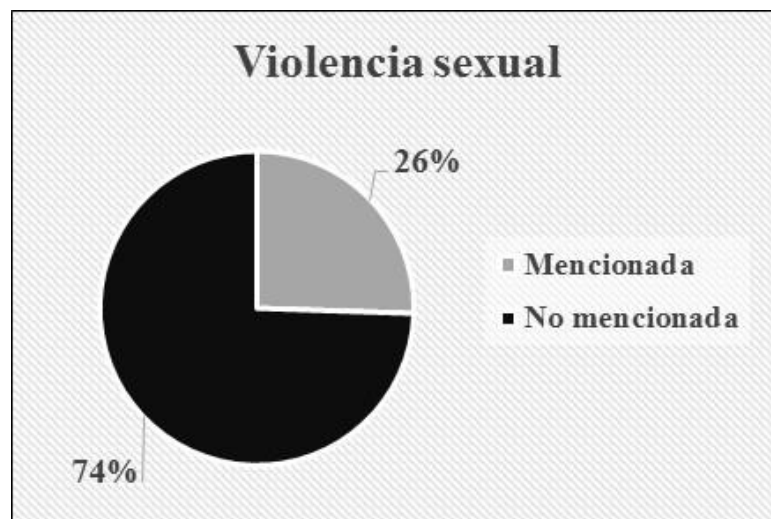
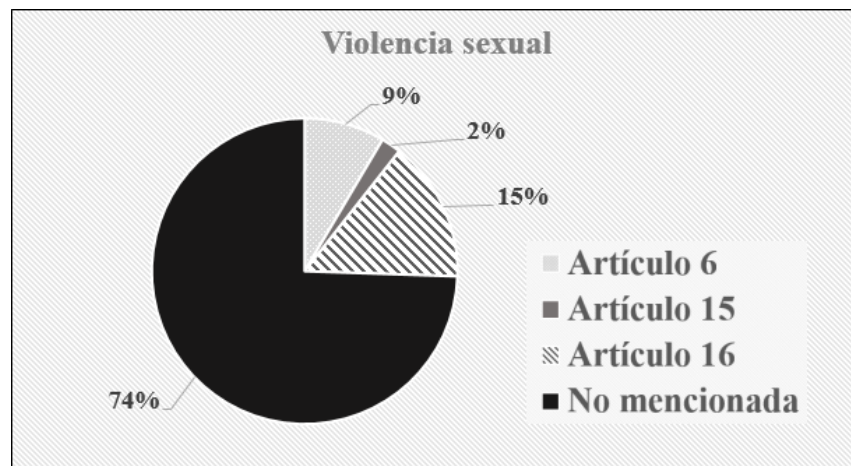


Gráfico V – menciones a la violencia sexual en las listas de cuestiones desglosadas por artículo



El examen aquí realizado se ha centrado en la referencia expresa a la violencia sexual o a términos que tengan relación directa con ello, como abuso y explotación sexual. Para ello, se han establecido las siguientes palabras clave como parámetro de búsqueda: violencia sexual, violación, explotación sexual y abuso sexual<sup>59</sup>. De ese modo, se han contemplado los supuestos contenidos en la definición de violencia sexual de la OMS<sup>60</sup>. El mismo criterio ha sido aplicado al análisis de las observaciones finales.

Cabe señalar que varias listas de cuestiones aluden a la violencia contra la mujer, demostrando la preocupación del Comité por solicitar más detalles sobre el asunto. Sin embargo, se busca averiguar si la violencia sexual, específicamente, es resaltada dentro de lo que engloba la violencia contra la mujer. Por ello, se han contabilizado únicamente las listas de cuestiones que expresamente se refieren a la violencia sexual o correlatos.

<sup>59</sup> En el caso de las listas de cuestiones de Brasil, Gabón, República de Kenia y Unión Europea, no estaba disponible la versión en español al momento de la consulta, por lo que, en estos casos, se han buscado las palabras clave: *sexual violence*, *rape*, *sexual exploitation* y *sexual abuse*.

<sup>60</sup> Como se ha mencionado en el apartado 1.1, la OMS considera que la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.

Por una parte, el Gráfico IV expresa las referencias a la violencia sexual presentes en el total de listas de cuestiones seleccionadas. Al analizar ese gráfico, se constata que la cuestión es abordada en 12 de las 47 listas. Por otra parte, en el Gráfico V se observa que la frecuencia de menciones a la violencia sexual desglosada por cada artículo en que es mencionada: siete veces en el artículo 16<sup>61</sup>, cuatro veces en el artículo 6<sup>62</sup> y una vez en el artículo 15<sup>63</sup>.

En cuanto a la importancia de concienciar a los Estados Partes sobre la amenaza de violencia sexual que sufren las mujeres con discapacidad, parece no ser relevante si la mención al tema se desarrolla en el artículo 6 o en el artículo 16. Pese a que los datos indiquen una preferencia del Comité por tratar el asunto en el artículo 16, ambos artículos, por su temática, son pertinentes para abordar la violencia sexual contra mujeres con discapacidad.

En relación con el artículo 15<sup>64</sup>, en contraste, no se puede afirmar lo mismo. A este artículo, que trata la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se asocian cuestiones concernientes a malos tratos en instituciones psiquiátricas en las observaciones finales. Por tanto, al mencionarlo únicamente en el ámbito del artículo 15, como ocurre en la lista de cuestiones de México, el Comité aborda la violencia sexual solamente en el entorno de esas instituciones<sup>65</sup>. Al no tratarlo en otros contextos, se pierde la oportunidad de solicitar información sobre la violencia sexual en las demás situaciones, abordando la cuestión de modo limitado.

---

<sup>61</sup> Argentina, Austria, El Salvador, Guatemala, Lituania, Paraguay y Perú.

<sup>62</sup> Bélgica, Ecuador, Serbia y Tailandia.

<sup>63</sup> México.

<sup>64</sup> El artículo 15 dispone: 1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

<sup>65</sup> La lista de cuestiones de México dispone: “Sírvanse explicar qué acciones concretas está tomando el Estado parte para prevenir, sancionar y erradicar los abusos que se cometen contra las personas con discapacidad psicosocial en instituciones psiquiátricas, incluyendo abusos físicos, sexuales y condiciones inhumanas y degradantes, como restricciones químicas, físicas o mecánicas y aislamientos prolongados.”

Se ha mencionado la violencia sexual o correlatos en las listas de cuestiones de los siguientes Estados Partes: Argentina, Austria, Bélgica, Ecuador, El Salvador, Guala, Lituania, México, Paraguay, Perú, Serbia y Tailandia. La mayoría de estos Estados ya había mencionado la violencia sexual en sus informes iniciales<sup>66</sup>, pero el Comité consideró que la información ofrecida no era suficiente y destacó el tema en sus preguntas, solicitando que se profundizara el asunto.

De los 47 informes iniciales analizados, nueve no abordaron la violencia sexual. Son los informes iniciales de los siguientes países: Azerbaiyán, Chile<sup>67</sup>, Costa Rica, España, Italia<sup>68</sup>, Mongolia, Paraguay, Qatar y Suecia. Por una parte, esto demuestra que la mayoría de los Estados Partes dio relevancia a la violencia sexual ya en el primer contacto con el Comité, algo importante para la eliminación de ese tipo de violencia. Por otra parte, llama la atención que el Comité no haya solicitado en las listas de cuestiones de estos Estados más información sobre esto, a excepción de Paraguay. Como resultado, entre las listas de cuestiones en las que se pidió más información sobre la violencia sexual consta únicamente Paraguay entre los Estados que no habían tratado el tema en su informe inicial. En cuanto a los demás Estados que no incluyeron el asunto en su lista de cuestiones, el Comité no aprovechó la oportunidad para recalcar que se debe tener en cuenta el riesgo que enfrentan las mujeres con discapacidad frente a ese tipo de violencia.

Si no se requiere que los Estados Partes que no trataron la violencia sexual en su informe inicial presten información sobre esto, el Comité es privado de la posibilidad de

---

<sup>66</sup> Pese a que el objetivo de esta investigación no sea el de analizar los documentos enviados por los Estados Partes al Comité, se ha optado por examinar la frecuencia de la expresión violencia sexual en los informes iniciales de los Estados Partes que son objeto de estudio en esta investigación. Esta decisión se ha basado en que el contenido de los informes iniciales puede actuar como guía al Comité para elegir los temas a ser abordados en las listas de cuestiones, una vez que, en las listas, se solicita a los Estados Partes que aclaren o profundicen la información sobre determinados asuntos. En consecuencia, la mención o ausencia de mención a la violencia sexual en los informes iniciales de los Estados puede afectar el enfoque dado por el Comité al asunto en las listas de cuestiones.

<sup>67</sup> En su informe inicial, Chile no mencionó la violencia o abuso sexual y, al mencionar la explotación sexual, hizo referencia únicamente a la explotación sexual infantil, por lo que, debido al objeto de estudio de esta investigación, se ha considerado que Chile no mencionó la violencia sexual contra mujeres con discapacidad.

<sup>68</sup> De modo semejante a lo ocurrido en relación con Chile, en el informe inicial de Italia no se mencionó la violencia o abuso sexual y, al mencionar la explotación sexual, se hizo referencia únicamente a la explotación y turismo sexual infantil, por lo que no se ha considerado que Italia mencionó la violencia sexual contra mujeres con discapacidad.

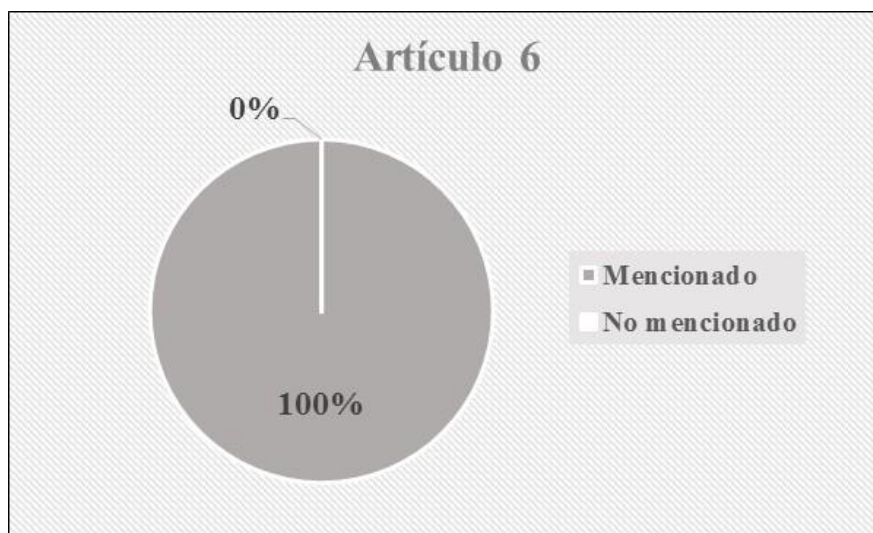
conocer las medidas que estos Estados Partes están adoptando para proteger a las mujeres con discapacidad ante esa amenaza.

A grandes rasgos, los Estados Partes parecen ser conscientes de la importancia de tener en cuenta la violencia sexual contra mujeres con discapacidad, puesto que el 80,85% de ellos contempló en sus informes iniciales información sobre leyes, políticas públicas o datos sobre esto. Se espera que, con la publicación de la Observación General n° 3 ese índice crezca, una vez que el documento actúa como una guía interpretativa a los Estados Partes al momento de implementar la Convención y también al elaborar los documentos a ser enviados por el Comité.

### 3.1.2. Análisis de las observaciones finales

De modo semejante a lo que ha sido realizado en el análisis de las listas de cuestiones, se busca aquí examinar con qué frecuencia los artículos que son objeto de estudio de esta investigación fueron mencionados en las observaciones finales del Comité a cada Estado Parte. Además, en los documentos en los que se haya mencionado la violencia sexual o términos correlatos, se pretende analizar el contenido de las preocupaciones y sugerencias del Comité a los Estados Partes en cuanto al asunto.

Gráfico VI – menciones al artículo 6 en las observaciones finales



En el Gráfico VI, se percibe que el artículo 6, que trata sobre mujeres con discapacidad, ha sido una de las prioridades del Comité a lo largo de los años, pues ha sido referido en todas las observaciones finales publicadas hasta el momento<sup>69</sup>. Lorenzo y Palacios (2016, p. 35) apoyan esa inferencia al entender que: “[s]in duda no es casual que los temas que han sido objeto de preocupación recurrente en las observaciones finales a los Estados hayan sido los primeramente abordados en las observaciones generales del comité.” El artículo 6 encaja en ese perfil por haber sido mencionado en todas las observaciones finales y haber sido tema de una observación general en 2016.

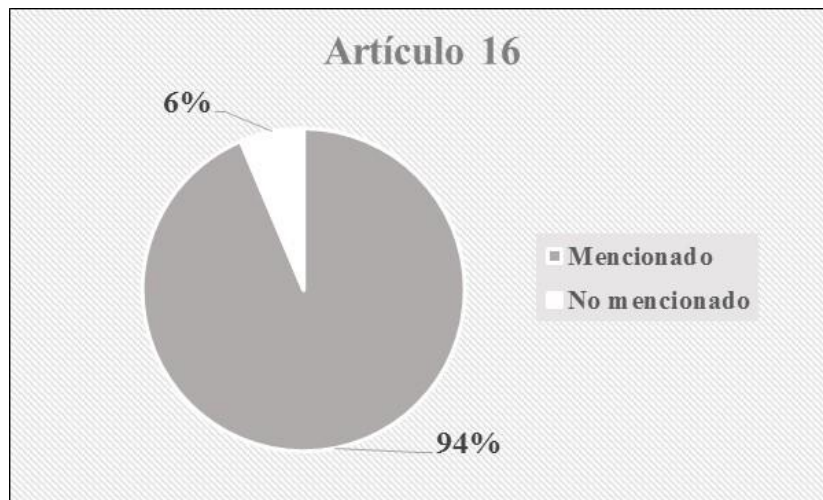
La mención al artículo 6 es esencial para reforzar, en el ámbito de cada Estado, que las mujeres con discapacidad deben ser tenidas en cuenta en cada ley y política que tenga como público objetivo a las personas con discapacidad o a las mujeres. Como afirman Lorenzo y Palacios (2016, p. 35), pese a que las observaciones finales sean un “traje a medida” para cada Estado, por basarse en su contexto y dificultades específicas, se percibe que ciertas cuestiones se repiten, marcando la necesidad de que las políticas públicas profundicen en temas en los que se identifica un mayor nivel de incumplimiento por parte de los Estados.

Es lo que ocurre con la cuestión de las mujeres con discapacidad que, de modo general, viven una situación de mayor precariedad en relación con los hombres con discapacidad y con las demás mujeres. Por tanto, su protección debe ser asegurada en todos los países. Al priorizar ese artículo, el Comité contribuye para la consolidación de los derechos de las mujeres con discapacidad.

---

<sup>69</sup> Es necesario apuntar que las observaciones finales de China están subdivididas entre China, Hong Kong y Macao. El artículo 6 se menciona en el apartado referente a Hong Kong, pero no en los demás. Sin embargo, como el análisis estadístico aquí realizado se centra en los Estados y como el documento de observaciones finales a China, Hong Kong y Macao es único, pese a sus subdivisiones, no se ha considerado ese matiz en el análisis.

Gráfico VII – menciones al artículo 16 en las observaciones finales

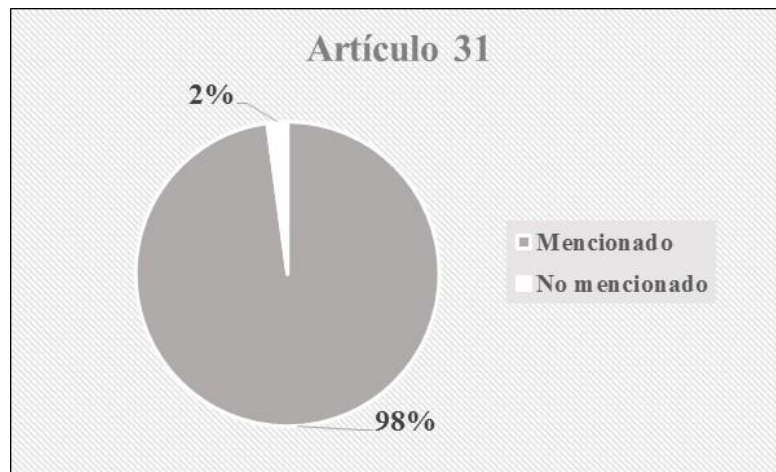


Algo semejante ocurre con el artículo 16, mencionado en 44 de las 47 observaciones finales<sup>70</sup>. Este, junto con el artículo 6, es el que posee una relación más estrecha con el objeto de estudio de esta investigación. El hecho de que ambos sean tratados con relevancia por parte del Comité, asociado a los demás ejemplos presentados a lo largo de esta investigación, permite concluir que esta cúpula prioriza en su agenda la preocupación por la violencia contra las personas con discapacidad.

Sin embargo, la ausencia del artículo 16 en tres de los documentos, Azerbaiyán, España y Perú, transmite la idea de que la violencia y el abuso contra personas con discapacidad no es un problema enfrentado por estos Estados. No obstante, es posible concluir que esta no es una interpretación correcta, pues, en los aspectos positivos constantes al inicio de cada documento, el Comité felicita a los Estados Partes por sus buenas prácticas en materia de discapacidad. En el análisis se ha identificado que no fueron mencionadas buenas prácticas en materia de lucha contra la violencia contra personas con discapacidad en ninguna de las tres observaciones finales.

<sup>70</sup> Es necesario apuntar que en las observaciones finales de Ucrania, los artículos 15 y 16 están asociados, bajo el título “Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la explotación, la violencia y el abuso”. Para el análisis de datos, se ha considerado que el artículo 16 fue mencionado.

Gráfico VIII – menciones al artículo 31 en las observaciones finales



El artículo 3, por lo que prevé, permite concienciar a los Estados Partes de que datos desglosados en edad, etnia y sexo son fundamentales para auxiliar la planificación de políticas públicas para grupos específicos dentro del colectivo de personas con discapacidad. Como afirma Victoria Lee, representante de la Alianza Internacional de la Discapacidad en el Debate General sobre Mujeres y Niñas con Discapacidad, organizado por el Comité para auxiliar en la elaboración de la Observación General nº 3 (ONCE, 2014, p. 24):

[e]s notorio [...] el papel fundamental que desempeñan los procesos de recopilación de datos y de consulta, a fin de asegurar que se incluyan y se reconozcan todos los componentes de la identidad de la persona y, en particular, de aquellos colectivos que siguen siendo invisibles en gran medida. Sólo de esta manera podrán las leyes y las políticas contar con mayor información y diseñarse mejor para dar respuesta a las necesidades específicas de la persona y proteger sus derechos en el contexto de la diversidad de las experiencias vividas por la misma.

Por ello, la ausencia de estadísticas contextualizadas sobre personas con discapacidad ocasiona una restricción en los instrumentos disponibles a los activistas para exigir de los gobiernos nacionales políticas públicas centradas en las necesidades reales del colectivo, en vez de basarse en meros supuestos (Groce, Kett, Lang y Trani, 2011, p. 214).

En lo que atañe al objeto de estudio de esta investigación, si, en las observaciones finales, al referirse al artículo 31, se incluye una mención a la importancia de poseer datos sobre la frecuencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad, se dispondrá de



más información para exigir de los Estados una postura firme para enfrentar la violencia sexual, a través de leyes y políticas públicas.

En vista de ello, la prioridad que el Comité ofrece al artículo 31, mencionado en 46 de los 47 documentos<sup>71</sup>, es relevante para esa concienciación, pero no es suficiente. Si la inclusión del artículo 31 no viene asociada a una referencia expresa a la violencia sexual, es posible que los Estados no den prioridad a la cuestión y, en consecuencia, que la ausencia de datos fiables sobre esto se mantenga como un desafío a los investigadores y gestores de políticas públicas.

Al analizar los datos recogidos, se percibe que no hubo una preocupación del Comité por hacer referencias en ese sentido. No se ha mencionado en ninguna observación final la violencia sexual o cuestiones de naturaleza semejante en asociación con el artículo 31. En las observaciones finales de Croacia, el Comité abordó la violencia contra la mujer en el artículo 31, al lamentar que:

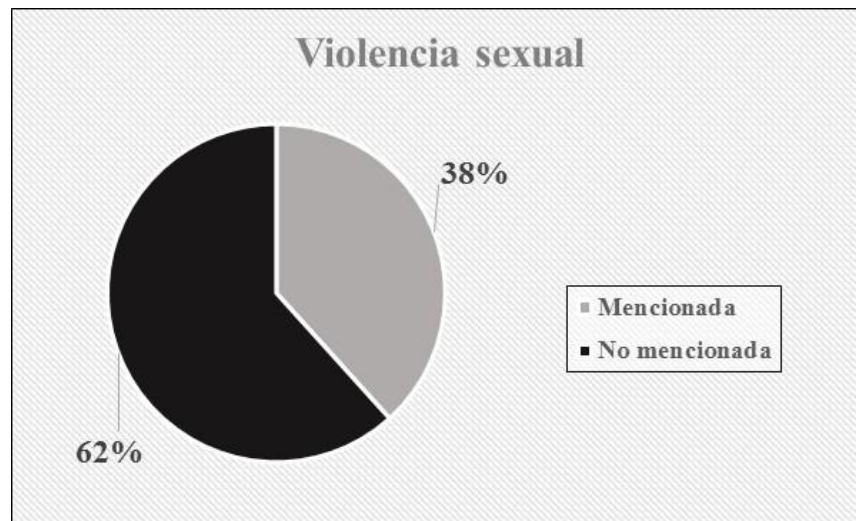
el sistema de reunión de datos del Estado Parte no le permite recopilar la información que necesita, por ejemplo sobre la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, para planificar y elaborar estrategias encaminadas al cumplimiento de las obligaciones que le impone la Convención.

Es cierto que ese tipo de mención auxilia la toma de conciencia de los Estados Partes sobre la violencia contra la mujer, y entre estas la violencia sexual. Sin embargo, al mencionar la violencia solamente en las observaciones finales de Croacia, que fueron elaboradas en abril de 2015, es posible que tratar el tema haya sido una elección aislada del Comité, y no una señal de un giro hacia una mayor preocupación por reforzar a los Estados Partes la importancia de la obtención de datos referentes a la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad.

---

<sup>71</sup> El artículo no consta en las observaciones finales de República Checa.

Gráfico IX – menciones a la violencia sexual en las observaciones finales



La frecuencia de la expresión violencia sexual y correlatos<sup>72</sup>, presente en 18 de las 47 observaciones finales, indica que el Comité tuvo la preocupación por incluir el asunto, pese a que el texto de la Convención no lo mencione expresamente. Además, se percibe un aumento de las referencias al tema en relación con las listas de cuestiones, de 12 a 18, es decir, un 12,76% de acrecimiento.

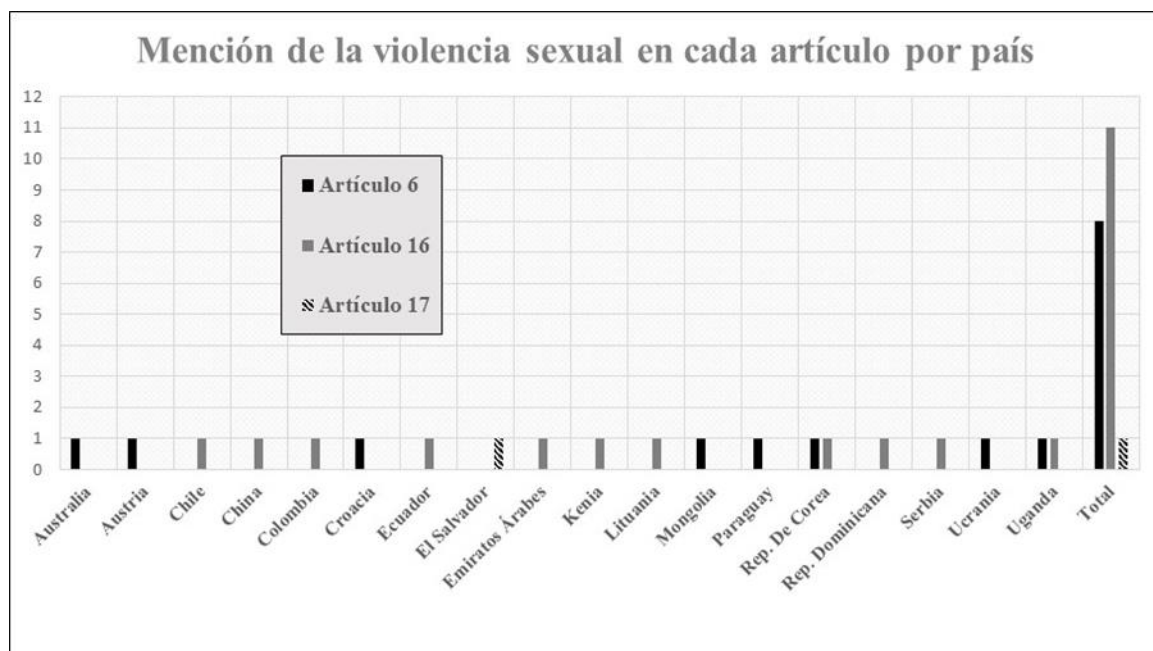
Por una parte, al comparar los Estados en cuya lista de cuestiones y/u observaciones finales se abordó la violencia sexual, se pone de manifiesto que hay una coincidencia entre algunos de los países, con mención a esto en ambos documentos. Es lo que ocurre en los casos de Austria, Ecuador, El Salvador, Lituania y Paraguay.

Por otra parte, el tema está en las listas de cuestiones de Argentina, Bélgica, Guatemala, México, Perú, Serbia y Tailandia y las respectivas observaciones finales no reflejan eso. Lo contrario ocurrió con Australia, Chile, China (en el apartado referente a Hong Kong), Colombia, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Mongolia, República de Corea, República de Kenia, República Dominicana, Serbia, Ucrania y Uganda. La violencia sexual fue mencionada en sus observaciones finales, pero no en sus listas de cuestiones.

<sup>72</sup> Las expresiones encontradas en las observaciones finales fueron abuso sexual, presente en las observaciones finales de Ecuador, Mauricio y Ucrania, y explotación sexual, que consta en las observaciones finales de Paraguay.

A su vez, los siguientes Estados Partes no abordaron la violencia sexual en sus informes iniciales: Australia, China, Colombia, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, República de Corea, República de Kenia, República Dominicana, Serbia, Ucrania y Uganda. En contraste, los Estados Partes en los que no se trata el asunto en ningún documento, entre el informe inicial, la lista de cuestiones y la observación final son: Azerbaiyán, Costa Rica, España, Italia, Qatar y Suecia, un 12, 76% del total.

Gráfico X – menciones a la violencia sexual en las observaciones finales desglosadas por artículo y Estado<sup>73</sup>



A partir de los datos obtenidos, se observa en el Gráfico X el seguimiento de la tendencia percibida en las listas de cuestiones, de abordar la violencia sexual

<sup>73</sup> Se ha identificado que en dos de las observaciones finales, referentes a República de Corea y Uganda, se mencionó el tema dos veces en cada documento, en los artículos 6 y 16. Esto ha impedido que se siguiera utilizando el gráfico circular, pues este no representaría adecuadamente que hay 20 menciones a la violencia sexual, pero solamente 18 documentos.

primordialmente en el artículo 16, en 11 de los documentos. El artículo 6, a su vez, contempló el tema ocho veces y el artículo 17<sup>74</sup> lo trató una vez.

De manera similar a lo que se ha mencionado en relación con la referencia a la violencia sexual en el artículo 15, la elección de incluir el asunto solamente en el artículo 17, sobre la protección de la integridad personal, restringe el enfoque e ignora otros aspectos importantes de la cuestión. Pese a que la protección a la integridad del individuo tenga relación directa con la protección contra la violencia sexual, el tratamiento dado en las observaciones finales de El Salvador se limitó a demostrar la preocupación del Comité por la permisión legal de esterilización y aborto forzosos por embarazos resultantes de abusos sexuales, sin comentar nada respecto de la posibilidad de que ocurra en los demás contextos.

A grandes rasgos, es positivo que el Comité refleje en sus observaciones finales que la violencia sexual es una amenaza grave a los derechos de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres. Sin embargo, la ausencia de la cuestión en la mayoría de los documentos analizados puede generar la presunción –de parte de los Estados en cuya observación final no se trató el asunto– de que la violencia sexual no debe ser priorizada en el ámbito nacional.

Como se ha apuntado anteriormente, las observaciones finales poseen una función política, al ser un documento de carácter público que puede ser utilizado por la sociedad civil y por las personas con discapacidad para exigir de los Estados el cumplimiento de las medidas. Por ello, es importante que el Comité refuerce ciertos contenidos también para ofrecer a la sociedad civil ese instrumento de negociación.

Igualmente, en la Observación General n° 3 el Comité aclara que la invisibilidad de las mujeres con discapacidad ha perpetuado la situación de discriminación interseccional que viven, y por ello es crucial dar un mayor relieve a esto. Lo mismo es válido para la violencia sexual, en la medida en que, si no se la visibiliza, se permite que la situación de riesgo que viven las mujeres con discapacidad se mantenga.

---

<sup>74</sup> El artículo 17 dispone: Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.

Sin lugar a dudas, no es viable abordar todos los temas pertinentes a las personas con discapacidad en cada observación final elaborada por el Comité. La propuesta aquí realizada no pretende que el Comité desarrolle la protección contra la violencia sexual con la profundidad necesaria para comprender su complejidad en cada observación final elaborada. Esto, además de no ser la función de las observaciones finales, se logró con la Observación General sobre mujeres y niñas con discapacidad.

Lo que se busca, por el contrario, es demostrar que es importante para la protección de las mujeres contra la violencia sexual que el Comité intensifique su labor de concienciación en relación con cada Estado Parte. Hasta el momento, 18 Estados Partes, entre los 47 que han recibido observaciones finales y de los 173 que firmaron la Convención, han tenido la oportunidad de ver en sus observaciones finales la perspectiva del Comité sobre el asunto.

Por tanto, si se menciona la violencia sexual en las observaciones finales de los Estados que, o bien no recibieron su primera observación final, o bien aquellos en que el tema no se abordó en la primera observación final, cada Estado Parte tendrá la oportunidad de conocer la preocupación del Comité en cuanto a esto, porque quedaría reflejada en un documento centrado específicamente en la realidad de su país.

Para demostrar a los Estados Partes la preocupación y la notoriedad que debe tener la cuestión, es necesario no solamente mencionarlo de modo sistemático en los documentos, sino también proponer medidas específicas de eliminación de la violencia sexual. En vista de esto, se ha analizado el contenido de las observaciones finales<sup>75</sup> que abordan el asunto. Al examinar los documentos, se ha observado que cuatro perspectivas para abordar la lucha contra la violencia sexual son recurrentes, a saber: referencias a la violencia sexual asociada a su frecuencia; críticas y sugerencias en el ámbito legal; políticas

---

<sup>75</sup> Interesa esclarecer que semejante análisis no ha sido realizado en las listas de cuestiones, pues, debido al tamaño reducido del documento, este no se dedica a desarrollar en profundidad cuestiones asociadas a la violencia sexual, cuando es mencionada, sino que suele limitarse a requerir información sobre el tema. En virtud de eso, se ha considerado que un análisis del contenido de esos documentos no alcanzaría resultados expresivos para los objetivos de la investigación.

públicas de prevención y de protección a las víctimas; y medidas de indemnización y reparación a las víctimas.

Las observaciones finales no incluyen datos estadísticos o referencias a tasas concretas, pero los informes utilizados por el Comité para elaborar sus observaciones contienen datos numéricos sobre distintos contenidos relativos a las personas con discapacidad. En consecuencia, se ha notado en algunos documentos alusiones a datos sobre la frecuencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad. Es el caso de las observaciones finales de Australia, Chile, Ecuador, Lituania, Mongolia, República de Kenia y Uganda.

El Comité mostró su preocupación a algunos Estados Partes por la alta frecuencia de abuso sexual contra las mujeres con discapacidad<sup>76</sup>, afirmando que las mujeres y niñas experimentan un mayor riesgo de sufrir violencia sexual por su situación de discapacidad<sup>77</sup>. Por una parte, el Comité destacó su preocupación por la ausencia de información en algunos países sobre el abuso sexual contra las mujeres y niñas con discapacidad<sup>78</sup>. Por otra parte, a Ecuador llamó la atención al:

[...] alto nivel de embarazos en adolescentes y jóvenes entre 12 y 19 años de edad de acuerdo con el último censo de población y vivienda de 2010 y que la edad en que la mayoría de las mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo haya sido entre los 15 y los 19 años de edad, lo cual es indicativo de un alto grado de incidencia de abuso sexual contra mujeres con discapacidad, particularmente con discapacidad intelectual.

En las menciones del Comité a la violencia sexual, se nota su preocupación por obtener datos referentes a la frecuencia de ese delito en cada país, además de hacer hincapié en la alta incidencia de abusos sexuales o el mayor riesgo de sufrirlo que experimentan las mujeres con discapacidad.

A su vez, los comentarios acerca de las leyes nacionales sobre discapacidad y otras medidas en el ámbito legal poseen gran relevancia en los documentos seleccionados. El Comité comentó cuestiones legales y judiciales en las observaciones finales de los

---

<sup>76</sup> A Australia y a Lituania.

<sup>77</sup> A Chile, a República de Kenia y a Uganda.

<sup>78</sup> A Mongolia y a Paraguay.

siguientes países: Chile, China, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Mongolia, República de Corea, Serbia, Ucrania y Uganda.

Además, expresó su inquietud por la ausencia de referencia a mujeres y niñas con discapacidad en las legislaciones sobre prevención y protección contra la violencia, incluso la de carácter sexual. Asimismo, afirmó que se debería proporcionar un enfoque diferencial sobre la discapacidad en la legislación, en virtud del mayor riesgo que enfrentan las mujeres con discapacidad de sufrir violencia sexual<sup>79</sup>. Además, consideró preocupante que haya países en que la violación conyugal no esté tipificada como delito, así como la ausencia de una ley específica que tipifique la violencia de género, incluidos la violencia sexual y el incesto<sup>80</sup>. También criticó la existencia de leyes<sup>81</sup> que autorizan la esterilización y el aborto forzoso de mujeres con discapacidad, tras embarazos frecuentemente resultantes de abusos sexuales. Por ello, recomendó que se eliminen las disposiciones que lo autorizan.

Asimismo, se propuso la aprobación de una ley que tipifique como delito la violencia doméstica, incluida la violación conyugal, y que se establezca una reforma legal<sup>82</sup> que incorpore los derechos y las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, mediante la celebración de consultas con las organizaciones que las representan.

También preocupó al Comité la falta de recursos judiciales para denunciar a los responsables de actos de violencia sexual contra mujeres y niños con discapacidad<sup>83</sup>. Se propuso la investigación de los hechos de violencia sexual, procesando a los autores y a todos los responsables y eliminando la impunidad<sup>84</sup>. Además, sugirió que se imparta periódicamente formación a los fiscales y jueces con el objetivo de enfrentar los distintos tipos de violencia<sup>85</sup>.

Como se ha podido notar, la propuesta a los Estados Partes ofrece un panorama de los desafíos enfrentados por los países en lo que se refiere a la violencia sexual: la ausencia

---

<sup>79</sup> A Chile.

<sup>80</sup> A Emiratos Árabes Unidos.

<sup>81</sup> A El Salvador.

<sup>82</sup> A Emiratos Árabes Unidos y a Mongolia.

<sup>83</sup> A Serbia.

<sup>84</sup> A China, en el apartado referente a Hong Kong, a Colombia, a República de Corea, a Ucrania y a Uganda.

<sup>85</sup> A Emiratos Árabes Unidos.

de leyes específicas, de enfoque de la discapacidad y de instrumentos para denunciar, la falta de formación profesional de juristas para lidiar con ese tipo de delito y sus víctimas y la poca participación popular en los procesos de elaboración de nuevas leyes.

Sin lugar a dudas, una legislación que proteja firmemente a las víctimas de violencia sexual, al mismo tiempo en que establezca medidas de prevención, es la base para lograr enfrentar el problema. Por ello, se justifica la especial atención que el Comité dedica al tema, mencionándolo en la mitad de las observaciones finales que abordan la violencia sexual.

A partir de lo que disponen los documentos, es posible aproximarse un poco a la realidad de cada país, sus lagunas legales y los desafíos a ser superados para aplicar a la Convención en ese ámbito. Como se ha dicho anteriormente, uno de los problemas de la ausencia de mención a la violencia sexual es saber cuáles son los desafíos enfrentados por los demás países en ese ámbito. Eso dificulta el avance legal de los Estados Partes que no han recibido orientación del Comité en ese sentido.

Otro aspecto frecuente en las observaciones finales son las políticas públicas. Entre las vertientes abordadas, fue el punto más mencionado. Está presente en las observaciones finales de: Australia, Chile, China, Colombia, Croacia, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Lituania, Mongolia, República de Corea, República Dominicana, Serbia y Uganda.

El Comité mostró su preocupación por la ausencia de un enfoque diferencial centrado en las mujeres y niñas con discapacidad en las políticas de prevención y protección a la violencia, entre ellas sexual<sup>86</sup>. Recomendó que se incluyera a la mujer con discapacidad en las políticas públicas y programas educativos de prevención, eliminación y recuperación de la violencia de género, incluso la de carácter sexual<sup>87</sup> y solicitó la designación de un mecanismo independiente de supervisión que registre los casos de violencia denunciados<sup>88</sup>. Además, expresó su inquietud ante la ausencia de mecanismos

---

<sup>86</sup> A Chile y a Emiratos Árabes Unidos.

<sup>87</sup> A Australia, a Colombia y a República de Corea.

<sup>88</sup> A Chile.



denuncia de la violencia accesibles y de servicios de apoyo a las víctimas<sup>89</sup>, así como por la inexistencia de actividades de formación profesional para prevenir y enfrentar la violencia contra las personas con discapacidad<sup>90</sup>.

Por ello, recomendó la formulación de políticas destinadas a la protección contra la violencia que incorporen la perspectiva de la discapacidad y refuercen las medidas para proteger especialmente a las mujeres y niñas con discapacidad<sup>91</sup>. También propuso la implementación de mecanismos de denuncia accesibles e inclusivos, que sean suficientes en cuanto a su número y ubicación, en particular para las mujeres y niñas. Igualmente, sugirió la implementación de un programa de formación sobre derechos sexuales y reproductivos dirigidos a mujeres con discapacidad intelectual, sus familiares y profesionales prestadores de servicios<sup>92</sup>.

En ese sentido, el Comité propuso que se imparta educación sexual a niños y jóvenes con discapacidad intelectual como una medida de prevención a la violencia<sup>93</sup> y que, en consulta con las organizaciones que representan a las mujeres con discapacidad, se adopten medidas para fortalecer el desarrollo y el empoderamiento de la mujer con discapacidad y que se actúe de manera inmediata para protegerlas de la violencia, incluida la violencia sexual<sup>94</sup>.

A su vez, en el caso de Lituania, el Comité instó que el Estado intensifique la protección de las personas con discapacidad, en particular de las mujeres y las niñas con discapacidad, contra la violencia, la explotación y los abusos, haciendo referencia a lo que recomendó el comité de la CEDAW, mediante el establecimiento de servicios de apoyo a las víctimas inclusivos y accesibles, como líneas telefónicas directas, centros de acogida y mecanismos de denuncia y notificación. En el mismo sentido, el Comité solicitó a algunos Estados Partes que prevengan la práctica de abortos forzosos como consecuencia de abusos

---

<sup>89</sup> A Ecuador, a Emiratos Árabes Unidos y a República Dominicana.

<sup>90</sup> A Emiratos Árabes Unidos.

<sup>91</sup> A Emiratos Árabes Unidos.

<sup>92</sup> A China, a Ecuador y a Lituania.

<sup>93</sup> A China.

<sup>94</sup> A Croacia.

sexuales<sup>95</sup> y que dispongan de albergues accesibles para las personas con discapacidad víctimas de violencia, incluso sexual.

Al tratar las políticas públicas, se ha verificado que el Comité hizo hincapié en algunos aspectos, como la necesidad de enfocar el género en los programas de prevención y protección a la violencia sexual, la necesidad de centros de apoyo y mecanismos de denuncia accesibles y a los programas de concienciación de profesionales y personas con discapacidad. Son puntos centrales en la prevención y la protección a la violencia sexual, por lo que es relevante que el Comité los destaque.

También llama la atención el diálogo entre este Comité y el comité de la CEDAW, reflejado en la recomendación a Lituania. Este es un ejemplo de lo que ha sido tratado en el apartado 2.2.2, sobre que los tratados de derechos humanos no deben ser interpretados aisladamente, por formar, todos en conjunto, el eje central del sistema universal de protección a los derechos humanos.

No es mera coincidencia que las políticas públicas sean el aspecto más mencionado al abordar la violencia sexual. Como se ha visto en el apartado 1.4, no hay una verdadera transformación social sin su unión con los aspectos jurídicos y de políticas públicas. Con un marco legal de la discapacidad más desarrollado desde la aprobación de la Convención, el Comité ha demostrado ser consciente de que es el momento de, sin prescindir de los demás aspectos, centrar esfuerzos en la elaboración de medidas que apliquen las leyes y garanticen un avance real en torno a la protección de las mujeres con discapacidad contra la violencia sexual.

En efecto, todas las medidas propuestas por el Comité se entrelazan formando un conjunto de sugerencias con el poder de transformar las políticas públicas de protección a la violencia sexual. Con la inclusión de un enfoque diferencial sobre la discapacidad, mecanismos de protección accesibles y cursos centrados en la prevención, se avanza substancialmente hacia la eliminación de la violencia sexual.

---

<sup>95</sup> A El Salvador.

Por último, las medidas de indemnización y reparación a las víctimas fueron mencionadas en cinco de los documentos, de Lituania, República de Corea, República de Kenia, Ucrania y Uganda. En cuanto a ese tema, el Comité recomendó que se elabore y aplique una estrategia de protección a las personas con discapacidad, en particular las mujeres, contra los distintos tipos de violencia. Afirmó que esa estrategia debe incluir medidas de indemnización y reparación a las víctimas<sup>96</sup>. Igualmente, hizo referencia a que los Estados deben brindar recursos adecuados a las víctimas de abuso, incluso sexual, proporcionándoles reparación e indemnización,<sup>97</sup> incluso para la violencia sexual ocurrida en instituciones<sup>98</sup>.

La postura del Comité de abordar la importancia de indemnización y reparación a las víctimas de abuso sexual está en consonancia con la labor de la Secretaria General de la ONU que, en junio de 2014, publicó la nota orientativa “Reparaciones por la Violencia Sexual Relacionada con los Conflictos”. Según se aporta en el documento, la reparación adecuada a las víctimas en estos casos implica una combinación de diferentes formas de reparación: administrativas, judiciales, individuales y colectivas. Deben incluir la participación de las víctimas, contemplar sus necesidades y evitar daños irreparables. La ONU también aclara en la nota que varios de los principios tratados son válidos fuera del contexto de los conflictos, por lo que puede ser aplicado a más países.

El documento tiene como objetivo principal reconocer la necesidad de contar con medidas de reparación que estén diseñadas específicamente según las consecuencias, la sensibilidad y los estigmas vinculados a estos daños en las sociedades a nivel mundial, y a las necesidades específicas de los supervivientes de la violencia sexual y de género.

Considerando que las observaciones finales de Lituania, República de Corea, República de Kenia, Ucrania y Uganda fueron elaboradas posteriormente a la publicación de la nota<sup>99</sup>, no parece coincidencia la preocupación del Comité por reforzar el tema en el ámbito de la discapacidad. Ese tipo de conexión entre los distintos papeles que ejerce la

---

<sup>96</sup> A República de Corea y a República de Kenia.

<sup>97</sup> A Lituania y a Uganda.

<sup>98</sup> A Ucrania.

<sup>99</sup> Publicadas el 30 de septiembre de 2015, 10 de mayo de 2016, 28 de octubre de 2014, 2 octubre de 2015 y 12 de mayo de 2016, respectivamente.

ONU da cohesión a la labor realizada en pro de los derechos humanos y protege a los distintos colectivos de modo global.

### 3.1.3. Conclusiones a partir del análisis de los datos

Tras desmenuzar los aspectos de las listas de cuestiones y de las observaciones finales más relevantes para esta investigación, lo primero que llama la atención es que, respecto al contenido, las observaciones finales traen preocupaciones y propuestas pertinentes, que indican las medidas necesarias para, con el interés político de los Estados Partes, enfrentar la violencia sexual.

Por tanto, el mayor desafío en cuanto al tratamiento que el Comité ofrece a esto no se centra en lo que dice sobre el asunto. Por el contrario, el reto a ser superado es la inconstancia de sus menciones en las observaciones finales. A lo largo de la investigación, al notar que la violencia sexual es abordada en solamente 18 de las 47 observaciones finales, ha quedado patente la necesidad de no restringir el análisis a sus aspectos cualitativos, adoptando también parámetros cuantitativos de análisis.

De ese modo, se ha podido analizar no solo lo que propone el Comité en las observaciones finales, como también cuántas veces se aborda la violencia y los artículos pertinentes, que son la base, el punto de partida para tratar la cuestión. Asimismo, el propósito ha sido el de proporcionar un panorama amplio de análisis, dentro del tamaño y de los objetivos de la presente investigación.

Tanto en las listas de cuestiones como en las observaciones finales no se ha percibido un aumento o una disminución de las referencias a la violencia sexual condicionada por las fechas en que fueron elaborados dichos documentos, por lo que no se ha incluido el aspecto temporal entre los relevantes para el análisis desarrollado.

En cuanto al contenido de cada documento, mientras que las listas de cuestiones son sucintas y se limitan a la solicitud de información, las observaciones finales desarrollan la protección y la prevención a la violencia sexual bajo distintos aspectos y dan a los Estados Partes una guía para promover cambios sustanciales en ese ámbito.

Pese a que las observaciones finales no son extensas, con alrededor de 15 páginas cada una, hay espacio para orientar a los Estados Partes sobre aspectos que necesitan mejora en el ámbito nacional. Esa extensión ha sido suficiente para analizarlas según los distintos enfoques de la violencia sexual e identificar similitudes y discrepancias entre los documentos de cada Estado.

Como se ha mencionado, cada observación final contiene un apartado para que el Comité manifieste su reconocimiento por calidades aportadas por el Estado. En ninguno de los 47 documentos se mencionó algo relacionado con políticas públicas contra la violencia sexual como aspecto positivo, por lo que se puede inferir que, o bien todos los países tienen algo que mejorar en ese aspecto, o bien el Comité no evaluó a todos los países en cuanto a esto.

Lo que es evidente es la ausencia de datos nacionales sobre el tema en la mayoría de los Estados Partes, como se ha identificado a lo largo de la investigación. Esto implica que, al menos en las listas de cuestiones, el asunto debe ser abordado, para solicitar a cada Estado información sobre la frecuencia de violencia sexual contra mujeres con discapacidad, en el caso de que el Estado no haya ofrecido datos en ese sentido en su informe inicial.

No forma parte de los objetivos de esta investigación estudiar el contenido de los informes iniciales de los Estados Partes. Sin embargo, para verificar la pertinencia de proponer que el Comité solicite en las listas de cuestiones información estadística sobre la violencia sexual contra mujeres con discapacidad, al observar su frecuencia se ha comprobado si los Estados hacían alguna referencia a datos sobre esto. Como resultado, se ha notado que solamente Nueva Zelandia, Mauricio y Serbia hicieron mención a esto, lo que indica la necesidad de reforzar la cuestión a los Estados Partes. Pese a estas conclusiones, la violencia sexual está presente en solo el 25,5% de las listas de cuestiones y en el 38,3% de las observaciones finales.

En cuanto a algunos aspectos específicos de las observaciones finales, cabe resaltar el diálogo entre el Comité de la CDPD y el comité de la CEDAW en las observaciones finales de Lituania. La sintonía entre los distintos comités contribuye a que la protección a

los derechos humanos sea garantizada de modo holístico, pues, como se ha recalcado en esta investigación, nadie es únicamente persona con discapacidad, negra, mujer o migrante. Todos estos elementos pueden coexistir en los individuos y deben ser protegidos de igual modo.

Lo que se ha pretendido en la presente investigación ha sido demostrar que la violencia sexual contra mujeres con discapacidad es una amenaza presente, que puede ocurrir tanto por razones que afectan a las demás mujeres como por situaciones que solo las mujeres con discapacidad suelen vivir.

Se concluye que hay que avanzar en el diálogo con los Estados –en el ámbito internacional– sobre la importancia de priorizar las medidas de protección a las mujeres con discapacidad contra la violencia sexual. Para ello, se debe romper con la invisibilidad social que ese tipo de violencia enfrenta y tratarla como una cuestión prioritaria en la agenda de los Estados Partes.

El Comité ejerce una función protagonista en ese proceso, por su labor interpretativa de la Convención y su responsabilidad de monitoreo de los Estados Partes. Como afirma Sastre Campo (2009, p. 347), “el Comité puede liderar el proceso de cambio a nivel internacional hacia un modelo de sociedad que respete la diversidad como fuente de enriquecimiento de las relaciones humanas.” Una demostración de la relevancia de la actuación del Comité sobre el tema se halla en la Observación General nº 3, que, al manifestar la interpretación del artículo 6 y asuntos asociados que deben adoptar los Estados, no deja dudas sobre el significado que debe tener el artículo 16, que actúa como una herramienta de protección de las personas con discapacidad contra la violencia, incluso la de carácter sexual.

Un desafío enfrentado por el Comité en su rol de liderazgo en el cambio social hacia una mayor protección a las mujeres contra la violencia sexual es el volumen de trabajo de sus expertos y, consecuentemente, su dificultad de estar al día con el análisis de los informes iniciales de los Estados Partes. Tras ocho años de la implementación del Comité, no todos los Estados han tenido la oportunidad de reunirse con los expertos para el análisis de su informe, mientras que otros esperan su segunda reunión. España fue el segundo país

examinado, y el Comité le instó a presentar un nuevo informe de seguimiento en 2015 (Martínez, 2016, p. 217). Hasta el momento, no ha habido una segunda reunión con España.

En ese sentido, las recomendaciones que el Comité hace a los Estados Partes se convierten en un instrumento político para exigir de los Estados la implementación de políticas públicas y la promulgación de leyes centradas en la discapacidad y también para orientarles sobre las medidas más urgentes a ser tomadas. Una gran laguna temporal entre la primera reunión y la segunda puede representar un retraso en la efectución de los derechos de las personas con discapacidad de los países afectados.

La protección a las mujeres con discapacidad ante el riesgo de sufrir violencia sexual pasa por varias fases, cuyo cumplimiento garantizará su efectividad: es necesario seguir tratando los artículos 6, 16 y 31 como prioritarios; se debe intensificar, en las listas de cuestiones, las preguntas relativas a datos estadísticos sobre la violencia sexual; caso el tema no haya sido abordado en el informe inicial, tratarlo en la lista de cuestiones de modo más amplio; en cuanto a las observaciones finales, es importante relacionar el artículo 31 a la escasez de datos sobre violencia sexual y es sustancial que se incluya la violencia sexual en las observaciones finales elaboradas de aquí en adelante, en consonancia con lo que dispone la Observación General nº 3.

En vista de ello y de lo que se ha querido demostrar en esta investigación, las observaciones finales se revelan como el instrumento ideal para reforzar en el ámbito de cada Estado Parte lo que dice la CDPD sobre la necesidad de implementar leyes y políticas públicas de concienciación sobre la violencia, incluso la de carácter sexual. Esto ocurre porque las observaciones finales son el resultado de un diálogo directo con cada Estado y adaptan las cuestiones de mayor relevancia en discapacidad a la realidad del país evaluado. Además, ejercen la función de actualizar y aplicar la Convención a cada nuevo momento histórico, a cada debate sobre discapacidad que afecte la protección de los derechos de ese colectivo.

La CDPD aún es un documento reciente, pero, en el futuro, se podrán evidenciar discrepancias entre el texto de la Convención y la realidad social. Por ello, mecanismos de actualización, como lo son las observaciones finales y las observaciones generales,

garantizan una protección eficaz de los derechos de las personas con discapacidad a lo largo de las décadas.

Si en el momento de elaboración de la Convención se consideró que no era necesario incluir una referencia expresa a la violencia sexual, pese a su gravedad, corresponde al Comité mantener su labor de garantizar que ese tema no sea tratado como una cuestión menor, sino que reciba el realce que merece.

En ese sentido, la Observación General sobre mujeres y niñas con discapacidad tuvo importancia y demostró el interés del Comité en cumplir ese objetivo. Se espera que semejante esfuerzo se refleje en las referencias a la violencia sexual en las observaciones finales elaboradas de aquí en adelante. Considerando que la referida Observación fue publicada el 26 de agosto de 2016, último día de sesiones del Comité con los Estados Partes el año pasado, y que las observaciones finales de las sesiones realizadas en 2017 no habían sido publicadas en el momento de la conclusión de este estudio, se anhela que las próximas observaciones finales incorporen la interpretación contenida en la Observación General n° 3, destacando la violencia sexual de modo sistemático.



## CONCLUSIONES

A partir de lo que se ha discutido en esta investigación sobre la protección ofrecida por las Naciones Unidas a la mujer con discapacidad ante el riesgo de sufrir violencia sexual, se destacan las siguientes conclusiones:

1) Investigar la violencia sexual contra mujeres con discapacidad es un desafío, por ser un tema sensible, por la escasez de datos estadísticos y la ausencia de un criterio único adoptado por los países para definir la discapacidad y la violencia sexual. Asimismo, no hay muchos datos disponibles referentes a la tasa de violación y correlatos sufrida por estas, tampoco comparaciones que permitan concluir que sufren un mayor riesgo de ser víctima de violencia sexual en comparación con las demás mujeres. No obstante, experimentan un riesgo específico frente a ese delito, derivado de la percepción negativa del agresor sobre las mujeres con discapacidad.

2) La mujer con discapacidad es amenazada en virtud del riesgo de sufrir violencia sexual enfrentado por las demás mujeres y del riesgo específico asociado a situaciones que las demás no suelen vivir, como la vivienda en instituciones, la compañía de un cuidador personal incluso para actividades de contacto íntimo y la sobreprotección familiar, que les niega educación sexual. Esto ocurre en un contexto de discriminación interseccional que experimentan las mujeres con discapacidad, que no representa la simple suma entre la discriminación sufrida por las mujeres y por las personas con discapacidad, sino se profundizan, generando consecuencias específicas a ese colectivo. Esto es una demostración de que la sociedad es “anormalfóbica”, tratando como de menor valor a lo que no corresponde al estándar hombre sin discapacidad.

3) Debido a la amenaza específica de ser víctima de violencia sexual, las mujeres con discapacidad necesitan, de parte de los Estados y de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, una protección centrada en sus especificidades. Los Estados no deben suponer que una protección general ante el peligro de violencia sexual, que no considera la discapacidad, sea suficiente para asegurar que estas mujeres estén protegidas. Por el contrario, deben tener en cuenta la discapacidad en sus acciones de carácter legal y de políticas públicas para enfrentar la violencia sexual contra ese colectivo.

4) Para ofrecer una protección adecuada a las mujeres con discapacidad, los Estados deben actuar desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto implica considerar que la violencia sexual es una vulneración de los derechos fundamentales, que las medidas de prevención deben ser coherentes con otros derechos de las mujeres con discapacidad y que estas deben participar en ese proceso, siendo consultadas acerca de la elaboración de leyes y políticas públicas. Igualmente, se debe incentivar que los avances legales, de carácter práctico y social en el sentido de no naturalizar o ignorar la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad evolucionen en paralelo, auxiliando para la lucha contra esa amenaza de modo integral.

5) La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el mayor avance legal en relación con el reconocimiento de derechos de ese colectivo. La Convención aún es un tratado reciente, pero ha logrado ampliar el debate sobre la discapacidad y aumentar la visibilidad del colectivo en la sociedad. Los documentos elaborados a partir de su aprobación permiten llamar la atención sobre cuestiones específicas enfrentadas por las personas con discapacidad. En ese sentido, la “Observación General n° 3: mujeres y niñas con discapacidad” ha ubicado la violencia sexual en el centro del debate sobre las vulneraciones a los derechos de las mujeres con discapacidad. Además, interesa resaltar la labor conjunta que los distintos comités de las Naciones Unidas ejercen para la protección integral de los derechos de las personas con discapacidad. En cuanto al objeto de estudio de esta investigación, se destacan las observaciones generales sobre mujeres con discapacidad elaboradas por el comité de la CEDAW y el diálogo entre este y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las observaciones finales, como en la de Lituania. Con esa práctica, el Comité demuestra que los Estados Partes no pueden desconsiderar que hay una conexión directa entre los distintos tratados de derechos humanos, cuyas garantías pueden interrelacionarse en algunos individuos, por lo que los derechos no deben ser tratados de modo fragmentado o desconsiderando la realidad en la que el individuo protegido se inserta.

6) En lo que atañe a la protección contra la violencia sexual, la Convención ofrece las bases de protección a las mujeres con discapacidad en el ámbito internacional.

Pese a que su texto no menciona expresamente la violencia sexual, el artículo 16 regula la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Dicho artículo debe ser interpretado incluyendo la violencia sexual entre una de las vertientes de la violencia, tal y como se aclara en la Observación General nº 3. En vista de ello, no hay dudas de que la CDPD reconoce a las mujeres con discapacidad el derecho al goce de una vida libre de violencia, incluso la de carácter sexual.

7) Asimismo, las observaciones generales y las observaciones finales son importantes herramientas de refuerzo a los Estados Partes sobre por qué deben priorizar ciertos asuntos en la agenda de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos la protección contra la violencia sexual. Al publicar estos documentos y poner de relieve que se trata de una amenaza a los derechos humanos, el Comité beneficia a las mujeres con discapacidad y brinda más instrumentos a los activistas para exigir al Estado el cumplimiento de las medidas propuestas por el Comité a cada Estado Parte. Además, dichos documentos actúan como herramientas de promoción de una constante actualización del contenido de la Convención, garantizando que esta esté en consonancia con las necesidades y reivindicaciones de las personas con discapacidad surgidas posteriormente a la aprobación de la CDPD.

8) El análisis de las observaciones finales ha permitido identificar algunas debilidades en el tratamiento del tema en el ámbito de los Estados. La primera de ellas es que en ninguna de las 47 observaciones finales analizadas el Comité citó cuestiones concernientes a políticas públicas contra la violencia sexual como aspecto positivo. Esto permite inferir que, o bien todos los Estados Partes tienen algo que mejorar en ese aspecto, o bien el Comité no evaluó ese aspecto en todos los países. Se suma a esto la escasa referencia a datos estadísticos sobre la violencia sexual perpetrada contra mujeres con discapacidad, presente únicamente en los informes iniciales de Nueva Zelanda, Mauricio y Serbia. A su vez, las dificultades enfrentadas por el Comité, como la ínfima representación femenina entre los expertos y el elevado volumen de trabajo que posee, puede afectar al refuerzo de la temática a los Estados Partes.

9) A grandes rasgos, se ha percibido que los Estados Partes reconocen que el Comité está preocupado por la cuestión de la violencia sexual, incluyendo la información

disponible sobre el tema en los informes iniciales, pese a las debilidades identificadas. El Comité propuso a algunos Estados medidas de carácter jurídico y de políticas públicas que reflejan su intención de garantizar una protección específica a las mujeres con discapacidad ante el riesgo de sufrir violencia sexual. No obstante, el número de menciones a la violencia sexual en las observaciones finales, en 18 de los 47 documentos, no refleja a la importancia y persistente invisibilidad social de la problemática. En virtud de esto, se concluye que el mayor obstáculo a la protección efectiva a las mujeres con discapacidad no es cómo el Comité trata la violencia sexual, sino su inconstancia al mencionarlo. Por ello, es necesario seguir tratando los artículo 6, 16 y 31 como prioritarios; se debe intensificar, en las listas de cuestiones, las preguntas relativas a datos estadísticos sobre la violencia sexual; caso el tema no haya sido abordado en el informe inicial, tratarlo en la lista de cuestiones de modo más amplio; en cuanto a las observaciones finales, es importante relacionar el artículo 31 a la escasez de datos sobre violencia sexual. En definitiva, se espera que el Comité, como protagonista en el proceso de concienciación a los Estados Partes, aborde el asunto en las observaciones finales elaboradas a partir de 2017 con mayor frecuencia, en consonancia con la perspectiva presentada en la Observación General nº 3.

## ANEXO

Lista de Listas de cuestiones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mencionadas en el trabajo:

Alemania – CRPD/C/DEU/Q/1

Argentina – CRPD/C/ARG/Q/1

Australia – CRPD/C/AUS/Q/1

Austria – CRPD/C/AUT/Q/1

Azerbaiyán – CRPD/C/AZE/Q/1

Bélgica – CRPD/C/BEL/Q/1

Bolivia – CRPD/C/BOL/Q/1

Brasil – CRPD/C/BRA/Q/1

Chile – CRPD/C/CHL/Q/1

China – CRPD/C/CHN/Q/1

Colombia – CRPD/C/COL/Q/1

Costa Rica – CRPD/C/CRI/Q/1

Croacia – CRPD/C/HRV/Q/1

Dinamarca – CRPD/C/DNK/Q/1

Ecuador – CRPD/C/ECU/Q/1

El Salvador – CRPD/C/SLV/Q/1

Emiratos Árabes Unidos – CRPD/C/ARE/Q/1

Eslovaquia – CRPD/C/SVK/Q/1

España – CRPD/C/ESP/Q/1

Etiopia – CRPD/C/ETH/Q/1

Gabón – CRPD/C/GAB/Q/1

Guatemala – CRPD/C/GTM/Q/1

Hungría – CRPD/C/HND/Q/1

Islas Cook – CRPD/C/COK/Q/1

Italia – CRPD/C/ITA/Q/1

Lituania – CRPD/C/LTU/Q/1

Mauricio – CRPD/C/MUS/Q/1

México – CRPD/C/MEX/Q/1

Mongolia – CRPD/C/MNG/Q/1

Nueva Zelanda – CRPD/C/NZL/Q/1

Paraguay – CRPD/C/PRY/Q/1

Perú – CRPD/C/PER/Q/1

Portugal – CRPD/C/PRT/Q/1

Qatar – CRPD/C/QAT/Q/1

República Checa – CRPD/C/CZE/Q/1

República de Corea – CRPD/C/KOR/Q/1

República de Kenia – CRPD/C/KEN/Q/1

República Dominicana – CRPD/C/DOM/Q/1

Serbia – CRPD/C/SRB/Q/1

Suecia – CRPD/C/SWE/Q/1

Tailandia – CRPD/C/THA/Q/1

Túnez – CRPD/C/TUN/Q/1

Turkmenistán – CRPD/C/TKM/Q/1

Ucrania – CRPD/C/UKR/Q/1

Unión Europea – CRPD/C/EU/Q/1

Uganda – CRPD/C/UGA/Q/1

Uruguay – CRPD/C/URY/Q/1

Lista de Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mencionadas en el trabajo:

Alemania – CRPD/C/DEU/CO/1

Argentina – CRPD/C/ARG/CO/1

Australia – CRPD/C/AUS/CO/1

Austria – CRPD/C/AUT/CO/1

Azerbaiyán – CRPD/C/AZE/CO/1

Bélgica – CRPD/C/BEL/CO/1

Bolivia – CRPD/C/BOL/CO/1

Brasil – CRPD/C/BRA/CO/1

Chile – CRPD/C/CHL/CO/1

China – CRPD/C/CHN/CO/1

Colombia – CRPD/C/COL/CO/1

Costa Rica – CRPD/C/CRI/CO/1

Croacia – CRPD/C/HRV/CO/1

Dinamarca – CRPD/C/DNK/CO/1

Ecuador – CRPD/C/ECU/CO/1

El Salvador – CRPD/C/SLV/CO/1

Emiratos Árabes Unidos – CRPD/C/ARE/CO/1

Eslovaquia – CRPD/C/SVK/CO/1

España – CRPD/C/ESP/CO/1

Etiopia – CRPD/C/ETH/CO/1

Gabón – CRPD/C/GAB/CO/1

Guatemala – CRPD/C/GTM/CO/1

Hungría – CRPD/C/HUN/CO/1

Islas Cook – CRPD/C/COK/CO/1

Italia – CRPD/C/ITA/CO/1

Lituania – CRPD/C/LTU/CO/1

Mauricio – CRPD/C/MUS/CO/1

México – CRPD/C/MEX/CO/1

Mongolia – CRPD/C/MNG/CO/1

Nueva Zelanda – CRPD/C/NZL/CO/1

Paraguay – CRPD/C/PRY/CO/1

Perú – CRPD/C/PER/CO/1

Portugal – CRPD/C/PRT/CO/1

Qatar – CRPD/C/QAT/CO/1

República Checa – CRPD/C/CZE/CO/1

República de Corea – CRPD/C/KOR/CO/1

República de Kenia – CRPD/C/KEN/CO/1

República Dominicana – CRPD/C/DOM/CO/1

Serbia – CRPD/C/SRB/CO/1

Suecia – CRPD/C/SWE/CO/1

Tailandia – CRPD/C/THA/CO/1



Túnez – CRPD/C/TUN/CO/1

Turkmenistán – CRPD/C/TKM/CO/1

Ucrania – CRPD/C/UKR/CO/1

Unión Europea – CRPD/C/EU/CO/1

Uganda – CRPD/C/UGA/CO/1

Uruguay – CRPD/C/URY/CO

## BIBLIOGRAFÍA

Artículo en revista:

Almeida, M. (2016). *A banalização da violência contra as mulheres e a “cultura do estupro” no Brasil*. Revista Ágora. Belo Horizonte, v. 1, n. 1, pp. 126-131.

Arenas Conejo, M. (2015). *Una mirada interseccional a la violencia contra las mujeres con diversidad funcional*. Oñati: Socio-legal series, v. 5, n. 2 – violencia de género: intersecciones, pp. 367-388.

Banchs, M. (1996). *Violencia de género*. Caracas: Revista venezolana de análisis de coyuntura, pp. 11-23.

Barile, M. (2002). *Individual-Systemic Violence: Disabled Women’s Standpoint*. Massachusetts: Bridgewater University, pp. 1-14.

Beco, G. (2011). *Article 33(2) of the UN Convention on the rights of persons with disabilities: another role for national human rights institutions?* Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 29/1, pp. 84-106.

Brandwein, P.; Scotch, R. (2001). *The Gender Analogy in the Disability Discrimination Literature*. Ohio: Ohio State Law Journal, vol. 62, número 1, pp. 465-479.

Brownridge, D. (2006). *Partner violence against persons with disabilities: prevalence, risks and explanations*. Winnipeg: Violence against women, vol. 12, número 9, pp. 805-822.

Carvalho, M. E.; Dantas, T.; Silva, J. (2014). *Entrelace entre gênero, sexualidade e deficiência: uma história feminina de rupturas e emponderamento*. São Paulo: Revista brasileira de Educação Especial, vol.20, n.4, pp.555-568.

Crenshaw K. (1991). *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*. Stanford: Stanford Law Review, Vol. 43, Nro. 6, pp. 1241-1299.

Cruz Pérez, M. P. (2012). *Teoría feminista y discapacidad: un complicado encuentro en torno al cuerpo*. Géneros – Revista de investigación y divulgación sobre los estudios de género, Nro 12, año 19, pp. 51-71.

Cuenca Gómez, P. (2012). *Sobre la inclusión de la discapacidad en la teoría de los derechos humanos*. Madrid: Revista de Estudios Políticos (nueva época), número 158, octubre-diciembre, págs. 103-137

\_\_\_\_\_ (2016). *Derechos humanos y discapacidad. De la renovación del discurso justificatorio al reconocimiento de nuevos derechos*. Madrid: Anuario de Filosofía del Derecho (nueva época), tomo XXXII, pp. 54-83.

Dhanda, A. (2008). *Construindo um novo léxico dos direitos humanos: Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência*. (pp. 42-59). Revista Internacional de direitos humanos, número 8.

Díaz Castillo, L. A.; Muñoz Borja, P. (2005). *Implicaciones del género y la discapacidad en la construcción de identidad y la subjetividad*. Bogotá: Revista de Ciencias de la Salud de Bogotá, pp. 156-167.

Diniz, D. (2009). *Modelo social da deficiência: a crítica feminista*. Brasília: Série Anis 28, Letras Livres, pp. 1-8.

Fredrickson, B.; Roberts, T. A. (1997). *Objetification theory. Toward understanding women's lived experiences and mental health risks*. Michigan: Psychology of women quarterly, pp. 173-206.

Galtung, J. (1969). *Violence, peace and peace research*. Oslo: International Peace Research Institute.

Gesser, M.; Nuernberg, A. H.; Toneli, M. J. (2013). *Constituindo-se sujeito na intersecção gênero e deficiência: relato de pesquisa*. Maringá: Revista Psicologia em estudo. Vol. 18, número 3, pp. 419-429.

Giffin, K. (1994). *Gender Violence, Sexuality and Health*. Cad. Saúde Públ., Rio de Janeiro: vol. 10, pp. 146-155.

González Rams, P. (2011). *Las mujeres con discapacidad y sus múltiples desigualdades; un colectivo todavía insivibilizado en los Estados latinoamericanos y en las agencias de cooperación internacional*. Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, pp. 2737-2756.

Groce, N.; Kett, M.; Lang, R.; Trani, J. F. (2011). *Implementing the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities: principles, implications, practice and limitations*. Londres: European Journal of Disability Research, pp. 206-220.

Howland, C.; Hugues, R.; Nosek, M. (2001). *The investigation of abuse and women with disabilities – going beyond assumptions*. Violence against women vol. 7, número 4, abril, pp. 477-499.

Israel, N.; LeRoy, B.; Martin, A.; Milberger, S.; Patchak-Schuster, P.; Potter, L. (2003). *Violence Against Women With Physical Disabilities*. Revista Violence and Victims, Volume 18, Nº 5. Detroit: Wayne State University.

Lawson, A. (2007). *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: New Era or False Dawn?* Syracuse: Syracuse Journal of International Law and Commerce, vol. 34, pp. 563-619.

Lloyd, M. (2001). *The Politics of Disability and Feminism: Discord or Synthesis?* Reino Unido: Sociology, vol. 35, número 3, pp. 715-728.

Mays, J. (2006). *Feminist disability theory: domestic violence against women with a disability*. Melbourne: Disability & Society, pp. 147-158.

Melish, T. J. (2007). *The UN Disability Convention: Historic Process, Strong Prospects and Why the US should Ratify*. Human Rights Brief, 14(2): pp. 1-14.

Mladenov, T. (2013). *The UN Convention on the rights of persons with disabilities and its interpretation*. London: European Journal of Disability Research, pp. 69-82.

Ortoleva, S. (2010). *Women with Disabilities: The Forgotten Peace Builders*. Los Angeles: Loyola Marymount University and Loyola Law School, pp. 83-142.

Parra-Dussan, C. (2010) *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: antecedentes y sus nuevos enfoques*. International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, pp. 347-380.

Philips, J. (1996). *Sexual assault, multiple disabilities and the law*. Revista Australian Feminist Law journal 7, pp. 157-162.

Pié Balaguer, A.; Riu Pascual, C. (2014). *Violencia, mujer y diversidad funcional. La vulnerabilidad aumentada*. Educació Social. Revista d'Intervenció Socioeducativa, 58, pp. 45-64

Pisonero, S. (2007). *La discapacidad social, un modelo para la comprensión de los procesos de exclusión*. Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria. Revista de servicios sociales, n. 41, p. 99-106.

Reyes, M. (2015) *Desafíos y avances en los derechos de las personas con discapacidad: una perspectiva global*. Anuario de Derechos Humanos. N. 11, pp. 17-37.

Sanjosé Gil, A. (2007). *El primer tratado de derechos humanos del siglo XXI: La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. 13 Revista Electrónica de Estudios Internacionales, pp. 1-26.

Silvers, A. (1998). *Reprising Women's Disability: Feminist Identity, Strategy and Disability Rights*. Berkeley: Berkeley Women's Law Journal, pp. 81-116.

Trinidad Nuñez, P. (2012). *La evolución en la protección de la vulnerabilidad por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*. Revista española de Relaciones Internacionales número 4, pp. 125-166.

#### Artículo en internet:

Arnade, S.; Haefner, S. (2011). *Position and Reference Paper on the Significance of References to Women and Gender in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Hamburg: Filia foundation. Recuperado de [www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/DGD/2013\\_Submissions/1.NetzwekArtike1.doc](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/DGD/2013_Submissions/1.NetzwekArtike1.doc)

Asch, A., Blustein, J., Putnam, D., Wasserman, D. (2016). *Disability: Definitions, Models, Experience*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Recuperado de <http://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/disability>.

Barros, L.; Jorge-Birol, A. (2007). *Crime de estupro e sua vítima: a discriminação da mulher na aplicação da pena*. Recuperado de <http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33961805>

Benedet, J.; Grant, I. (2014). *Sexual assault and the meaning of power and authority for women with mental disabilities*. Recuperado de <http://link.springer.com/article/10.1007/s10691-014-9263-3>

Carbert, A., Rioux, M. (2003). *Human Rights and Disability: The International Context*. Cornell University. Recuperado de <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/gladnetcollect>

CERMI (2016). *Informe sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la macroencuesta 2015*. Madrid: Ediciones Cinca. Recuperado de [http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe\\_sobre\\_violencia\\_de\\_genero\\_2.pdf](http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf)

Courtis, C. (2011). *La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ante un nuevo paradigma de protección?* Recuperado de [www.juridicas.unam.mx](http://www.juridicas.unam.mx).

De la Cal, L. (05/08/2016). *“Quiero esterilizar a mi hija” discapacitada*. El Mundo. Recuperado de <http://www.elmundo.es/cronica/2016/08/05/579dc534468aeba8578b4578.html>

Dickens P.; Gizlice Z.; Kupper, L.; Martin, S.; Moracco K.; Ray, N.; Sotres-Alvarez, D. (2006). *Physical and sexual assault of women with disabilities*. *Violence Against Women* 12, pp. 823–837. Recuperado de <http://vaw.sagepub.com/content/12/9/823.full.pdf+html>

Elman, A. (2005). *Confronting the Sexual Abuse of Women with Disabilities*. Harrisburg, PA: VAWnet, a project of the National Resource Center on Domestic Violence/Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence. Recuperado de <http://www.vawnet.org>

Emens, E. (2012). *Framing disability*. Recuperado de <http://illinoislawreview.org/wp-content/ilr-content/articles/2012/5/Emens.pdf>

Frohman, C.; Swift, K. (2016). *Using a holistic human rights framework to advance the rights of women and girls with disability*. Paper Presented at the International Conference: One Decade After the UNCRPD and Women and Girls with Disabilities. Recuperado de [http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2016/01/WWDA\\_Swift\\_Conference\\_Presentation\\_Seoul\\_2016.pdf](http://wwda.org.au/wp-content/uploads/2016/01/WWDA_Swift_Conference_Presentation_Seoul_2016.pdf)

Global Disability Rights now! (5/10/2016). *Resources for Creating Shadow Reports*. Recuperado de <http://www.globaldisabilityrightsnow.org/tools/crpd-shadow-report-guidance>

Gobierno Vasco (2012). *Estudio sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad víctimas de cualquier manifestación de violencia machista*. Recuperado de <http://www.once.es/new/plan-de-igualdad/estrategia-de-lucha-contra-la-violencia-de-genero/Estudio%20especial%20vulnerabilidad%20mujeres%20con%20discapacidad%20-Gobierno%20Vasco%202012.pdf>

Harpur, P. (2009). *Sexism and racism, why not ableism? Calling for a Cultural Shift in the Approach to Disability Discrimination*. Recuperado de <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1037969X0903400304>

Higgins, P. (20/10/2016). *Husband and wife confess to rape and sexual abuse of disabled woman over decade in Northern Ireland 'house of horrors'*. Belfast Telegraph. Recuperado de <http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/husband-and-wife-confess-to-rape-and-sexual-abuse-of-disabled-woman-over-decade-in-northern-ireland-house-of-horrors-35147325.html>

Information for Canadians victims of sexual assault (17/2/2017). *Sexual Assault Statistics in Canada*. Recuperado de <http://www.sexassault.ca/statistics.htm>

International Disability Alliance (2017). *Influencing the list of issues prepared by the CRPD Committee*. Recuperado de [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r8VctxHqMScJ:www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/ida\\_list\\_of\\_issues\\_factsheet.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=es](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:r8VctxHqMScJ:www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/ida_list_of_issues_factsheet.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=es)

Jaime, V.; Soler, A.; Teixeira, T. C. (2015). *Discapacidad y dependência: Uma perspectiva de género*. Recuperado de [http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/Soler\\_Domingo.pdf](http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/ecocri/eus/Soler_Domingo.pdf)

Junta de Andalucía (sin fecha). *Mujeres con discapacidad y violencia sexual: guía para profesionales*. Consejería para la igualdad y bienestar social. Recuperado de [http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/bodies/Personas\\_Discapacidad/Publicacion/Violencia\\_Sexual/Violencia\\_sexual.pdf](http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/bodies/Personas_Discapacidad/Publicacion/Violencia_Sexual/Violencia_sexual.pdf)

Kanter, A. (2007). *The promise and challenge of the United Nations Convention on the Rights of Persons with disabilities*. Pp. 287-322. Recuperado de [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2109836](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2109836)

La Parra, D.; Tortosa, J. M. (2003). *Violencia estructural: una ilustración del concepto*. Recuperado de <http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf>

Lewis, O. (2010). *The Expressive, Educational of Proactive Roles of Human Rights: An Analysis of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Pp. 97-128. Recuperado de [http://mdac.info/sites/mdac.info/files/5\\_-\\_lewis.pdf](http://mdac.info/sites/mdac.info/files/5_-_lewis.pdf)

Lopes, L. V. (2009). *Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, seu Protocolo Facultativo e a Acessibilidade*. Mestrado em Direito PUC/SP. Recuperado de <https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/8653>

López González, M. (2007). *Discapacidad y género – estudio etnográfico sobre mujeres discapacitadas*. Pp. 137-173. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313642>

Mégret, F. (2007). *The Disabilities Convention: Human Rights of Persons with disabilities or Disability Rights?* Pp. 1-28. Recuperado de [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1267723](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1267723)

Melo, K. (12/7/2016). *Mulher é presa por permitir que namorado estuprasse a filha de 14 anos com deficiência*. A Crítica. Recuperado de <http://www.acritica.com/channels/hoje/news/mulher-e-presa-por-permitir-estupro-da-filha-de-14-anos-com-deficiencia-pelo-namorado>

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007). *Indicadores de exclusión social de mujer y discapacidad*. Barcelona: Universidad de Barcelona. Recuperado de [http://www.guiaviolenciadegenero.com/pdf/indicadores\\_exclusion\\_mujer\\_discap.pdf](http://www.guiaviolenciadegenero.com/pdf/indicadores_exclusion_mujer_discap.pdf)

Morris, J. (1998). *Feminism, gender and disability*. Text of a paper presented at a seminar in Sydney, Australia. Recuperado de <http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/morris-gender-and-disability.pdf>

National Sexual Violence Resource Center (17/2/2017). *Statistics about sexual violence*. Recuperado de [http://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications\\_nsvrc\\_factsheet\\_media-packet\\_statistics-about-sexual-violence\\_0.pdf](http://www.nsvrc.org/sites/default/files/publications_nsvrc_factsheet_media-packet_statistics-about-sexual-violence_0.pdf)

ONU (1980). *Report of the world conference of the United Nations Decade for Women: quality, development and peace, Copenhagen*. Recuperado de <https://programaddssrr.files.wordpress.com/2013/05/informe-de-la-segunda-conferencia-mundial-de-sobre-la-mujer-copenhague-1980-en-ingle3a9s.pdf>

\_\_\_\_ (1991). *Recomendación general 18 – Mujeres discapacitadas*. Recuperado de <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm>

\_\_\_\_ (2007). *Discapacidad: De la exclusión a la igualdad – Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Recuperado de <http://www.un.org/spanish/disabilities/documents/toolaction/handbookspanish.pdf>

\_\_\_\_ (2011). *Informe mundial sobre la discapacidad*. Recuperado de [http://www.who.int/disabilities/world\\_report/2011/es/](http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/)

\_\_\_\_ (2013). *Comprender y abordar la violencia contra las mujeres*. Recuperado de [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98821/1/WHO\\_RHR\\_12.37\\_spa.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98821/1/WHO_RHR_12.37_spa.pdf?ua=1), acceso en 23/10/2016

\_\_\_\_ (2015). *Un marco de apoyo a la prevención contra la violencia contra la mujer*. Recuperado de [www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework](http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2015/11/prevention-framework)

\_\_\_\_\_. (2016). *UN Women statement on the Committee on the Rights of Persons with Disabilities*. Recuperado de <http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/6/committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities#sthash.PhzGpsyD.dpuf><http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/6/committee-on-the-rights-of-persons-with-disabilities>

Peláez Narváez, A. (2010). *La perspectiva de género en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Madrid: Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Recuperado de [www.tiempodelosderechos.es/docs/jul10/f2.ppt](http://www.tiempodelosderechos.es/docs/jul10/f2.ppt)

Pelletier Quiñones, P. (2014). *La “discriminación estructural” en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Recuperado de <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-instituto-interamericano-dh/article/viewFile/8518/7615>

Platero, L. (2014). *Metáforas y articulaciones para una pedagogía crítica sobre la interseccionalidad*. Recuperado de <http://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/1219>

Shuterly, B. (5/9/2015). *Caregiver charged with raping disabled woman at West Side facility*. The Columbus Dispatch. Recuperado de <http://www.dispatch.com/content/stories/local/2015/09/04/caregiver-arrested-rape-charge.html>

Unión Europea (2004). *Informe sobre la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión Europea*. Recuperado de [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2004-0102+0+DOC+XML+V0//ES#\\_part5\\_def6](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2004-0102+0+DOC+XML+V0//ES#_part5_def6)

Verdugo Alonso, M. A. (2012). *Victimización de personas con discapacidad intelectual*. Barcelona: III Jornada de Victimología: Victimització en col·lectius de risc: discapacitats psíquics. Recuperado de [http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/formacio\\_recerca\\_i\\_docum/formacio/jornades\\_congressos/victimologia/iii\\_jorn\\_victimologia/miguel\\_angel\\_verdugo.pdf](http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/formacio_recerca_i_docum/formacio/jornades_congressos/victimologia/iii_jorn_victimologia/miguel_angel_verdugo.pdf)

### Libro:

Adesse, L.; Souza, C. (2005). *Violência Sexual no Brasil: perspectivas e desafios*. Brasília: Secretaria Especial de políticas para mulheres.

Aguado Díaz, A. L. (1995) *Historia de las deficiencias*. Madrid: Escuela Libre Editorial.

Arnau Ripollés, M. S. (2005). *Estudio La cara oculta de la violencia: la Violència de Gènere contra la(s) Mujer(es) con disCapacidades*. Castellón: Universitat Jaume I.

Asamblea General del Foro Europeo de la Discapacidad (2011). *2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea - Una herramienta para activistas y responsables políticos*. Budapest.



- Asís Roig, R. (2015). *Sobre discapacidad y derechos*. Madrid: Dykinson.
- Blanck, P.; Kruse, D.; Shur, L. (2013). *People with disabilities – Sidelined or mainstreamed?* Nueva York: Cambridge.
- Bariffi, F.; Cabra de Luna, M. A.; Palacios, A. (2007) *Derechos humanos de las personas con discapacidad: la Convención Internacional de las Naciones Unidas*. Madrid: Ramón Areces.
- \_\_\_\_\_; Palacios, A. (2007). *La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Madrid: Cinca.
- Campling, J. (1979). *Better lives for disabled women*. London: Virago Limited.
- CERMI (2013). *II Plan integral de acción de mujeres con discapacidad 2013-2016*. Madrid: Cinca.
- Charlton, J. (2000). *Nothing about us without us: oppression and empowerment*. Berkeley: University of California Press.
- Cuenca Gómez, P. (2012). *Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Un análisis a la luz de la Convención de la ONU*. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
- Degener, T.; Quinn, G. (2002). *The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability*. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.
- Díaz Funchal, E. (2013). *El reflejo de la mujer en el espejo de la discapacidad - La conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad*. Madrid: Cinca.
- Fernández Santiago, P. (2009). *Compendio sobre la violencia de género y factores de discriminación en la mujer con discapacidad*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Fundación ONCE (2014). *Debate General sobre mujeres y niñas con Discapacidad - Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las personas con Discapacidad*. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
- Goffman, E. (1982) *Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade*. Rio de Janeiro: Ed. Zahar.
- Kanter, A. (2015). *The Development of Disability Rights Under International Law*. Nueva York: Routledge.
- Kittay, E. (1999). *Love's labor: Essays on Women, Equality and Dependence*. Nueva York: Routledge.

Makkonen, T. (2002). *Multiple, compound and Intersectional discrimination: bringing the experiences of the most marginalized to the fore*. Finlandia: Institute for Human Rights, Abo Akademi University

Morris, J. (1991). *Pride against prejudice – Transforming attitudes to disability*. Londres: The Women's Press.

\_\_\_\_\_ (1996). *Encounters with strangers: feminism and disability*. Londres: The Women's Press.

ONU (2007). *From Exclusion to Equality – Realizing the rights of persons with disabilities*. Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol. Ginebra: ONU.

Palacios, A. (2008). *El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas".

\_\_\_\_\_; Romañachi, J. (2006). *El modelo de la diversidad*. Madrid: Editorial Diversitas.

Serra, M. L. (2015). *La esterilización forzosa y/o involuntaria en la mujer con discapacidad intelectual: análisis desde una perspectiva de derechos humanos*. Trabajo de Fin de Máster. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

Trindade, A. A. (2006). *A humanização do Direito Internacional em um mundo em transformação*. Belo Horizonte: Del Rey.

Wendell, S. (1996). *The Rejected Body: feminist philosophical reflections on disability*. Nueva York: Routledge.

### Capítulo de libro:

Albertch, G. (2002). American pragmatism and disability studies. En: Barnes, C.; Barton, L.; Oliver, M. (orgs.). *Disability studies today*. (pp. 18-37). Cambridge: Blackwell Publishers.

Álvarez Ramírez, G. (2012). Igualdad y no discriminación. En: Peláez Narváez, A.; Villarino Villarino, P. (coord.). *Manual la transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad*. Volumen I. (pp. 27-61). Madrid: CINCA.

Asís Roig, R. (2008). Derechos humanos y discapacidad. Algunas reflexiones derivadas del análisis de la discapacidad desde la teoría de los derechos. En: Campoy Cervera, I.; Palacios, A. *Igualdad, no discriminación y discapacidad*. (pp.18-30). Madrid: Dykinson

\_\_\_\_\_ (2009). La Convención como fuente de un nuevo Derecho de la Discapacidad. En: Pérez Bueno, L. C. (dir.). *Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en homenaje al Profesor Rafael de Lorenzo*. (pp. 307-318). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

\_\_\_\_\_ (2010). Las situaciones de dependencia desde un enfoque de derechos humanos. En: Cuenca Gómez, P. (ed.) *Los derechos humanos: la utopía de los excluidos*. (pp. 163-180). Debates del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, n. 11, Madrid: Dykinson.

\_\_\_\_\_ (2016). La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco de interpretación de los Derechos Fundamentales en la Constitución Española. En: Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.). *La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia* (pp. 13-62). Madrid: Ediciones Cinca.

\_\_\_\_\_; Barranco Áviles, M. B.; Cuenca Gómez, P.; Palacios, A. (2010). Algunas reflexiones generales sobre el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Derecho Español. En: Cuenca Gómez, P. (ed.) *Estudios sobre el impacto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Ordenamiento jurídico español*. (pp. 11-34). Madrid: Dykinson.

Ballester, M. A. (2013). Mujer y discapacidad. En: Serra Cristóbal, R. (org). *La discriminación múltiple en los ordenamientos jurídicos español y europeo*. (pp. 155-198). Valencia: Tirant lo Blanch.

Barnes, C.; Barton, L.; Oliver, M. (2002). Introduction. En: Barnes, C.; Barton, L.; Oliver, M. (orgs.). *Disability studies today*. (pp. 1-17). Cambridge: Blackwell Publishers.

Brah, A. (2012). Lineamientos generales en relación a la interseccionalidad. En: Chan, J.; García, S.; Zapata, M. (orgs.). *La interseccionalidad en debate – Actas del Congreso Internacional “Indicadores interseccionales y medidas de inclusión social en instituciones de educación superior”*. Berlín: Freie Universität.

Caballero Pérez, I. (2012). Interseccionalidad. En: Peláez Narváez, A. y Villarino Villarino, P. (coord.). *Manual la transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad*. Volume I. (pp. 13-40). Madrid: CINCA.

\_\_\_\_\_ (2016). La interseccionalidad de género y discapacidad a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En: Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.). *La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia* (pp. 93-127). Madrid: Ediciones Cinca.

Cabra de Luna, M. A. (2009). Un nuevo contexto para la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad. En: Pérez Bueno, L. C. (dir.). *Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en homenaje al Profesor Rafael de Lorenzo*. (pp. 181-221). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

Caparrós, N.; Raya, E. (2013) Derechos humanos y discapacidad: estrategias de empoderamiento. En: Vega Gutiérrez, A. M. (org.). *Derechos humanos: Elementos para un Nuevo Marco Conceptual* (pp. 191-212). Pamplona: Thomson Reuters – Aranzadi.

Cardona Llorens, J. (2007a). Discapacidad y Derechos Humanos. En: Asís Roig, Rafael de; Bondía, David; Maza, Elena (org.). *Los desafíos de los derechos humanos hoy*. (pp. 257-276). Madrid: Dykinson.

\_\_\_\_\_ (2007b). La organización de las Naciones Unidas y las personas con discapacidad. En: Fernández Liesa, C. R. (ed.). *La protección internacional de las personas con discapacidad* (pp. 47-83). Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

\_\_\_\_\_; Sanjosé Gil, A. (2008). Un cambio de paradigma en la protección de los derechos humanos: la Convención de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. En: Ferrer, J.; Sanz, S. (ed.) *Protección de personas y grupos vulnerables – especial referencia al Derecho Internacional y Europeo* (pp. 163-206). Valencia: Tirant lo Blanch.

Carignano, F.; Palacios, A. (2012) Género, discapacidad y acceso a la justicia. En: Rosales, P. *Discapacidad, justicia y Estado: acceso a la justicia de personas con discapacidad*. (pp. 61-68). Buenos Aires: Infojus.

Cisternas Reyes, M. S. (2014). La violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad – Capítulo 8. En: Fundación Once y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. *Medio día de Debate General sobre mujeres y niñas con Discapacidad - Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad* (pp. 37-39). Madrid: Fundación Once.

Conde, A.; Shum, G. (2009). Género y discapacidad como moduladores de la identidad. En: Mañas Viejo, C. (org.). *Mujeres y diversidad funcional (discapacidad): construyendo un nuevo discurso*. (pp. 119-132). Alicante: Universidad de Alicante. Revista Feminismos número 13, junio.

Courtis, C. (2010) El mundo sin barreras como utopía. El modelo de sociedad proyectado por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En: Cuenca Gómez, P. (ed.) *Los derechos humanos: la utopía de los excluidos*. (pp. 63-92). Debates del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, n. 11, Madrid: Dykinson.

Cuenca Gómez, P. (2014) Discapacidad, normalidad y derechos humanos. En: Barranco Avilés, M. C.; Churrua Muguruza C. (Org.) *Vulnerabilidad y protección de los Derechos Humanos* (pp. 71-99). Valencia: Tirant Lo Blanch.

Degener, T. (2014). La interseccionalidad del género y la discapacidad – capítulo 2. En: Fundación Once y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. *Medio día de Debate General sobre mujeres y niñas con Discapacidad - Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad* (pp. 12-15). Madrid: Fundación Once.

Diniz, D.; Santos, W. (2010). Deficiência e direitos humanos: desafios e respostas à discriminação. En: Diniz, D.; Santos, W. *Deficiência e discriminação* (pp. 7-20). Brasília: Letras Livres Ed. UnB.

Fernández, J. M. (2016). La recepción de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en la jurisprudencia constitucional y ordinaria españolas. En: Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.). *La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia* (pp. 187-216). Madrid: Ediciones Cinca.

Gomiz Pascual, M. P. (2014). Violencia contra la mujer con discapacidad. En: Belzunegui, A.; Duran, A.; Tejanos, J. F. et al. *Tendencias en exclusión social y discapacidad* (pp. 95-117). Madrid: Sistema.

Graumann, S.; Harnacke, C. (2012) Core principles of the UN Convention on the Rights of Persons with disabilities: an overview. En: Anderson, J.; Philips, J. (ed.). *Disability and Human Rights – Legal, Ethical and Conceptual Implications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. (pp. 31-47). Utrecht: Netherland Institute of Human Rights.

Hanna, W.; Rogovsky. (2008). Mujer con discapacidad – suma de dos obstáculos. En: Barton, L. (comp.). *Superar las barreras de la discapacidad – 18 años de Disability and Society*. (pp. 51-67). Madrid: Morata.

Hugues, B. (2002). Disability and the body. Barnes, C.; Barton, L.; Oliver, M. (orgs.). *Disability studies today*. (pp. 58-76). Cambridge: Blackwell Publishers.

Iglesias, M. (2005). Participación social de la mujer con discapacidad. En: Casado, R.; De Juan, N. *Inclusión y no discriminación de la mujer con discapacidad* (pp. 81-89). Burgos: Universidad de Burgos.

Jiménez Lara, A. (2007). Conceptos y tipologías de la discapacidad. Documentos y normativas de clasificación más relevantes. Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.) *Tratado sobre Discapacidad*. (177-205). Madrid: Thomson Aranzadi.

Lidón, L. (2016). Mecanismos de seguimiento nacional en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad: el caso de España. En: Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.). *La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia* (pp. 267-294). Madrid: Ediciones Cinca.

Lord, J., Stein, M. (2008). La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, como un medio para la transformación social. En: Mexico. *Mecanismos nacionales de monitoreo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad* (pp.11-26). México DF: Comisión nacional de los derechos humanos.

Lorenzo, R. (2009). Los contornos del Derecho de la Discapacidad. En: Pérez Bueno, L. C. (dir.). *Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en homenaje al Profesor Rafael de Lorenzo* (pp. 181-221). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

\_\_\_\_\_; Palacios, A. (2016). La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad: balance de una década de vigencia. En: Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.). *La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia* (pp. 13-62). Madrid: Ediciones Cinca.

Mañas Viejo, C. (2009). Introducción. En: Mañas Viejo, C. (org.). *Mujeres y diversidad funcional (discapacidad): construyendo un nuevo discurso* (pp. 9-20). Alicante: Universidad de Alicante. Revista Feminismos número 13, junio.

Martínez, I. M. (2016). El examen de España en aplicación de la Convención: asignaturas pendientes y cambio recorrido. En: Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.). *La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – 2006/2016: una década de vigencia* (pp. 217-236). Madrid: Ediciones Cinca.

Merry, S. (2001). Women, Violence and the Human Rights System. En: Agosin, M. (ed.) *Women, Gender and Human Rights*. (pp. 83-98). New Brunswick: Rutgers University Press.

Neves, M. (2001). Justiça e diferença numa sociedade global complexa. En: Souza, J. *Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea*. (337-360). Brasília: Editora Universidade de Brasília.

Oliver, M. (1998). ¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada? En: Barton, L. *Discapacidad y sociedad*. (pp. 34-58). Madrid: Ediciones Morata.

Peláez Narváez, A. (2007). Género y discapacidad. En: Lorenzo, R.; Pérez Bueno, L. C. (dir.) *Tratado sobre Discapacidad*. (pp. 143-173). Madrid: Thomson Aranzadi.

\_\_\_\_\_. (2012). La no discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. En: Álvarez Ramírez, G.; Pérez Bueno, L. C. (ed.) *2003-2012: 10 años de legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España – Estudios en homenaje a Miguel Ángel Cabra de Luna*. (pp. 227-248). Madrid: Ediciones Cinca.

Quinn, G. (2008). La Convención de la organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Instituciones nacionales como catalizadores clave del cambio. En: México. *Mecanismos nacionales de monitoreo de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad* (pp. 27-37). México DF: Comisión nacional de los derechos humanos.

Ramiro, P. (2005). Igualdad y no discriminación de la mujer con discapacidad. En: Casado Muñoz, R.; De Juan Barriuso, N. *Inclusión y no discriminación de la mujer con discapacidad* (pp. 39-43). Burgos: Universidad de Burgos.

Sastre Campo, A. (2009). Hacia un Derecho Internacional de la discapacidad. En: Pérez Bueno, L. C. (dir.). *Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en homenaje al Profesor Rafael de Lorenzo*. (pp. 342-357). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

Schumacher, D. (2014). La interseccionalidad del género y la discapacidad – capítulo 3. En: Fundación Once y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. *Medio día de Debate General sobre mujeres y niñas con Discapacidad - Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad* (pp. 16-19). Madrid: Fundación Once.

Thomas, C. (2002). Disability theory: key ideas, issues and thinkers. En: Barnes, C.; Barton, L.; Oliver, M. (orgs.). *Disability studies today*. (pp. 38-57). Cambridge: Blackwell Publishers.

Trindade, A. A. (1997). Dilemas e desafios da proteção internacional dos direitos humanos. En: Sousa, J. G. et al. *Educando para os direitos humanos – pautas pedagógicas para a cidadania da universidade* (pp. 22-30). Porto Alegre: Fabris.

Trömel, S. (2009). Hacia un Derecho Internacional de la discapacidad. En: Pérez Bueno, L. C. (dir.). *Hacia un Derecho de la Discapacidad. Estudios en homenaje al Profesor Rafael de Lorenzo*. (pp. 1059-1075). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.

Ullrich, E. (2014). Una retrospectiva de la incorporación de la perspectiva de mujeres/género en la Convención de la ONU, desde la perspectiva de una componente de la delegación del Gobierno de Alemania. En: Fundación Once y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. *Medio día de Debate General sobre mujeres y niñas con Discapacidad - Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad* (pp. 75-140). Madrid: Fundación Once.

Van Weele, E. (2012). The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the Context of Human Rights Law. En: Anderson, J.; Philips, J. (ed.). *Disability and Human Rights – Legal, Ethical and Conceptual Implications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. (pp. 9-30). Utrecht: Netherland Institute of Human Rights.